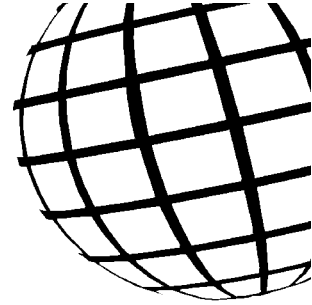


Tesis

Corte Internacional de Justicia, Derecho
Internacional Humanitario y Crimen
Internacional de Genocidio

El valor de la jurisprudencia de la Corte
Internacional de Justicia como verificadora del
Derecho Internacional Humanitario y el Crimen
Internacional de Genocidio



Maestrando: Fabián Raimondo *

2001

* Diploma de Magíster en Relaciones Internacionales (U.N.L.P.) y Abogado (U.N.L.P.).

Sumario

Introducción

A) PARTE GENERAL: LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA Y LA JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL COMO VERIFICADORA DE LAS REGLAS DE DERECHO

I. La Corte Internacional de Justicia

II. La jurisprudencia internacional como verificadora de las reglas de derecho

B) PARTE ESPECIAL: EL VALOR DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA COMO VERIFICADORA DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y EL CRIMEN INTERNACIONAL DE GENOCIDIO

I. La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia como verificadora del Derecho Internacional Humanitario y del crimen internacional de genocidio

II. El valor de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia en los Tribunales *ad hoc* de la Organización de las Naciones Unidas como verificadora del Derecho Internacional Humanitario y el crimen internacional de genocidio

Conclusiones

Lista de abreviaturas

- C. I. C. R = Comité Internacional de la Cruz Roja
- C. I. J.= Corte Internacional de Justicia
- C. P. I.= Corte Penal Internacional
- C. P. J. I. = Corte Permanente de Justicia Internacional
- D. I. D. H. = Derecho Internacional de los Derechos Humanos
- D. I. H. = Derecho Internacional Humanitario
- O. E. A. = Organización de los Estados Americanos
- O. N. U. = Organización de las Naciones Unidas
- T. M. I. = Tribunal Militar Internacional de Nüremberg
- T. P. I. R. = Tribunal Penal Internacional para Ruanda
- T. P. I. Y. = Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia

Introducción

Una cuestión de sumo interés que se presenta en las ciencias jurídicas es aquella relativa a la respuesta que debe brindar un sistema jurídico a los retos generados por la aparición de nuevas problemáticas. Así, surgió la necesidad de establecer mecanismos de protección internacional de los derechos humanos, regular el uso del espacio ultraterrestre, los fondos marinos, o preservar el medio ambiente. Lo mismo puede apuntarse en relación con las respuestas que el derecho internacional debe brindar a los desafíos impuestos por la constante emergencia de nuevos tipos de conflictos armados, ya que la necesidad de proteger a la persona humana y al medio ambiente se torna imperiosa en tales circunstancias.

La Carta de las Naciones Unidas (Carta) establece como uno de sus órganos principales a la Corte Internacional de Justicia (C. I. J.), otorgándole a ésta la posibilidad de ejercer su jurisdicción en controversias jurídicas que competen al derecho internacional y, por ende, en controversias en las que se debaten aspectos vinculados al Derecho Internacional Humanitario (D. I. H.) y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (D. I. D. H.) Es por esta razón, entonces, que ciertos tratados internacionales tales como la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (Convención sobre Genocidio), la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, el Financiamiento y la Instrucción de Mercenarios (Convención sobre Mercenarios) y la Convención sobre la Prohibición de la Preparación, la Fabricación, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y de su Destrucción (Convención sobre Armas Químicas) prevén la sumisión de controversias jurídicas atinentes a su interpretación o aplicación a la jurisdicción de la C. I. J..

Al poco tiempo de instalada, la C. I. J. fue requerida a ejercer su jurisdicción. Así, en la primera sentencia pronunciada sobre el fondo de un asunto, verificó, en un principio general aplicable tanto en tiempos de conflicto armado internacional como de paz, la expresión de una norma internacional consuetudinaria que favorece la protección de los derechos humanos más elementales, tales como la vida y la integridad física de las personas.

El tratamiento por parte de la C. I. J., tanto en procedimientos contenciosos como consultivos, de cuestiones atinentes al D. I. H. y al crimen internacional de genocidio en un período de tiempo que alcanza los 50 años, ha permitido sentar una jurisprudencia en la materia. La elaboración de tal jurisprudencia por parte de la C. I. J. – órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas (O. N. U.) – resulta de gran importancia no sólo porque un buen número de los asuntos inscriptos en su registro general se refiere a alegaciones de violaciones a normas de D. I. H. y a la interpretación y aplicación de normas convencionales y consuetudinarias sobre el crimen internacional de genocidio, sino también porque la verificación de normas consuetudinarias de D. I. H. y las relativas al crimen internacional de genocidio interesa a todo otro tribunal internacional que deba aplicar este tipo de normas. El mejor ejemplo al respecto lo ofrecen el Tribunal Internacional para el Enjuiciamiento de los Presuntos Responsables de las Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario Cometidas en el Territorio de la Ex Yugoslavia a Partir desde 1991 (T. P. I. Y.), y el Tribunal Internacional para el Enjuiciamiento de Presuntos Responsables de Actos de Genocidio u Otras Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario Cometidas en el Territorio de Ruanda y los Ciudadanos Ruandeses Presuntamente Responsables de tales Actos o Violaciones Cometidos en el Territorio de Estados Vecinos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1994 (T. P. I. R.) ambos establecidos por el Consejo de Seguridad de la O. N. U. en virtud del Capítulo VII de la Carta. Por otra parte, debe tenerse presente que la Corte Penal Internacional (C. P. I.) debe aplicar, de acuerdo a su Estatuto, principios y reglas de derecho internacional incluyendo los principios del derecho internacional de los conflictos armados.

Además, debe considerarse que el Tribunal Militar Internacional de Nüremberg (T. M. I.) vinculó el crimen de genocidio con la existencia de un conflicto armado ya que lo consideraba

una especie de los crímenes contra la humanidad. Con el surgimiento a partir del Artículo 1 de la Carta de la O. N. U. del D. I. D. H., se inició el proceso de desvinculación del genocidio con la existencia de un conflicto armado. Testimonio de ello es la adopción, en 1948, de la Convención sobre Genocidio. La Convención establece, así, que el crimen de genocidio puede cometerse tanto en tiempos de paz como de guerra.

Las razones mencionadas, en suma, merecen el estudio y análisis de la jurisprudencia de la C. I. J. vinculada al D. I. H. y al crimen internacional de genocidio; verificar como a lo largo de cincuenta años ella ha señalado e interpretado una serie de principios fundamentales en la materia y establecer el modo en que la jurisprudencia de la C. I. J. - que en tanto que "decisiones judiciales" sólo es un medio auxiliar para la determinación de la existencia de una regla de derecho - impacta en la práctica judicial de los tribunales penales internacionales establecidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, resulta de particular interés. En definitiva, éste es el objetivo que se persigue en la realización de esta tesis.

Su estructura comporta dos partes: en la primera, de carácter general, se tratarán cuestiones referidas a la C. I. J. (Capítulo I) y a la jurisprudencia internacional como verificadora de las reglas de derecho (Capítulo II). En la segunda, se estudiará y analizará especialmente la jurisprudencia de la C. I. J. como verificadora del D. I. H. y del crimen internacional de genocidio (Capítulo I) y el valor e impacto de tal jurisprudencia en la práctica judicial del T. P. I. Y. y el T. P. I. R.. Finalmente, claro está, serán expuestas las conclusiones del autor.

Parte General: La Corte Internacional de Justicia y la Jurisprudencia Internacional como verificadora de las Reglas de Derecho

I. La Corte Internacional de Justicia

a. Su creación; funciones y composición

La C. I. J. es uno de los seis órganos principales de la O. N. U.¹ Como tal, su creación fue plasmada en la Carta constitutiva de esta organización que fuera adoptada durante la Conferencia de San Francisco el 26 de junio de 1945. Esta creación parece responder, en alguna medida, a la circunstancia de que en la Carta se menciona, a modo de ejemplo, al arreglo judicial como uno de los métodos de solución pacífica de las controversias entre Estados. En efecto, en el Artículo 33.1 de la Carta se estipula:

Art. 33. 1. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.

Los Estados Miembros de la O. N. U. atribuyeron a la C. I. J. importantes funciones judiciales. En efecto, en el Capítulo XIV de la Carta se establece:

Art. 92. La Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial principal de las Naciones Unidas; funcionará de conformidad al Estatuto anexo, que está basado en el de la Corte Permanente de Justicia Internacional, y que forma parte integrante de esta Carta.

Jiménez de Aréchaga sostiene que una consecuencia de lo normado por el Artículo 92 de la Carta es la necesidad de una delimitación precisa entre las jurisdicciones de la C. I. J. y los órganos políticos de la O. N. U., en especial, el Consejo de Seguridad.² El Profesor Mosler, por su parte, comenta este artículo de la Carta señalando que la C. I. J. tiene características especiales que la distinguen de otras instituciones judiciales internacionales. Por ejemplo, observa que es el único cuerpo judicial internacional abierto a todos los Estados y que tiene la posibilidad de convertirse en un tribunal general de la comunidad internacional toda.³ Rosenne, a su vez, avanza que el hecho de que la C. I. J. sea designada en la Carta como el órgano judicial principal de la O. N. U. significa que no es el único órgano judicial que puede ser instituido por ésta. Agrega que en la Carta se reconoce implícitamente que no existe relación jerárquica alguna entre los diferentes órganos judiciales establecidos por o con los auspicios de la O. N. U..⁴

El Estatuto de la C. I. J. desarrolla ciertos principios generales enunciados en el Capítulo XIV de la Carta. Los artículos que lo componen están agrupados en cinco capítulos, a saber: "Organización de la Corte" (Artículos 2-33); "Competencia de la Corte" (Artículos 34-38); "Procedimiento" (Artículos 39-64); "Opiniones Consultivas" (Artículos 65-68) y "Enmiendas" (Artículos 69-70). Asimismo, confiere a la C. I. J. la facultad de elaborar su Reglamento, teniendo éste por objeto completar las reglas generales enunciadas en el Estatuto, como, por ejemplo, las disposiciones relativas al funcionamiento de la C. I. J. y de la Secretaría, y al procedimiento. Así, en lo pertinente, el Estatuto estipula:

¹ *Carta de las Naciones Unidas*, Artículo 7.1.

² Jiménez de Aréchaga, Eduardo, "Chapitre XIV, Article 92", en Jean-Pierre Cot et al. (ed.), *La Charte des Nations Unies, Commentaire article par article*, 2e édition revue et augmentée, Paris, Economica, 1991, p. 1251.

³ Mosler, Hermann, "Chapter XIV. The International Court of Justice. Article 92", en Bruno Simma (ed.), *The Charter of the United Nations, A Commentary*, s.l., Oxford University Press, 1994, p. 973 y ss.

⁴ Rosenne, Shabtai, *The Law and Practice of the International Court, 1920-1996*, The Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1997, Volume I, The Court and the United Nations, p. 140 y ss.

Art. 30. 1. La Corte formulará un reglamento mediante el cual determinará la manera de ejercer sus funciones. Establecerá, en particular, sus reglas de procedimiento.

El 5 de mayo de 1946 la C. I. J. adoptó su Reglamento. En 1967, debido a la experiencia adquirida y a las transformaciones operadas en las relaciones internacionales, comenzó una revisión de tal instrumento por medio de la institución de un comité. El 10 de mayo de 1972, adoptó enmiendas parciales que entraron en vigor el 1 de septiembre del mismo año. El 14 de abril de 1978, adoptó un Reglamento totalmente revisado que entró en vigor el 1 de julio del mismo año.⁵ Por último, nuevas enmiendas entraron en vigor en el año 2001.⁶

La C. I. J. es un cuerpo de magistrados independientes.⁷ Los jueces son elegidos por los Estados Miembros de la O. N. U. y otros Estados Partes al Estatuto.⁸ El número de magistrados que la integran fue fijado en quince⁹ y la duración de su mandato en nueve años, con posibilidad de reelección.¹⁰ Se renuevan por tercios cada tres años¹¹ y si un juez fallece o dimite durante su mandato se procede a una elección complementaria para el período de tiempo restante.¹²

Como fuera referido *ut supra*, la C. I. J. es uno de los órganos principales de la O. N. U.¹³ Consecuentemente, es en el marco de esta organización internacional donde se realiza la elección de sus jueces. Señala Stephen Schwebel, ex Presidente de la C. I. J., que esta selección o elección de los jueces constituye un proceso político a veces conectado con otros procesos electorales de la organización.¹⁴ A los fines de implementar tal elección, el Estatuto establece que la Asamblea General – donde son admitidos en la ocasión los representantes de los Estados Partes al Estatuto sin ser miembros de la O. N. U. –¹⁵ y el Consejo de Seguridad – donde el derecho de veto no se permite en la oportunidad y la mayoría requerida es de ocho votos – son los encargados de realizarla.¹⁶ Ambos órganos votan al mismo tiempo independientemente el uno del otro.¹⁷ Para ser declarado elegido, un candidato debe haber obtenido la mayoría absoluta en uno y otro órgano,¹⁸ lo que obliga a menudo a realizar numerosas votaciones.¹⁹ Generalmente, éstas se realizan en Nueva York en ocasión de la sesión anual de la Asamblea General. Los miembros elegidos entran en funciones el día 6 de febrero siguiente²⁰ y luego la C. I. J. elige en escrutinio secreto a su Presidente y su Vicepresidente para los próximos tres años.²¹ El derecho de proponer candidatos pertenece a todos los Estados Partes al Estatuto.²² La C. I. J. no puede tener más de un juez nacional del mismo Estado.²³ Si dos de los candidatos de la misma nacionalidad son elegidos, prevalece

⁵ International Court of Justice (ed.), *The International Court of Justice*, fourth edition, The Hague, 1996, p. 20

⁶ Véase *International Court of Justice, Rules of Court (1978), as amended on 5 September 2000*.

⁷ *Estatuto de la Corte Internacional de Justicia*, Artículo 2.

⁸ *Estatuto de la Corte Internacional de Justicia*, Artículo 4.

⁹ *Estatuto de la Corte Internacional de Justicia*, Artículo 3.1.

¹⁰ *Estatuto de la Corte Internacional de Justicia*, Artículo 13.1.

¹¹ *Estatuto de la Corte Internacional de Justicia*, Artículo 13, párrafos 1 y 2.

¹² *Estatuto de la Corte Internacional de Justicia*, Artículos 14 y 15.

¹³ *Carta de las Naciones Unidas*, Artículo 7.1.

¹⁴ Schwebel, Stephen M., "The Impact of the International Court of Justice", *Boutros Boutros-Ghali Amicorum Discipolorumque Liber*, Bruxelles, Bruylant, 1998, Vol. I, p. 663.

¹⁵ *Carta de las Naciones Unidas*, Artículo 93, *Estatuto de la Corte Internacional de Justicia*, Artículo 35.3.

¹⁶ *Estatuto de la Corte Internacional de Justicia*, Artículo 4.1.

¹⁷ *Estatuto de la Corte Internacional de Justicia*, Artículo 8.

¹⁸ *Estatuto de la Corte Internacional de Justicia*, Artículo 10.1.

¹⁹ International Court of Justice (Ed.), *The International Court of Justice*, fourth edition, The Hague, 1996, p. 23.

²⁰ *International Court of Justice, Rules of Court (1978) as amended on 5 September 2000*, Artículo 2.1.

²¹ *Estatuto de la Corte Internacional de Justicia*, Artículo 21.1.

²² *Estatuto de la Corte Internacional de Justicia*, Artículo 4, párrafos 1 y 2.

²³ *Estatuto de la Corte Internacional de Justicia*, Artículo 3.1.

aquel de mayor edad.²⁴ Al mismo tiempo, tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad deben tener en vista que los jueces aseguren en su conjunto la representación de las grandes civilizaciones y de los principales sistemas jurídicos del mundo.²⁵ Schwebel asimismo observa que es por esta circunstancia que la C. I. J. puede ser caracterizada como un tribunal de composición universal.²⁶

Contrariamente a la mayoría de otros órganos de las organizaciones internacionales, la C. I. J. no se compone de representantes gubernamentales: los jueces son magistrados independientes.²⁷ En relación con las condiciones que deben reunir los miembros de la C. I. J., el Estatuto establece que deben ser elegidos...

... sin tener en cuenta su nacionalidad, de entre personas que gocen de alta consideración moral y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones judiciales en sus respectivos países, o que sean jurisconsultos de reconocida competencia en materia de Derecho Internacional.²⁸

La C. I. J. tiene su sede en La Haya,²⁹ ciudad donde reside el gobierno holandés; y tiene la facultad - jamás utilizada hasta el momento - de sesionar en otro lugar, si así lo decidiere.³⁰

Los miembros de la C. I. J. no pueden desempeñar ninguna otra ocupación de carácter profesional o función política o administrativa,³¹ ni ser agentes, consejeros o abogados en ningún asunto.³²

Un juez puede participar como tal en un negocio en el cual una de las partes es el Estado de su nacionalidad.³³ Si el juez es el Presidente, en la ocasión cede al Vicepresidente su calidad de tal. Las partes que no tengan un juez de su nacionalidad entre los miembros de la C. I. J. tienen la facultad de designar una persona de su elección en calidad de juez *ad hoc*, el que actuará en completa igualdad con los jueces miembros.³⁴ Cuando comparecen más de dos Estados en un proceso se prevé que aquellos que tengan un interés común deben designar un sólo y mismo juez *ad hoc*.³⁵ No estando sometido a ninguna condición de nacionalidad, el juez *ad hoc* puede ser extranjero del Estado que lo designa.³⁶

La función de la C. I. J. es la de decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas.³⁷ Asimismo, puede emitir opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas que le solicite la Asamblea General o el Consejo de Seguridad y los otros órganos de la O. N. U. y los organismos especializados que sean autorizados por la Asamblea General, sobre cuestiones jurídicas que surjan dentro de sus esferas de actividades.³⁸ De este modo, el establecimiento de la C. I. J. coadyuva a la realización de uno de los propósitos fundamentales de la O. N. U. contenido en la Carta en el Artículo 1. Esto es:

²⁴ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Artículo 10.3.

²⁵ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Artículo 9.

²⁶ Schwebel, Stephen M., "The Impact of the International Court of Justice", *Boutros Boutros-Ghali Amicorum Discipolorumque Liber*, Bruxelles, Bruylant, 1998, Vol. I, p. 663.

²⁷ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Artículo 2.

²⁸ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Artículo 2.

²⁹ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Artículo 22.1.

³⁰ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Artículo 22.1.

³¹ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Artículo 16.1.

³² Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Artículo 17.1.

³³ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Artículo 31.1.

³⁴ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Artículo 31, parágrafos 3 y 6.

³⁵ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Artículo 31.5.

³⁶ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Artículo 31, parágrafos 2 y 3.

³⁷ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Artículo 38.1.

³⁸ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Artículo 65.1; Carta de las Naciones Unidas, Artículo

" 1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del Derecho Internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz."

b. Las partes; la decisión

Para que una controversia sea válidamente sometida a la C. I. J., es necesario que oponga a dos o más Estados.³⁹

La C. I. J. está abierta a la casi totalidad de los Estados, es decir, los Estados Miembros de la O. N. U. que al aceptar las obligaciones de la Carta han adherido también al Estatuto de la C. I. J.,⁴⁰ parte integrante de aquélla.⁴¹ Suiza, que ha adherido al Estatuto de la C. I. J. sin ser miembro de la O. N. U. debió satisfacer las condiciones determinadas por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad, esto es, aceptación de las disposiciones del Estatuto, obligación de conformarse a las decisiones de la C. I. J. y pago de una contribución anual para sufragar sus gastos.⁴² Todo otro Estado que no sea miembro de la O. N. U. ni parte del Estatuto de la C. I. J. puede depositar en la Secretaría una declaración, conforme a condiciones determinadas por el Consejo de Seguridad, por la cual acepte su jurisdicción y asuma la obligación de ejecutar de buena fe sus decisiones en lo relativo a una determinada categoría de controversias.⁴³

Por otra parte, es necesario tener presente que un principio fundamental de la solución pacífica de controversias en el plano internacional es que la jurisdicción de los tribunales internacionales depende en última instancia del consentimiento de los Estados involucrados.⁴⁴ Por tanto, éstos deben aceptar que la controversia o la categoría de controversia de la cual se trata pueda ser llevada ante la C. I. J..

La decisión de la C. I. J. es obligatoria sólo para las partes en litigio,⁴⁵ definitiva e inapelable.⁴⁶ Cuando los Estados ratifican la Carta de la O. N. U. se comprometen a conformarse a la decisión adoptada por la C. I. J. en todo litigio en el cual sean partes.⁴⁷ Los otros Estados admitidos a presentarse ante ella asumen el mismo compromiso al momento de adherir al Estatuto o al momento de depositar una declaración ante su Secretario.⁴⁸

En relación con el procedimiento consultivo, el Estatuto de la C. I. J. establece que los organismos autorizados por la Carta de la O. N. U.⁴⁹ para solicitar una opinión consultiva deberán exponer la cuestión a la C. I. J. mediante solicitud escrita y en forma precisa, acompañando en la oportunidad todos los documentos que puedan arrojar luz sobre la

³⁹ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Artículo 34.1.

⁴⁰ Carta de las Naciones Unidas, Artículo 93.1.

⁴¹ Carta de las Naciones Unidas, Artículo 92.

⁴² Conforme Carta de las Naciones Unidas, Artículo 93.2.

⁴³ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Artículo 35.2.

⁴⁴ Barberis, Julio, *Formación del Derecho Internacional*, Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 1994, p. 206.

⁴⁵ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Artículo 59.

⁴⁶ Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, Artículo 60.

⁴⁷ Carta de las Naciones Unidas, Artículo 94.1.

⁴⁸ International Court of Justice (Ed.), *The International Court of Justice*, fourth edition, The Hague, 1996, p. 73.

⁴⁹ Según el Artículo 96.1 de la Carta de las Naciones Unidas sólo la Asamblea General y el Consejo de Seguridad se encuentran autorizados por aquélla a solicitar una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia. El Artículo 96.2 de la Carta prevé también que la Asamblea General puede autorizar a solicitar una opinión consultiva a los otros órganos u organismos especializados de las Naciones Unidas, sobre cuestiones jurídicas que surjan dentro de la esfera de sus actividades.

cuestión.⁵⁰ La opinión consultiva así planteada será comunicada por el Secretario a todos los Estados que tengan derecho a comparecer ante aquélla. A los fines del ejercicio de las funciones consultivas, la C. I. J. utilizará - en la medida que las considere aplicables - las disposiciones estatutarias concernientes al procedimiento contencioso.⁵¹ El Secretario notificará del mismo modo a los Estados con derecho a comparecer y a toda organización internacional que aquélla considere pertinente, los que pueden presentar exposiciones escritas dentro del término que estime corresponder. Los Estados y las organizaciones internacionales públicas que hayan presentado exposiciones escritas u orales tienen derecho a discutir las exposiciones presentadas por otros Estados u organizaciones, en las condiciones y términos fijados por la C. I. J..⁵²

La C. I. J. pronunciará sus sentencias y opiniones consultivas en audiencia pública.⁵³ Por cierto, las sentencias son vinculantes para las partes y para el caso que deciden, en tanto que las opiniones se definen esencialmente por su carácter consultivo mismo, es decir, que no tienen efectos obligatorios. En este respecto, es de señalar que cuando la C. I. J. en sus sentencias se refiere a las "decisiones judiciales" en tanto que fuente de derecho en virtud del Artículo 38, parágrafo 1 (d) de su Estatuto, no distingue entre sus sentencias y opiniones consultivas. Recurre en igual modo a ambos tipos de pronunciamientos.⁵⁴ Es decir, si bien técnicamente las opiniones consultivas no constituyen jurisprudencia, la doctrina que de ellas emana también contribuye a aclarar el sentido y alcance de las normas internacionales positivas.

c. El derecho aplicable

Resulta necesario tener presente que la C. I. J., órgano judicial principal de la O. N. U., administra justicia y lo hace dentro de los límites que se le han asignado en la Carta y en el Estatuto. Hoy en día, no existe otro órgano judicial que tenga la misma aptitud de ocuparse de los problemas de la comunidad internacional en su conjunto y al cual los Estados puedan recurrir de un modo tan general para defender la primacía del derecho.

Y, precisamente, es el Artículo 38 del Estatuto que estipula el derecho a aplicar por la C. I. J. sea ante un caso contencioso como ante un pedido de opinión consultiva. Así, el Artículo 38 dispone:

... (l)a Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:

a) las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes;

b) la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho;

c) los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;

d) las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59.

El Artículo 38, parágrafo 1, del Estatuto de la C. I. J., es casi la réplica de la correspondiente disposición del estatuto de su antecesora, la Corte Permanente de Justicia Internacional (C. P. J. I.). Tal como se refirió a sí misma en el *Asunto sobre el Sudoeste Africano (segunda fase)*, ella no es un órgano legislativo sino que más bien se encuentra obligada a aplicar el derecho

⁵⁰ *Estatuto de la Corte Internacional de Justicia*, Artículo 65.

⁵¹ *Estatuto de la Corte Internacional de Justicia*, Artículo 68.

⁵² *Estatuto de la Corte Internacional de Justicia*, Artículo 66.

⁵³ *Estatuto de la Corte Internacional de Justicia*, Artículos 58 y 67.

⁵⁴ Rosenne, Shabtai, *The Law and Practice of the International Court, 1920-1996*, The Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1997, Volume III, Procedure, p. 1754.

tal como lo encuentra, y no a crearlo.⁵⁵ Como observa Rosenne, la máxima *iura novit curia* controla el modo en el cual la C. I. J. trata las cuestiones de derecho internacional. De esta circunstancia, se derivan dos consecuencias inmediatas: por un lado, el derecho internacional no es una cuestión probatoria para las partes, sino más bien una cuestión de investigación sistemática por parte de la C. I. J.; por el otro, ésta no se encuentra limitada por los argumentos desarrollados por las partes, sino que es libre de conducir sus propias investigaciones y formular sus propias conclusiones.⁵⁶

En relación con la primera fuente enunciada en el Artículo 38.1 del Estatuto de la C. I. J., puede apuntarse que la expresión "convenciones internacionales" es laxa. Así, debe interpretarse no sólomente comprensiva de los tratados o convenciones de carácter bilateral o multilateral que son oficialmente denominados de este modo, sino también de todo otro acuerdo internacional - incluidos aquellos que carecen de carácter formal - con la condición de que establezcan reglas jurídicas expresamente reconocidas por los Estados en causa.⁵⁷

En cuanto a la costumbre internacional, es de recordar que las normas de *ius cogens*, es decir, las normas imperativas de derecho internacional general (Artículo 53, Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados), prevalecen sobre las normas convencionales y las consuetudinarias dispositivas. Si bien las normas imperativas de derecho internacional general se presentan como normas generales consuetudinarias, no todas las normas consuetudinarias son normas de *ius cogens*. Algunas de entre ellas tienen los efectos de *ius cogens*, y otras de *ius dispositivum*.⁵⁸ Una norma es dispositiva cuando aún siendo fuente formal de derechos y obligaciones para las partes, puede ser modificada o derogada por un acuerdo posterior celebrado por estas últimas.⁵⁹ Por el contrario, las normas imperativas - *ius cogens* - no admiten acuerdo en contrario ya que protegen los intereses fundamentales o esenciales que la comunidad internacional necesita para su supervivencia y, en consecuencia, imposibilitan a los sujetos sustraerse de ellas.⁶⁰ Degan avanza que el *ius dispositivum* se aplica en ausencia de un tratado o costumbre en contrario y que se encuentra sujeto al principio general de derecho *lex specialis derogat legi generali*. Esto implica que los Estados son libres, en sus relaciones mutuas, de regular un asunto en un modo distinto al previsto por la norma consuetudinaria general.⁶¹ En otras palabras, una norma de derecho internacional general no es aplicable entre las partes en caso de que el punto esté reglado expresamente de otra manera en un tratado en vigor para ellas. Asimismo, si un tratado guarda silencio sobre algún punto en la materia, las normas establecidas al respecto por la costumbre internacional, en tanto que no sean contrarias al tratado, rigen plenamente como aclaratorias o complementarias del instrumento convencional.⁶²

Resulta de mayor interés, en este estadio, una referencia a la relación existente entre crímenes internacionales, *ius cogens* y obligaciones *erga omnes*. Como regla general, se

⁵⁵ *South West Africa Case (second fase)*, ICJ Report 1966, p. 48, par. 89.

⁵⁶ Rosenne, Shabtai, *The Law and Practice of the International Court, 1920-1996*, The Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1997, Volume III, Procedure, p. 1592.

⁵⁷ International Court of Justice (Ed.), *The International Court of Justice*, fourth edition, The Hague, 1996, p. 90.

⁵⁸ Degan, V.D., *Sources of International Law*, The Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1997, p. 217.

⁵⁹ Gutiérrez Posse, Hortensia D.T., *Moderno Derecho Internacional y Seguridad Colectiva*, Buenos Aires, Zavalía Editor, Buenos Aires, 1995, p. 282. Ver asimismo Acosta Estévez, José, "Normas del *ius cogens*, efecto *erga omnes*, crimen internacional y la teoría de los círculos concéntricos", *Anuario de Derecho Internacional*, Universidad de Navarra, 1995, XI, p. 3 y ss..

⁶⁰ Acosta Estévez, José, "Normas del *ius cogens*, efecto *erga omnes*, crimen internacional y la teoría de los círculos concéntricos", *Anuario de Derecho Internacional*, Universidad de Navarra, 1995, XI, pp. 4-5.

⁶¹ Degan, V.D., *Sources of International Law*, The Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1997, p. 237.

⁶² Podestá Costa, Luis et al., *Derecho Internacional Público*, segunda reimpresión de la edición actualizada 1985, Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1996, 1, p. 17.

sostiene que la eficacia de las normas de *ius cogens* es siempre *erga omnes*.⁶³ En cambio, la eficacia de las normas dispositivas no siempre posee tales efectos.⁶⁴ También, que los crímenes internacionales que alcanzan categoría de *ius cogens* constituyen obligaciones *erga omnes* de carácter inderogable,⁶⁵ cuyas consecuencias jurídicas son el deber de juzgar o extraditar, la imprescriptibilidad de tales crímenes, la irrelevancia del cargo oficial y la defensa de órdenes superiores, la aplicación universal de estas obligaciones tanto en tiempos de paz como de guerra, la inderogabilidad por estado de emergencia, y jurisdicción universal sobre los perpetradores de tales crímenes.⁶⁶ Así, puede apreciarse que en tanto el *ius cogens* alude al estatuto legal de ciertos crímenes internacionales, la *obligatio erga omnes* lo hace en relación con las consecuencias jurídicas derivadas de la caracterización de un crimen como *ius cogens*, es decir, los efectos. Ésta es la diferencia entre *ius cogens* y *obligatio erga omnes*. Además, debe tenerse presente que la violación de una norma de *ius cogens* no siempre constituye un crimen internacional, pues sólo será calificada de este modo cuando la violación a la norma sea grave. Finalmente, es de tener en cuenta que la violación de una norma dispositiva con efecto *erga omnes* no constituye un crimen internacional, como tampoco la violación grave de una norma dispositiva con efecto *erga omnes*.⁶⁷

Los principios generales de derecho tienen por función autorizar a la C. I. J. a aplicar los principios generales del derecho interno de los Estados, independientemente de cuáles sean las fuentes formales que cada uno establezca. La razón de su previsión en el Estatuto responde a la necesidad de salvaguardar a la C. I. J. de la posibilidad de un *non liquet*, al menos para la decisión de un caso contencioso, y su validez no deriva del consentimiento de las partes en tanto y en cuanto la C. I. J. considere que los Estados deberían reconocerlos.⁶⁸ Los principios generales de derecho deben distinguirse de otros principios legales que a menudo son confundidos con aquéllos. Éstos, son llamados "derechos fundamentales y obligaciones de los Estados", o "principios generales del derecho internacional", o "principios legales de aplicación universal", o "principios fundamentales del derecho internacional", tal como la C. I. J. los ha llamado en reiteradas oportunidades. Estos principios son muy amplios, y se supone que obligan a todos los Estados y otros sujetos de derecho internacional sin corresponderse enteramente con la calificación de *ius cogens*. Por otra parte, tampoco son los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. En efecto, parte de la doctrina afirma que ellos forman parte del derecho internacional consuetudinario y es más o menos conteste que son los siguientes: el derecho a la existencia o preservación; el derecho a la independencia o soberanía; el derecho a la igualdad jurídica; el derecho a ser respetado y el derecho a las comunicaciones internacionales.⁶⁹ Otro sector de la doctrina, considera que existen ciertas reglas fundamentales cuya observancia es esencial para la supervivencia de la sociedad y que no pueden derivar de la voluntad de los Estados. Éstos pueden salvaguardarlas por tratados o por medio de la costumbre, pero su "fuente" debe ser buscada en algún otro

⁶³ Acosta Estévez, José, "Normas del *ius cogens*, efecto *erga omnes*, crimen internacional y la teoría de los círculos concéntricos", *Anuario de Derecho Internacional*, Universidad de Navarra, 1995, XI, p. 12.

⁶⁴ Acosta Estévez, José, "Normas del *ius cogens*, efecto *erga omnes*, crimen internacional y la teoría de los círculos concéntricos", *Anuario de Derecho Internacional*, Universidad de Navarra, 1995, XI, p. 13.

⁶⁵ Bassiouni enumera como crímenes internacionales, los siguientes: agresión, genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, piratería, esclavitud, y tortura. Bassiouni, Cherif, "International crimes: *ius cogens* and *obligatio erga omnes*", *Law and Contemporary Problems*, Volume 59, Autumn 1996, Number 4, p. 68.

⁶⁶ Bassiouni, Cherif, "International crimes: *ius cogens* and *obligatio erga omnes*", *Law and Contemporary Problems*, Vol. 59, n° 4, autumn 1996, p. 63.

⁶⁷ Acosta Estévez, José, "Normas del *ius cogens*, efecto *erga omnes*, crimen internacional y la teoría de los círculos concéntricos", *Anuario de Derecho Internacional*, Universidad de Navarra, 1995, XI, p. 22.

⁶⁸ Rosenne, Shabtai, *The Law and Practice of the International Court, 1920-1996*, The Hague/Boston London, Martinus Nijhoff Publishers, 1997, Volume III, Procedure, p. 1602 y ss..

⁶⁹ Degan, V.D., *Sources of International Law*, The Hague/ Boston/ London, Martinus Nijhoff Publishers, 1997, p. 83 y ss. En el mismo sentido, ver Podestá Costa, Luis et al., *Derecho Internacional Público*, segunda reimpresión de la edición actualizada 1985, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1996, 1, p. 18.

lugar. Por ejemplo, se cita al principio de la inviolabilidad diplomática – que es una condición para el establecimiento y mantenimiento de las relaciones entre Estados -. En efecto, los detalles de los privilegios e inmunidades son gobernados por tratados o por la costumbre. Así, el fundamento de validez de tales principios que todos los miembros de la comunidad internacional deben respetar no puede ser explicado con referencia a los medios de creación del derecho internacional citados precedentemente, sino que la respuesta subyace en fundamentos filosóficos, y parcialmente en argumentos racionales.⁷⁰

Desde un punto de vista teórico legal, se observa que las convenciones internacionales, la costumbre internacional y los principios generales de derecho describen los tipos de normas que conforman el derecho internacional, esto es, el derecho internacional que la C. I. J. debe aplicar al momento de solucionar las controversias internacionales que le fueren sometidas. Por el contrario, las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones conforman un distinto aspecto, denominado en el Estatuto de la C. I. J. medios de determinación de las reglas de derecho.

⁷⁰ Mosler, Hermann, "The International Society as a Legal Community", *Recueil des Cours*, Académie de Droit International, 1974, IV, pp. 83-85.

II. La jurisprudencia internacional como verificadora de las reglas de derecho

a. El valor de la jurisprudencia internacional

Las decisiones judiciales, sentencias, opiniones consultivas, ordenanzas de la C. I. J. misma, y, en menor medida, de otros tribunales internacionales o nacionales, asumen un lugar prominente en la práctica de la C. I. J. en particular y de los tribunales internacionales en general.⁷¹ Asimismo, cabe recordar que todo régimen legal se encuentra conformado por normas jurídicas. Por consiguiente, el estudio de las fuentes del derecho internacional es fundamental a la hora de analizar este ordenamiento y abordar las cuestiones que se vinculan a él.⁷²

La C. I. J. hace un uso frecuente como precedente tanto de sus sentencias como de sus opiniones consultivas y, si bien sus efectos jurídicos son distintos, se atribuye el mismo valor a las opiniones consultivas que a sus decisiones.⁷³ Así, el confiar en las decisiones judiciales y arbitrales para la determinación de las normas de derecho ha llegado a ser una parte importante y habitual de la práctica internacional. Ello permite conferir una certidumbre a las normas consuetudinarias que de otro modo no tendrían y, de esta manera, facilitan en gran parte su aplicación.⁷⁴

La naturaleza jurídica y el valor de la jurisprudencia internacional comportan una de las cuestiones que precedentemente fueran señaladas y han sido objetos de constante estudio por parte de los autores que se han ocupado de analizar la teoría de las fuentes del derecho internacional. Como apuntara uno de ellos, el estudio de estas fuentes se encuentra estrechamente ligado a la concepción de la naturaleza del derecho internacional.⁷⁵

La jurisprudencia es un modo de creación de normas jurídicas individuales, las cuales reciben el nombre de sentencias. La sentencia internacional se caracteriza por ser una decisión de un árbitro o juez internacional que pone fin al proceso en una controversia entre sujetos del derecho de gentes, que ha sido dictada con el consentimiento previo de éstos y que tiende a crear una regla de derecho internacional⁷⁶.

El Artículo 38 del Estatuto de la C. I. J., al cual se ha hecho referencia, suele ser considerado como una completa declaración de las fuentes de derecho internacional. Sin embargo, algunos autores, observándolo con mayor precisión, entienden que puede ser considerado como una enumeración directa de aquéllas.⁷⁷ Ahora bien, en esta norma se establece que las decisiones judiciales constituyen uno de los medios auxiliares para la determinación de las reglas de

⁷¹ Rosenne, Shabtai, *The Law and Practice of the International Court, 1920-1996*, The Hague/Boston London, Martinus Nijhoff Publishers, 1997, Volume III, Procedure, p. 1607.

⁷² Brownlie, Ian, *Principles of Public International Law*, fifth edition, Oxford, Clarendon Press, 1998, p. 1.

⁷³ Sorensen, Max, *Les Sources du Droit International*, Copenhagen, Einar Munksgaard, 1946, p. 166; Juez Jessup, C.I.J., Recueil 1966, p. 338.

⁷⁴ Virally, Michel, "Fuentes del Derecho Internacional", en Max Sorensen (ed.), *Manual de Derecho Internacional Público*, quinta reimpresión, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 179.

⁷⁵ "est en étroit rapport avec la conception de la nature du droit international en général, car cette conception se reflète fidèlement dans le choix des sources dont on croit pouvoir la déduire" de Louter, J., *Het Stellig Volkenrech*, The Hague, 1910; *Le droit international public positif*, Oxford, 1920, t. I, p. 42 (traducción). Citado por Finch, George, "Les Sources modernes du droit international", *Recueil des Cours de l'Académie de Droit International*, 1935-III, p. 535.

⁷⁶ Barberis, Julio, *Formación del Derecho Internacional*, Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 1994, p. 206.

⁷⁷ Brownlie, Ian, *Principles of Public International Law*, fifth edition, Oxford, Clarendon Press, 1998, p. 3.

derecho,⁷⁸ bajo reserva de lo estipulado en el Artículo 59 del mismo Estatuto que establece que la decisión de la C. I. J.

"no es obligatoria sino para las partes en litigio y respecto del caso que ha sido decidido."

Sobre la base de esta regla, se sostiene que toda tentativa de establecer relaciones estrechas y sistemáticas entre la fuerza de la cosa juzgada y los efectos del precedente judicial sólo lleva a confusión y que, además, el Artículo 59 del Estatuto debe ser interpretado en el sentido de que tiende a limitar la autoridad de las decisiones de la C. I. J. en tanto que precedentes, declarando que ellas no son obligatorias como tales.⁷⁹ La sentencia de la C. P. J. I. en la cual sostuvo que: "*El propósito del (Artículo 59) es simplemente el de evitar que principios jurídicos aceptados por la Corte en un caso particular resulten obligatorios para otros Estados o en otros casos*",⁸⁰ parece confirmar esa hipótesis. No obstante estas opiniones no siempre concordantes, las decisiones judiciales – sentencias y opiniones consultivas – adoptadas por la C. I. J. ocupan una posición prominente en el derecho y en su aplicación por el mismo tribunal y aún en otros tribunales internacionales en general.⁸¹

En lo que concierne a la jurisprudencia de la C. I. J., la misma ha crecido notablemente en volumen y jerarquía en sus cinco décadas de funcionamiento. Esta circunstancia llevó al juez Jennings a hablar acerca de un cambio en las fuentes del derecho internacional, convirtiendo a este último en lo que la jurisprudencia dice que éste es.⁸² Brownlie, por su parte, sostiene que las decisiones judiciales no son una fuente formal del derecho internacional en sentido estricto pero que pueden ser consideradas como evidencia del estado del derecho y que, además, un coherente cuerpo de jurisprudencia tendrá naturalmente importantes consecuencias para aquél.⁸³

La concepción que atribuye un papel auxiliar a la jurisprudencia es conforme a la opinión predominante en los países continentales europeos, distinguiéndose así del sistema de derecho anglosajón, el que reconoce a los precedentes judiciales una autoridad absoluta. Si bien todo parecería indicar que en la redacción del Artículo 38.1.d del Estatuto se adoptó formalmente lo que tradicionalmente se consideraba como sistema continental,⁸⁴ es indudable también que las necesidades prácticas del sistema judicial han dotado a la jurisprudencia de un lugar propio entre los factores que proveen el material necesario para la adopción de las decisiones del juez internacional.

⁷⁸ Lo que sugiere a algunos autores que la jurisprudencia tiene una jerarquía menor que los tratados, la costumbre y los principios generales de derecho. *Conf.* Akehurst, Michael, "The Hierarchy of the Sources of International Law", en *The British Yearbook of International Law*, 1974-1975, XVII, Oxford University Press, p. 280.

⁷⁹ Sorensen, Max, *Les Sources du Droit International*, Copenhagen, Einar Munksgaard, 1946, p. 161; Parry, Clive. *The Sources and Evidences of International Law*, Manchester University Press and Oceana Publications Inc. (USA), 1965, p. 92.

⁸⁰ Traducción por el autor. Versión original: "*The object of (Article 59) is simply to prevent legal principles accepted by the Court in a particular case from being binding on other States or in other disputes*". *German Interests in Polish Upper Silesia* (1926), PCIJ, Ser. A, no. 7, p. 19; World Court Reports, i. 510. Citado por Brownlie, Ian, *Principles of Public International Law*, fifth edition, Oxford, Clarendon Press, 1998, p. 21.

⁸¹ Rosenne, Shabtai, *The Law and Practice of the International Court (1920-1996)*, The Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1997, p. 1607.

⁸² "... of a change in the sources of international law, which had already begun to be felt even in the early 1930s: international law has become a case law." Jennings, Robert Y., "An International Lawyer Takes Stock", ICLQ, 39 (1990), p. 519. Citado por Shahabuddeen, Mohamed, *Precedent in the World Court*, Grotius Publications, Cambridge University Press, 1996, p. 15.

⁸³ Brownlie, Ian, *Principles of Public International Law*, fifth edition, Oxford, Clarendon Press, 1998, p. 19.

⁸⁴ Barberis, Julio, "La Jurisprudencia Internacional como fuente de Derecho de Gentes según la Corte de La Haya", en *Zeitschrift für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht*, Max-Planck-Institut, 31, 1971, p. 643.

No obstante el principio *sententia jus facit inter partes*, contenido en el Artículo 59 del Estatuto, cada declaración de la C. I. J. sobre normas consuetudinarias debe ser aceptada como verificadora de la norma. Al menos, indudablemente tal será la conducta de aquellos Estados cuyos intereses se corresponden con ellas. Y los Estados cuyos intereses son diferentes, tendrán la pesada carga, por cierto, de la prueba en contrario, lo que a menudo resulta imposible especialmente cuando la práctica anterior de los Estados es escasa, vaga o contradictoria.⁸⁵

b. El valor de la jurisprudencia internacional según la Corte Internacional de Justicia

En el Artículo 38.1.d no se especifica si las decisiones judiciales que deben ser consideradas por la C. I. J. son las internacionales, o también las sentencias dictadas por los tribunales nacionales. La doctrina señala que los precedentes a tomar en consideración son sólo los internacionales, y que las decisiones de los tribunales internos entrarían en la órbita del Artículo 38.1.b, con la posibilidad de contribuir en la creación de una norma consuetudinaria.⁸⁶

Como también se aprecia de la lectura del Artículo 38.1.d del Estatuto de la C. I. J., el término "decisiones judiciales" parecería excluir de su órbita las decisiones de los tribunales arbitrales. Sin embargo, la práctica de la C. I. J. parecería demostrar lo contrario. Así, el precedente del *Alabama* es citado en la sentencia sobre el *Asunto Nottebohm*.⁸⁷ Ello no obstante, la C. I. J. se muestra recelosa a la hora de recurrir a decisiones adoptadas por otros tribunales internacionales.

Hoy en día, con el nacimiento de distintas jurisdicciones internacionales, se puede decir que la jurisprudencia ha alcanzado un notable valor. Este valor, según Sereni, ha contribuido a la formación de una jurisprudencia internacional basada en la *rerum perpetuo similiter iudicantium auctoritas*.⁸⁸ Da cuenta de esta afirmación la circunstancia por la cual la C. I. J. cita continuamente sus decisiones anteriores,⁸⁹ tanto para recogerlas como para explicar la falta de similitud con el precedente. De este modo, deja a salvo la falta de aplicación y su propio prestigio. También debe considerarse que está tan generalizada en los tribunales arbitrales y judiciales que ha llevado a veces a pensar a los jueces que si en un determinado caso no se han invocado precedentes es porque éstos no existen.⁹⁰ Hay que sumar, asimismo, que el valor ilustrativo de estas decisiones depende de la autoridad de la C. I. J. y del procedimiento mediante el cual se adoptan y no de su fuerza obligatoria, la cual queda limitada al círculo de las partes y a la orden o mandato efectivo.⁹¹

Shahabuddeen, sostiene que existe consenso en la doctrina en reconocer a la C. I. J. el poder y la responsabilidad de desarrollar el derecho internacional, pero que aquella termina la discusión sin clarificar si el mencionado desarrollo incluye el poder de crear. Agrega que es muy difícil visualizar un proceso de desarrollo del derecho internacional que en algún punto no culmine en creación y que este punto se encuentra en el proceso judicial mismo y es

⁸⁵ Degan, V.D., *Sources of International Law*, The Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1997, p. 193.

⁸⁶ Lauterpacht, Hersch, *The Development of International Law by the International Court*, London, Stevens and Son, 1958. Citado por Barberis, Julio, "La Jurisprudencia Internacional como fuente de Derecho de Gentes según la Corte de La Haya", en *Zeitschrift für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht*, Max-Planck-Institut, 31, 1971, p. 643.

⁸⁷ C.I.J., *Recueil* 1953, p. 119.

⁸⁸ Sereni, A. P., *Diritto Internazionale*, Milano, 1956, Vol. I, p. 163.

⁸⁹ Lauterpacht, Sir H., *The Development of International Law by the International Court*, Londres, Stevens, 1958, ps. 9, 155 y ss.; Mendelson, Maurice, "The International Court of Justice and the Sources of International Law", en Vaughan Lowe et al. (ed.), *Fifty Years of the International Court of Justice – Essays in honour of Sir Robert Jennings*-, Grotius Publications, Cambridge University Press, 1996, p. 81; Sørensen, Max, *Les Sources du Droit International*, Copenhague, Einar Munksgaard, 1946, p. 166.

⁹⁰ Juez Read, caso "Nottebohm", C.I.J., *Recueil* 1955, p. 43.

⁹¹ Virally, Michel, "Fuentes del Derecho Internacional", en Max Sorensen (ed.), *Manual de Derecho Internacional Público*, quinta reimpresión, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 178.

representado por alguna decisión particular, o decisiones, de la C. I. J.⁹² Manuel Díez de Velasco, por su parte, enseña que la función de la jurisprudencia reviste un doble aspecto:⁹³ como elemento de interpretación y como medio de prueba. En este último aspecto, es decir, la jurisprudencia como verificadora del derecho, ella se manifiesta como de enorme importancia y en esta función se la concibe en el Artículo 38 del Estatuto de la CIJ. Resalta que "auxiliar" no significa "secundario" y que, por el contrario, en muchas áreas del derecho internacional tales decisiones constituyen el mejor medio de determinar qué es Derecho. Miaja, por último, señala que la jurisprudencia de los tribunales internacionales constituye un medio auxiliar de las fuentes del derecho internacional que sirve a los fines de proclamar principios fundamentales del orden jurídico internacional y también para aplicar a otros supuestos las soluciones previamente ofrecidas por normas convencionales o consuetudinarias.⁹⁴

El examen de la práctica de la C. I. J. corrobora en un modo convincente la importancia de la jurisprudencia como fuente del derecho internacional. Si bien la invocación de un precedente jurisprudencial se presenta generalmente como un argumento entre otros, no parecen existir dudas de que las decisiones anteriores de los tribunales internacionales, y sobre todo las de la C. I. J., producen una influencia notoria sobre el juez internacional en el ejercicio de su actividad. La C. I. J. ha sido consecuente con sus decisiones anteriores. Y, encontrándose en la situación de adoptar para un caso una solución que en apariencias podría estar en contradicción con una decisión anterior, ha tomado la previsión de señalar la diferencia existente entre ambos, como por ejemplo en las decisiones sobre las excepciones preliminares recaídas en los casos del *Templo de Préah Vihear* y de la *Barcelona Traction, Light and Power Company Limited*, donde la C. I. J. señaló las diferencias con el precedente relativo al asunto sobre el *Incidente Aéreo Búlgaro-Israelí*, en relación con la declaración de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la C. P. J. I..⁹⁵

Ahora bien, como hasta el momento se ha hecho principalmente referencia al valor que la C. I. J. otorga a la jurisprudencia internacional en general, tanto como a la propia, antes de pasar a analizar la que elaborara en relación con el D. I. H. y al crimen internacional de genocidio y su impacto en el T. P. I. Y. y el T. P. I. R., resulta conveniente considerar cuál es el valor de la jurisprudencia internacional en general según los dos últimos tribunales nombrados. Sin este previo análisis, resultaría harto difícil comprender los límites formales del impacto de la jurisprudencia de la C. I. J. en los tribunales internacionales *ad hoc* de la O. N. U..

c. El valor de la jurisprudencia internacional según los Tribunales Penales Internacionales para la Ex Yugoslavia y Ruanda

Como punto de partida para el análisis en cuestión, debe tenerse presente que tanto el T. P. I. Y.⁹⁶ como el T. P. I. R.⁹⁷ son órganos establecidos por el Consejo de Seguridad de la O. N. U. en virtud del Capítulo VII de la Carta,⁹⁸ que interpretan y aplican derecho internacional

⁹² Shahabuddeen, Mohamed, *Precedent in the World Court*, s.l., Grotius Publications, Cambridge University Press, 1996, p. 91.

⁹³ Díez de Velasco, Manuel, *Instituciones de Derecho Internacional Público*, décima edición, Madrid, Tecnos, Tomo I, p. 137.

⁹⁴ Miaja, A., *El Principio de efectividad en Derecho Internacional*, Valladolid, 1958, p. 95.

⁹⁵ C.I.J. *Recueil 1961*, p. 25 y ss..

⁹⁶ Establecido por Resolución 827 del Consejo de Seguridad del 22 de febrero de 1993, enmendado por Resoluciones del Consejo de Seguridad 1166 (1998) y 1329 (2000)

⁹⁷ Establecido por Resolución 955 del Consejo de Seguridad del 8 de noviembre de 1994.

⁹⁸ El TPIY se compone de 16 jueces permanentes e independientes, dos de los cuales no pueden ser nacionales de un mismo Estado, y un máximo de nueve jueces *ad litem* e independientes, dos de los cuales no pueden ser nacionales de un mismo Estado (Estatuto del TPIY, Artículo 12 (1)). Los Tribunales de Primera Instancia se componen de tres jueces permanentes y hasta un máximo de seis jueces *ad litem*. En los Tribunales de Primera Instancia donde haya asignados jueces *ad litem* pueden dividirse en secciones compuestas de tres miembros provenientes de ambas clases de jueces (Estatuto del TPIY, Artículo 12 (2)). Siete de los jueces permanentes serán miembros de la Cámara de Apelaciones del

general y, en gran número, normas atinentes al D. I. H. y a la prohibición de cometer actos de genocidio.⁹⁹ Para llevar adelante tal cometido, estos tribunales deben aplicar normas de D. I. H. que indudablemente forman parte del derecho internacional consuetudinario.¹⁰⁰

El T. P. I. Y. y el T. P. I. R., recurren frecuentemente a la jurisprudencia internacional como medio auxiliar para la determinación de una regla de derecho, es decir, para verificar su existencia y alcance. Por supuesto, la jurisprudencia emanada de las decisiones judiciales adoptadas por la C. I. J. ha ocupado un lugar de prestigio en tanto que herramienta de ambos tribunales *ad hoc* de la O. N. U. a la hora de verificar la existencia y alcance de una determinada norma de D. I. H. o relativa al crimen internacional de genocidio.

El Informe del Secretario General no hace referencia al valor que el T. P. I. Y. debería asignar a la jurisprudencia internacional. En este contexto, este tribunal rápidamente fue llamado a responder acerca de la cuestión de determinar cuáles son las fuentes de derecho internacional que debe aplicar en la tarea de interpretación de su Estatuto y sus Reglas de Procedimiento y Prueba.¹⁰¹ Específicamente, el Tribunal de Primera Instancia interviniente se preguntó acerca de si se encontraba obligado a aceptar la interpretación que de una norma internacional dada hubiera realizado otro órgano judicial internacional o si, por el contrario, gozaba de la libertad de interpretar tales normas en el contexto único de su Estatuto y sus Reglas de Procedimiento y Prueba.¹⁰² Si bien esta última fue la posición adoptada por el tribunal, puede apreciarse que ésta se refiere a la jurisprudencia internacional no como verificadora de una regla de derecho internacional general – que es el aspecto que interesa primordialmente para esta tesis –, sino más bien como medio de interpretación de tal regla. En efecto, el Tribunal de Primera Instancia sostuvo que el T. P. I. Y. debe interpretar normas dentro de su contexto legal y no depender para su aplicación de las interpretaciones realizadas por otros órganos judiciales.¹⁰³

En la primera decisión de importancia adoptada por la Cámara de Apelaciones del T. P. I. Y., ésta tuvo la oportunidad de reconocer a la C. I. J. su carácter de órgano judicial principal de la O. N. U.. En efecto, declaró:¹⁰⁴

Tribunal. Pero, en cada apelación, la Cámara estará compuesta por cinco de sus miembros (Estatuto del TPIY, Artículo 12 (3)). El TPIR, por su parte, se compone también de 16 jueces independientes, dos de los cuales no pueden ser nacionales de un mismo Estado. Los Tribunales de Primera Instancia se componen de tres jueces y la Cámara de Apelaciones de siete. En una apelación, la Cámara estará compuesta por cinco de sus jueces (Estatuto del TPIR, Artículo 11). El Presidente del TPIR asignará dos de los jueces del tribunal a la Cámara de Apelaciones del TPIY (Estatuto del TPIR, Artículo 13 (3)), ya que a continuación establece que los miembros de la Cámara de Apelaciones del TPIY servirán como miembros de la Cámara de Apelaciones del TPIR (Estatuto del TPIR, Artículo 13 (4)).

⁹⁹ La competencia material del TPIY comprende infracciones graves a los Convenios de Ginebra de 1949, violaciones de las leyes y costumbres de la guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad (Estatuto del TPIY, Artículos 2-5, respectivamente). La competencia del TPIR comprende, por su parte, genocidio, crímenes contra la humanidad, y violaciones al Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 como también al Protocolo Adicional II (Estatuto del TPIR, Artículos 2-4, respectivamente).

¹⁰⁰ *Informe del Secretario General en virtud del Parágrafo 2 de la Resolución CS 808 (1993)*, UN Doc. S/25704, par. 34.

¹⁰¹ *Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Prosecution's motion requesting protective measures for victims and witnesses*, 10 August 1995, Case IT: 94-1-T, T. Ch. (McDonald, Stephen, Vohrah).

¹⁰² *Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Prosecution's motion requesting protective measures for victims and witnesses*, 10 August 1995, Case IT: 94-1-T, T. Ch. (McDonald, Stephen, Vohrah), par. 17 y ss.

¹⁰³ *Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Prosecution's motion requesting protective measures for victims and witnesses*, 10 August 1995, Case IT: 94-1-T, T. Ch. (McDonald, Stephen, Vohrah), par. 14.

¹⁰⁴ *The Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction*, 2 October 1995, App. Ch. (Cassese, Li, Deschênes, Abi-Saab, Sidhwa), Case No. IT-94-1-AR72. **En la oportunidad, la Cámara de Apelaciones fue llamada a conocer de un recurso de apelación presentado por la defensa, contra la sentencia pronunciada por el Tribunal de Primera Instancia II el 10 de octubre de 1995. La referida sentencia denegó la excepción de inexistencia de jurisdicción presentada oportunamente por el acusado.**

"Es cierto que la división de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, adoptada generalmente en la mayoría de los sistemas nacionales no resulta aplicable en el campo internacional, ni, más específicamente, en la Organización de las Naciones Unidas. Entre los órganos principales de las Naciones Unidas, la división entre las funciones judiciales, ejecutivas y legislativas no se encuentra claramente delimitada. En relación con la función judicial, la CIJ resulta claramente ser el 'órgano judicial principal' (véase Artículo 92, Carta de las Naciones Unidas). No hay, sin embargo, un órgano legislativo, en el sentido técnico del término, en el sistema de las Naciones Unidas y, de un modo más general, no existe un Parlamento en la comunidad internacional. Esto significa que no existe un órgano formalmente dotado del poder de adoptar leyes jurídicamente vinculantes para los sujetos de derecho internacional."¹⁰⁵

Del pasaje citado, entonces, puede inferirse que la Cámara de Apelaciones del T. P. I. Y. reconoció a la C. I. J. el carácter de "órgano judicial principal" de la O. N. U. pero, al mismo tiempo, expresando la salvedad por la cual las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales en la organización no se encuentran claramente delimitadas. Tampoco, como se advierte, se ocupó de aclarar el sentido de la frase "órgano judicial principal de la O. N. U."

Desde una aproximación más general, es posible preguntarse cuál es el valor que los tribunales *ad hoc* de la O. N. U. atribuyen a la jurisprudencia internacional. Este interrogante, se ha encontrado presente en una serie de casos sometidos a la consideración de los Tribunales de Primera Instancia del T. P. I. Y. como también de su Cámara de Apelaciones, cuyas decisiones al respecto se analizarán a continuación.

Siete años después de su establecimiento, la Cámara de Apelaciones del T. P. I. Y. expresó por vez primera en una sentencia su posición con respecto al valor que posee la jurisprudencia internacional en general - incluso la propia - como medio de interpretación o de verificación de una regla de derecho.¹⁰⁶ Aún resonaba el eco, como se verá más adelante, que producía la jurisprudencia contradictoria entre la C. I. J. y el T. P. I. Y. en relación con el criterio legal aplicable en derecho internacional a los fines de determinar la responsabilidad internacional de un Estado por los actos ilícitos cometidos por individuos u órganos *de facto*.

El T. P. I. Y., analizó el valor de la jurisprudencia internacional en derecho internacional partiendo del estudio de la C. I. J.. En efecto, analizando la regla *stare decisis* - obligatoriedad del precedente judicial - la Cámara de Apelaciones sostuvo lo siguiente:

"No obstante la inexistencia del principio *stare decisis* en relación con la CIJ, a sus decisiones previas les son acordadas un peso considerable. Esto parece resultar de su *status* como también de su expresión de autoridad. Tal como el juez Zoricic sostuviera en su Opinión Disidente en el *Asunto de los Tratados de Paz*, si bien 'es cierto que no existe tribunal internacional que se encuentre obligado por precedentes... existe algo que la CIJ se encuentra obligada a tener en consideración, los principios del derecho internacional. Si un precedente

¹⁰⁵ Traducción del autor. Versión original: "It is clear that the legislative, executive and judicial division of powers which is largely followed in most municipal systems does not apply to the international setting nor, more specifically, to the setting of an international organization such as the United Nations. Among the principal organs of the United Nations the divisions between judicial, executive and legislative functions are not clear-cut. Regarding the judicial function, the International Court of Justice is clearly the "principal judicial organ" (see United Nations Charter, art. 92). There is, however, no legislature, in the technical sense of the term, in the United Nations system and, more generally, no Parliament in the world community. That is to say, there exists no corporate organ formally empowered to enact laws directly binding on international legal subjects." *The Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction*, 2 October 1995, App. Ch. (Cassese, Li, Deschênes, Abi-Saab, Sidhwa), Case No. IT-94-1-AR72, par. 43.

¹⁰⁶ *Prosecutor v. Zlatko Aleksovski, Judgment*, 24 March 2000, App. Ch. (May, Mumba, Hunt, Tieya, Robinson), Case No: IT-95-14-1-A, *Declaration of Judge Hunt*, par. 1. Zlatko Aleksovski fue acusado por su responsabilidad en la comisión de tres crímenes de competencia del tribunal, y encontrado culpable en primera instancia por violación a las leyes y costumbres de la guerra.

se encuentra firmemente basado en un principio de éstos, la CIJ no puede decidir un caso análogo en sentido contrario, en tanto y en cuanto el principio retenga su valor."¹⁰⁷

Así, puede observarse que el T. P. I. Y. constató la inexistencia de la obligatoriedad del precedente judicial en el sistema de la C. I. J. y, al mismo tiempo, reconoció el peso de la jurisprudencia emanada de las decisiones judiciales adoptadas por ésta. La inexistencia de la obligatoriedad del precedente judicial en el T. P. I. Y. también fue resaltada por la Cámara de Apelaciones, cuando afirmó que no se encuentra obligada a seguir una decisión adoptada previamente por ella si existe, en el caso donde tal decisión fue adoptada, alguna razón que la distinga del caso sometido a su consideración.¹⁰⁸ Y, más tarde, lo reafirmó del siguiente modo:

"La Cámara de Apelaciones toma en consideración la Sentencia en Apelación del caso Tadic, y las peticiones de las partes relevantes al respecto, en orden de determinar si, aplicando el principio establecido en la Sentencia en Apelación del caso Aleksovski, existe alguna razón imperativa en el interés de la justicia para apartarse de él."¹⁰⁹

Basta agregar que la Cámara no encontró tales razones y mantuvo así la unidad de su jurisprudencia. Por lo demás, resulta indudable que el T. P. I. Y. no sólo reafirmó la importancia de mantener tal unidad sino también que goza de la potestad de apartarse de su propia jurisprudencia cuando el interés de la justicia lo requiere. De lo expuesto, surge evidente que si este tribunal tiene la potestad de apartarse de sus precedentes en el interés de la justicia, puede hacer lo propio con las decisiones judiciales adoptadas por otros tribunales internacionales, tal como la C. I. J.. Es que, una vez más, se reafirma el hecho jurídico de que la jurisprudencia internacional es un medio auxiliar para la determinación de una regla de derecho.

¹⁰⁷ "Despite the non-operation of the principle of *stare decisis* in relation to the International Court of Justice, its previous decisions are accorded considerable weight. This may be due to their perceived status as authoritative expressions of the law. As Judge Zoricic stated in his Dissenting Opinion in the *Peace Treaties* case, while "it is quite true that no international court is bound by precedents ... there is something which this Court is bound to take into account, namely the principles of international law. If a precedent is firmly based on such a principle, the Court cannot decide an analogous case in a contrary sense, so long as the principle retains its value." *Prosecutor v. Zlatko Aleksovski, Judgment*, 24 March 2000, App. Ch. (May, Mumba, Hunt, Tieya, Robinson), Case No: IT-95-14-1-A, par. 96.

¹⁰⁸ *Prosecutor v. Zlatko Aleksovski, Judgment*, 24 March 2000, App. Ch. (May, Mumba, Hunt, Tieya, Robinson), Case No: IT-95-14-1-A, par. 110.

¹⁰⁹ "The Appeals Chamber now turns to a consideration of the *Tadic* Appeal Judgement, and to the relevant submissions of the parties in this regard, in order to determine whether, applying the principle set forth in the *Aleksovski* Appeal Judgement, there are any cogent reasons in the interests of justice for departing from it." *Prosecutor v. Zejnir Delalic et al (Celebici Case), Judgment*, 20 February 2001, App. Ch. (Hunt, Riad, Nieto-Navia, Bennouna, Pocar), Case No IT-96-21-A, par. 10. En primera instancia, ha sido acreditado que Delalic era coordinador de las fuerzas bosnio-musulmanas y bosnio-croatas en Konjic entre abril y septiembre 1992, aproximadamente. Fue declarado culpable de doce cargos por violaciones graves a los Convenios de Ginebra de 1949 y violaciones a las leyes y costumbres de la guerra. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que Delalic no ejerció suficientemente comando y control sobre el campo Celebici o sobre los guardias que allí trabajaban para acarrear su responsabilidad criminal por sus acciones. Mucic fue declarado culpable de violaciones graves a los Convenios de Ginebra y violaciones de las leyes y costumbres de la guerra por crímenes tales como homicidio, tortura, tratamiento inhumano y confinamiento arbitrario, principalmente en razón de su responsabilidad superior como comandante del campo de Celebici, pero también, con respecto a ciertos cargos, por su directa participación en los crímenes. Mucic fue sentenciado a siete años de prisión. Delic fue declarado culpable de violaciones graves de los Convenios de Ginebra y violaciones de las leyes y costumbres de la guerra por su participación directa en crímenes tales como homicidio, tortura y tratamiento inhumano. Delic fue sentenciado a 20 años de prisión. Landzo fue encontrado culpable de violaciones a los Convenios de Ginebra y violaciones de las leyes y costumbres de la guerra, por crímenes tales como homicidio, tortura y tratamiento cruel, y sentenciado a 15 años de prisión.

Los tribunales internacionales, ante la variedad de jurisdicciones, conforman hoy en día un amplio espectro de jurisprudencia. Como señala Shahabuddeen,

"Existiendo muchos tribunales que funcionan en una situación no-jerárquica, resulta persuasivo el argumento de que una nueva regla adoptada en una decisión particular por un particular tribunal no se convierte inmediatamente en parte del derecho internacional. Distintos tribunales pueden adoptar distintas reglas; dos diferentes reglas en la misma cuestión no pueden formar parte del derecho internacional al mismo tiempo. Algún otro procedimiento tendrá que determinar cuál, si alguna, adquiere eventualmente la jerarquía de norma de derecho internacional. El problema resaltaría particularmente cuando distintas determinaciones son efectuadas por importantes tribunales internacionales que ejercen una jurisdicción coordinada en el mismo ámbito; y hay más de éstas hoy que ayer."¹¹⁰

Ya se ha mencionado también precedentemente, la importancia que reviste la unidad y consistencia de la jurisprudencia internacional. Especialmente, las que emanan de la C. I. J. y los T. P. I. Y. y T. P. I. R.. Gilbert Guillaume, Presidente de la C. I. J., se muestra preocupado ante el florecimiento de tribunales internacionales. A su pregunta de cómo puede mantenerse la unidad del derecho internacional ante el creciente número de tales instancias, responde:

"El riesgo, no obstante, ya se ha presentado. En el ámbito regional, los tribunales de Luxemburgo y de Estrasburgo están desarrollando una jurisprudencia la cual, en algunos aspectos, difiere del derecho internacional general (por ejemplo, en lo relativo a la interpretación de los tratados). El derecho del mar, el derecho ambiental y los derechos humanos son considerados, en algunos medios, tan específicos que algunas de las normas tradicionales de derecho internacional no les resultan aplicables. Ésta es una tentación muy peligrosa. El derecho internacional es nuestro común legado de los siglos diecinueve y veinte. Naturalmente, debe ser desarrollado para cumplir con los requerimientos de nuestro mundo moderno. Debe también tener en cuenta los problemas que ocurren en regiones específicas o en áreas específicas. Pero no debe ser afectado de un modo tal que desvirtúe su unidad. En este respecto, los juristas y abogados pueden tener un papel muy importante llamando la atención sobre normas de derecho las cuales los jueces, algunas veces, no son muy cautos en el desarrollo de su jurisprudencia, la que debe ser siempre consistente con la jurisprudencia de la CIJ, la cual, después de todo, es el 'órgano judicial principal de las Naciones Unidas', y a la cual 'controversias de orden jurídico, por lo general, deben ser sometidas por las partes a la CIJ', según el Artículo 36, párrafo 3, de la Carta."¹¹¹

¹¹⁰ Traducción del autor. Versión original: "Several tribunals being at work in a non-hierarchical situation, there is force in the argument that a new rule adopted in a particular decision by a particular tribunal does not immediately become part of international law. Different tribunals could adopt different rules; two different rules on the same point cannot both form part of international law at the same time. Some other process will have to determine which, if either, eventually acquires the status of a rule of international law. The problem would be particularly noticeable where different holdings are made by major international tribunals exercising coordinate jurisdiction in the same field; and there are more of these today than yesterday." Shahabuddeen, Mohamed, *Precedent in the World Court*, Grotius Publications, Cambridge University Press, 1996, p. 92.

¹¹¹ Traducción del autor. Versión original: "The risk, however, is already here. At the regional level, the Luxembourg and Strasbourg Courts are developing a case law which, in some respects, diverges from general international law (for instance, as regards the interpretation of treaties). The law of the sea, environmental law and human rights law are considered, in certain circles, to be so specific that some of the traditional rules of international law are not applicable in those fields. This is a very dangerous temptation. International law is our common heritage from the nineteenth and twentieth centuries. It must obviously be geared to meet the needs of our modern world. It must also take into account the problems arising in specific regions or in specific fields. But it must not be broken up such a way to jeopardise its unity. In this respect, practising lawyers may play a very useful role in drawing the attention of judges to rules of law which, sometimes, are not very cautious in developing their case law, which must remain consonant with the jurisprudence of the International Court, which, after all, is the 'principal judicial organ of the United Nations', and to which 'legal disputes should as a general rule be referred', under Article 36, paragraph 2, of the Charter." Guillaume, Gilbert, "The Future of International Judicial Institutions", *International and Comparative Law Quarterly*, British Institute of International and Comparative Law, 44, 1995, p. 862.

A propósito de la relación existente entre la C. I. J. y el T. P. I. Y., el Presidente Guillaume agregó:

"Además, sería lamentable si, en problemas específicos, distintos tribunales adoptaran posiciones divergentes. Al presente, por ejemplo, la CIJ y el TPIY se encuentran considerando casos en los cuales se discute si actos de genocidio fueron cometidos en Bosnia-Herzegovina. Una doble valoración podría tener lugar al respecto, y no sería ésta una situación muy feliz."¹¹²

¿Premonición, quizás? Lo cierto, es que los temores del Presidente de la C. I. J. se convirtieron en realidad cuando, como más adelante se verá, la Cámara de Apelaciones del T. P. I. Y. pronunció la sentencia del 15 de julio de 1999 en el *Asunto Tadic*.

La C. I. J. por medio de su función, que es la de solucionar las controversias jurídicas suscitadas entre Estados y de ayudar a las organizaciones internacionales a funcionar eficazmente, contribuye a subrayar y a afirmar el papel del derecho internacional en las relaciones internacionales, como también al desarrollo de este derecho.¹¹³ Por consiguiente, las decisiones adoptadas por la C. I. J. – sentencias u opiniones consultivas - son hechos jurídicos conocidos por los Estados como también por los órganos internacionales abocados a la ardua tarea de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional, particularmente bajo los auspicios de la O. N. U.. Así, en el trabajo de la Comisión de Derecho Internacional, en tanto y en cuanto esta redacta sus proyectos de artículos y los somete a la Asamblea General con un comentario que comprende una presentación de los antecedentes y otros detalles pertinentes, comprendidas las "decisiones judiciales", las de la C. I. J. ocupan un lugar de privilegio.¹¹⁴

Hasta el presente, de todas las jurisdicciones internacionales existentes, quizás ninguna alcance la importancia y el peso de la C. I. J. en razón tanto de la vocación de universalidad de su Estatuto constitutivo como de la capacidad de entender en toda cuestión de derecho internacional que los Estados le sometían.

¹¹² Traducción del autor. Su versión original, reza: "Further, it would be most regrettable if, on specific problems, different courts were to take divergent positions. At present, for instance, both the International Court and the Tribunal for Crimes Committed in the Former Yugoslavia are considering cases about whether genocide has been committed in Bosnia and Herzegovina. A double assessment may have to be made in that respect, and this is not a very happy situation." Guillaume, Gilbert, "The Future of International Judicial Institutions", *International and Comparative Law Quarterly*, British Institute of International and Comparative Law, 44, 1995, p. 862.

¹¹³ International Court of Justice (Ed.), *The International Court of Justice*, fourth edition, The Hague, 1996, p. 93.

¹¹⁴ International Court of Justice (Ed.), *The International Court of Justice*, fourth edition, The Hague, 1996, p. 94. Véase asimismo Schwebel, Stephen, "The inter-active influence of the International Court of Justice and the International Law Commission", en C.A. Armas Barea et al., *Liber Amicorum José María Ruda*, The Hague/Boston/London, Kluwer Law International, 2000. pp. 479-505.

Parte Especial: El Valor de la Jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia como verificadora del Derecho Internacional Humanitario y del Crimen Internacional de Genocidio

I. La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia como verificadora del Derecho Internacional Humanitario y del crimen internacional de genocidio

a. El Derecho Internacional Humanitario y el crimen internacional de genocidio

Desde sus inicios, la C. I. J. desarrolló una importante actividad jurisprudencial como verificadora de la existencia de normas consuetudinarias de D. I. H. y del crimen internacional de genocidio.

A título preliminar, resulta pertinente precisar el concepto y alcance del D. I. H.. Este término tiene un origen relativamente reciente y su utilización por algunos publicistas data de 1950, aproximadamente, plasmándose en 1965 en la Resolución XXVIII de la XXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja que tuvo lugar en Viena. El D. I. H. se ocupa de cuestiones tales como el empleo de armas y otros medios de combate y el tratamiento de las víctimas de la guerra por el enemigo.¹¹⁵ Swinarski define al D. I. H. "como el cuerpo de normas internacionales, de origen convencional o consuetudinario, específicamente destinado a ser aplicado en los conflictos armados, internacionales o no internacionales, que limita el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los métodos y los medios utilizados en la guerra, o que protege a las personas y los bienes afectados, o que pueden estar afectados, por el conflicto."¹¹⁶ Tal como comenta Pictet, el Artículo 2 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 – que refiere a su ámbito de aplicabilidad situacional – no requiere una declaración formal de guerra, o de reconocimiento de un estado de guerra, como requisito preliminar para la aplicación de los Convenios. Estos se aplican desde la apertura de las hostilidades, ya que la existencia de un conflicto armado entre dos o más Partes Contratantes automáticamente permite la aplicación de las referidas convenciones. El autor agrega, acto seguido, que la noción de conflicto armado es más general que la noción de guerra. Así, observa que cualquier controversia que surja entre dos Estados conllevando la intervención de fuerzas armadas o similares es un conflicto armado, aún si una de las Partes negare la existencia de un estado de guerra, y sin importar la duración de aquella ni la cantidad de muertes.¹¹⁷ O, como lo señala el T. P. I. Y., existe conflicto armado siempre que se recurra a la fuerza armada entre Estados o haya violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre estos grupos dentro de un Estado.¹¹⁸

El D. I. H. es una rama del derecho internacional público y, como tal, presenta las características de este derecho: se encuentra sometido a la iniciativa de los Estados y a su buena voluntad; también, en gran medida, es un derecho de coordinación más que de subordinación. Por ser una rama del derecho internacional público, las fuentes formales del D. I. H. son las enumeradas en el Artículo 38, parágrafo 1 del Estatuto de la C. I. J.. Además de las

¹¹⁵ Partsch, Karl Josef, "Humanitarian Law and Armed Conflict", en Rudolf Bernhardt (ed), *Encyclopedia of Public International Law*, North-Holland, Elsevier, 1995, Volume Two, p. 933 y ss.

¹¹⁶ Swinarski, Christophe, *Introducción al Derecho Internacional Humanitario*, Costa Rica – Ginebra, Comité Internacional de la Cruz Roja – Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1984, p. 11. Es de destacar que el Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949 incorpora normas relativas a los métodos y medios de combate como también al estatuto de combatiente. De este modo, el denominado Derecho de La Haya – Convenios de 1899 y 1907 sobre Usos y Costumbres de la Guerra - converge con el denominado Derecho de Ginebra – Convenios de 1949 sobre la protección de las víctimas de los conflictos armados y sus bienes -.

¹¹⁷ Pictet, Jean (ed), *Commentary, I Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*, Geneva, International Committee of the Red Cross, 1952, p. 32.

¹¹⁸ *Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction*, 2 October 1995, App. Ch. (Cassese, Li, Deschênes, Abi-Saab, Sidhwa), par. 70.

convenciones humanitarias de 1949 y 1977,¹¹⁹ deben resaltarse en D. I. H. el papel de la costumbre internacional y de los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas, papel a menudo esencial de complemento y sustituto en caso de laguna o de inaplicabilidad del derecho convencional.¹²⁰ La Cláusula Martens es un ejemplo al respecto.¹²¹ En efecto, proclama por vez primera que podrían existir principios o normas de derecho internacional consuetudinario resultantes no sólo de la práctica estatal, sino también de las leyes de humanidad y los dictados de la conciencia pública.¹²²

Finalmente, debe destacarse que las normas fundamentales del D. I. H. poseen carácter imperativo en razón de su aceptación y reconocimiento como tales por la comunidad internacional.¹²³ En efecto, como se verá más adelante, C. I. J. ha determinado que los Convenios de Ginebra de 1949 constituyen, en algunos aspectos, la expresión de los principios fundamentales del D. I. H..¹²⁴

En consideración de lo precedentemente expuesto, resulta oportuno referirse en modo sucinto a las relaciones existentes entre estas dos ramas del derecho internacional que son el D. I. H. y el D. I. D. H.. La literatura de los publicistas es prolífica en la materia.¹²⁵ Por un lado, se menciona el carácter convergente – coordinado y complementario - de aquellas ramas del derecho internacional.¹²⁶ También, se sostiene que la convergencia aludida no es racional ni organizada, que a menudo la diversidad prevalece sobre las similitudes y correspondencias, y que las lagunas y superposición entre las normas de D. I. H. y D. I. D. H. es una característica de esta interrelación.¹²⁷ Así, el primer rasgo distintivo entre éstos es que el D. I. D. H. se aplica principalmente en tiempos de paz, en tanto que el D. I. H. se aplica principalmente en tiempos de conflicto armado.¹²⁸ En otras palabras, este último es un derecho de excepción.¹²⁹ El

¹¹⁹ Convenio I para aliviar la suerte que corren los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña; Convenio II para aliviar la suerte que corren los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar; Convenio III relativo a la protección debida a los prisioneros de guerra; Convenio IV relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempos de guerra, adoptados el 12 de agosto de 1949. Protocolo adicional I relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales y Protocolo adicional II relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional.

¹²⁰ Deyra, Michel, *Droit international humanitaire*, Paris, Gualino Éditeur, 1998, p. 25 y ss.

¹²¹ **La denominada Cláusula Martens fue inserta en el Convenio II de La Haya de 1899 relativo a los Usos y Costumbres de la Guerra Terrestre, a instancias del publicista ruso Fyodor Fyodorovic Martens. La Cláusula Martens estipulaba lo siguiente: "En attendant qu'un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties Contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par Elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique. Elles déclarent que c'est dans ce sens que doivent s'entendre notamment les articles 1 et 2."** Esta cláusula fue también inserta en el Convenio IV de La Haya de 1907 sobre la misma materia, y en el Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949.

¹²² Cassese, Antonio, "The Martens Clause: half a loaf or simply pie in the sky?", *European Journal of International Law*, vol. 11, p. 188.

¹²³ Gutiérrez Posse, Hortensia D. T., *Moderno Derecho Internacional y Seguridad Colectiva*, Buenos Aires, Zavalía Editor, 1995, p. 348.

¹²⁴ *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua Case (Nicaragua v. United States of America)*, *Merits, Judgment, ICJ 1986*, par. 218.

¹²⁵ Vinuesa, Raúl Emilio, "Interface, Correspondence and Convergence of Human Rights and International Humanitarian Law", en *Yearbook of International Humanitarian Law*, T.M.C. Asser Press, 1998, Vol. 1, pp. 69-110. Véase al respecto la bibliografía referida en la nota a pie de página nº 1.

¹²⁶ Cançado Trindade, Antonio, "Aproximaciones o convergencias entre el derecho internacional humanitario y la protección internacional de los derechos humanos", *Seminario Interamericano sobre la Protección de la Persona en Situaciones de Emergencia*, San José de Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1996, p. 88.

¹²⁷ Vinuesa, Raúl Emilio, "Interface, Correspondence and Convergence of Human Rights and International Humanitarian Law", en *Yearbook of International Humanitarian Law*, T.M.C. Asser Press, 1998, p. Vol. 1, 70.

¹²⁸ Nótese que algunas normas de DIH obligan a los Estados a realizar determinada actividad en tiempos de paz, como por ejemplo la relativa a la difusión de los Convenios de Ginebra de 1949

segundo rasgo distintivo se relaciona con los sujetos de uno y otro conjunto de normas: en el D. I. H., sujetos son las partes en conflicto y el C. I. C. R.; en el D. I. D. H., son los individuos quienes poseen derechos propios como también una determinada capacidad de peticionar.¹³⁰

Ahora bien, a pesar de los rasgos distintivos que poseen el D. I. H., por una parte, y el D. I. D. H., por la otra, es necesario subrayar que las normas fundamentales de uno como otro tienen por finalidad proteger valores esenciales a la supervivencia de la comunidad internacional, tales como la no discriminación, la inviolabilidad y seguridad de las personas.¹³¹

En lo que concierne al crimen internacional de genocidio, es de resaltar que la fuente de derecho internacional clave en la materia es la Convención sobre Genocidio, adoptada por la Asamblea General de la O. N. U. el 9 de diciembre de 1948. Si bien hoy en día no existen dudas entre los Estados en cuanto a la condena universal del genocidio, éstos no la han ratificado en un número similar a los Convenios de Ginebra de 1949.¹³² La razón parece obedecer a que los Estados desean evitar las pesadas obligaciones que el tratado impone a las Partes, tales como el enjuiciamiento o extradición de personas, incluyendo a Jefes de Estado.¹³³

Además de la Convención sobre Genocidio, existen otros instrumentos internacionales relativos a este crimen. Así, pueden enumerarse la Resolución AG 96 (I), los Estatutos del T. P. I. Y. y T. P. I. R., el Estatuto de Roma para una C. P. I..

La prohibición del genocidio se vincula estrechamente con el derecho a la vida, uno de los derechos humanos fundamentales definido en numerosos instrumentos internacionales.¹³⁴ Si bien estos últimos se refieren al derecho individual a la vida, la Convención sobre Genocidio se relaciona con el derecho a la vida de grupos enteros de personas.

Debe mencionarse que la adopción de la Convención sobre Genocidio obedeció principalmente a la necesidad de superar los inconvenientes suscitados como consecuencia de la restrictiva noción que de crímenes contra la humanidad imperaba en 1948. En efecto, el Tribunal Militar Internacional de Nüremberg (T. M. I.) condenó a los jefes nazis por crímenes contra la humanidad, y no genocidio. Esto fue debido a que la Carta del T. M. I. establecía que los crímenes contra la humanidad sólo podían cometerse durante un conflicto armado.¹³⁵ Por tanto, es la Convención sobre Genocidio que, primera en el tiempo, reconoció la idea de que las violaciones masivas a los derechos humanos cometidas en ausencia de conflicto armado constituyen, sin embargo, una preocupación de la comunidad internacional en su conjunto.¹³⁶

b. Asunto del Canal de Corfú

(Artículos 47/48/127/144 de los Convenios I, II, III y IV, respectivamente; o de sus Protocolos Adicionales de 1977 (Artículos 83/19 de los Protocolos I y II, respectivamente).

¹²⁹ Gutiérrez Posse, Hortensia D. T., *Moderno Derecho Internacional y Seguridad Colectiva*, Buenos Aires, Zavalía Editor, 1995, p. 359.

¹³⁰ Gutiérrez Posse, Hortensia D. T., *Moderno Derecho Internacional y Seguridad Colectiva*, Buenos Aires, Zavalía Editor, Buenos Aires, 1995, p. 359.

¹³¹ Pictet, Jean, *Développement et Principes de Droit International Humanitaire*, Genève, Institut Henry Dunant, 1983, p. 75.

¹³² El número de Estados Partes a los Convenios de Ginebra de 1949 al 3 de diciembre de 2001 asciende a 189, en tanto que a la Convención sobre Genocidio al 9 de octubre de igual año asciende a 133. Al respecto, véanse www.icrc.org y www.un.org que fueron consultados el 28 de enero de 2002.

¹³³ Schabas, William. *Genocide in International Law*, Cambridge University Press, 2000, p. 3.

¹³⁴ *Declaración Universal de Derechos Humanos*, Artículo 3; *Pacto Internacional Relativo a los Derechos Civiles y Políticos*, Artículo 6; *Convención Americana de Derechos Humanos*, Artículo 4; *Convenio Europeo para la Salvaguarda de los Derechos y Libertades Fundamentales*, Artículo 2.

¹³⁵ *Agreement for the Prosecution and Punishment of Major War Criminals of the European Axis, and Establishing the Charter of the International Military Tribunal (IMT)*, annex, (1951) 82 UNTS 279, Art. 6 (c).

¹³⁶ A partir de 1948, el derecho relativo a los crímenes contra la humanidad evolucionó sustancialmente. En efecto, que éstos pueden producirse tanto en tiempos de paz como de guerra fue reconocido en la jurisprudencia del TPIY y del TPIR como también en el Estatuto de la CPI. Al respecto, véase Schabas, William, *Genocide in International Law*, Cambridge University Press, 2000, p. 10 y ss.

La primera oportunidad en que la C. I. J. verificó normas consuetudinarias que forman parte del D. I. H., fue en oportunidad del pronunciamiento de la sentencia (fondo) del 9 de abril de 1949 concerniente al *Asunto del Canal de Corfú (Reino Unido c. Albania)*.¹³⁷ Los temas centrales considerados por la C. I. J.¹³⁸ en la referida sentencia fueron, entre otros, la responsabilidad internacional por la explosión de minas situadas en aguas territoriales, minado efectuado por autores desconocidos, incumplimiento de las obligaciones derivadas del conocimiento del minado y el fundamento de la responsabilidad.¹³⁹

La C. I. J. constató que dos buques de guerra británicos chocaron minas en aguas territoriales albanesas en un canal anteriormente desminado y verificado, precisamente en el lugar donde fuera descubierto tres semanas más tarde un campo de minas recientemente emplazado.¹⁴⁰ La tesis británica según la cual las minas habrían sido emplazadas por las autoridades albanesas no fue aceptada por falta de comprobación y la C. I. J. concluyó que lo fueron por autores desconocidos. No obstante esta circunstancia, del conjunto de hechos y constataciones relevadas por ella misma, determinó que el emplazamiento del campo de minas que provocó las explosiones del 22 de octubre de 1946 no pudo escapar del conocimiento del gobierno albanés.¹⁴¹ Asimismo, observó que las obligaciones que derivan para Albania de este conocimiento no son contestadas por las partes, y que

"Las obligaciones que incumbían a las autoridades albanesas consistían en dar a conocer, en interés de la navegación en general, la existencia de un campo de minas en las aguas territoriales albanesas y de advertir a los buques de guerra británicos, al momento de su acercamiento, del peligro inminente al cual los exponía este campo de minas. Estas obligaciones se fundamentan no sobre la Convención VIII de La Haya de 1907, que es aplicable en tiempos de guerra, sino sobre ciertos principios generales y bien reconocidos, tales como consideraciones elementales de humanidad, más absolutas en tiempos de paz que en tiempos de guerra, el principio de la libertad de comunicaciones marítimas y la obligación, para todo Estado, de no permitir la utilización de su territorio para la realización de actos contrarios a los derechos de otros Estados."¹⁴²

Por tanto, la C. I. J. concluyó que Albania era responsable internacionalmente ante el Reino Unido por las explosiones acaecidas el 22 de octubre de 1946 en sus aguas territoriales, y de los daños producidos en consecuencia.¹⁴³

El pasaje de la sentencia al que se hace referencia, sugiere que la C. I. J. determinó en la ocasión que las "consideraciones elementales de humanidad" expresan una fuente del derecho internacional. Esta afirmación se sustenta en que de ellas derivaban las obligaciones internacionales que pesaban sobre Albania en tanto que sujeto de derecho internacional. La interpretación de la frase "un principio general y bien reconocido" en una primera aproximación parece referirse a "los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas" en tanto que fuente del derecho internacional según el Artículo 38.1.c del Estatuto de la C. I. J.. Sin embargo, en los años posteriores al pronunciamiento de la

¹³⁷ *Affaire du Déroit de Corfou (fond), Arrêt du 9 avril 1949: C.I.J. Recueil, 1949, p. 4.*

¹³⁸ Sr. Guerrero, *cumpliendo funciones de Presidente*; Sr. Basdevant, *Presidente*; Sres. Alvarez, Fabela, Hackwort, Winiarski, Zoricic, De Visscher, sir Arnold McNair, Sr. Klaestad, Badawi Pacha, Sres. Krylov, Read, Hsu Mo, Azevedo, *jueces*; Sr. Ecer, *juez ad hoc*.

¹³⁹ *Affaire du Déroit de Corfou (fond), Arrêt du 9 avril 1949: C.I.J. Recueil, 1949, p. 4.*

¹⁴⁰ *Affaire du Déroit de Corfou (fond), Arrêt du 9 avril 1949: C.I.J. Recueil, 1949, p. 15.*

¹⁴¹ *Affaire du Déroit de Corfou (fond), Arrêt du 9 avril 1949: C.I.J. Recueil, 1949, p. 22.*

¹⁴² Traducción por el autor. Versión original: "Les obligations qui incombent aux autorités albanaises consistaient à faire connaître, dans l'intérêt de la navigation en général, l'existence d'un champ de mines dans les eaux territoriales albanaises et à avertir les navires de guerre britanniques, au moment où ils s'approchaient, du danger imminent auquel les exposaient ce champs de mines. Ces obligations sont fondées non pas sur la Convention VIII de La Haye, de 1907, qui est applicable en temps de guerre, mais sur certains principes généraux et bien reconnus, tels que des considérations élémentaires d'humanité, plus absolues encore en temps de paix qu'en temps de guerre, le principe de la liberté des communications maritimes et l'obligation, pour tout État, de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d'actes contraires aux droits d'autres États." *Affaire du Déroit de Corfou (fond), Arrêt du 9 avril 1949: C.I.J. Recueil, 1949, p. 22.*

¹⁴³ *Affaire du Déroit de Corfou (fond), Arrêt du 9 avril 1949: C.I.J. Recueil, 1949, p. 23.*

sentencia de marras, un publicista dudó que " las consideraciones elementales de humanidad" tuvieran un contenido normativo propio, aún cuando hayan asistido en la formación de normas de derecho consuetudinario y convencional.¹⁴⁴ Otro autor, basándose en la opinión citada, sostiene que el pronunciamiento de la C. I. J. en análisis fue una manifestación de su poder discrecional para superar un problema técnico, es decir, que la Convención VIII de La Haya de 1907 se aplica sólo en tiempo de conflicto armado de carácter internacional.¹⁴⁵ Y que tales consideraciones podrían ser un principio rector pero no una norma *per se*.¹⁴⁶

Ahora bien, aún teniendo presente las dudas que expresaran los autores citados, no es menos cierto que la C. I. J. verificó el carácter normativo de " las consideraciones elementales de humanidad" y en ellas fundó su pronunciamiento, las que hoy en día son identificadas por la doctrina de los publicistas como normas internacionales de carácter consuetudinario. Eric David, afirma que el D. I. H. ha pasado de ser un derecho de carácter esencialmente consuetudinario a un derecho esencialmente codificado por intermedio de tratados multilaterales. Y que, al mismo tiempo, las normas consuetudinarias permanecen junto a las convencionales, transformándose y aún desarrollándose.¹⁴⁷ Agrega que ya sea con la finalidad de cubrir las lagunas del derecho internacional o compensando la falta de aplicación de ciertos tratados, la costumbre juega un rol de complemento o de sustituta de las reglas convencionales. En el asunto sometido a consideración de la C. I. J. que se analiza, ésta ha constatado que la obligación a cargo del Estado ribereño de un estrecho, de advertir a los buques que tal estrecho se encuentra minado, reposa no sobre la Convención VIII de La Haya, que es tan sólo aplicable en tiempos de guerra, sino sobre los principios generales y bien reconocidos que la misma C. I. J. describe en el párrafo precedentemente transcrito.¹⁴⁸ De lo que se concluye, entonces, que para David los principios generales y bien reconocidos citados – entre los cuales se encuentran las " consideraciones elementales de humanidad" – forman parte del derecho internacional consuetudinario.

Otro importante aspecto que reviste el pasaje de la sentencia pronunciada por la C. I. J. es aquel por el cual " las consideraciones elementales de humanidad" , en tanto que fundamento de una obligación internacional, resultan aplicables en tiempos de paz como de guerra. En efecto, tales normas humanitarias mínimas se aplican en todo tiempo con independencia de la existencia de un conflicto armado, evitando en la práctica la siempre difícil constatación de si una situación de violencia armada determinada constituye un conflicto armado según el derecho internacional.

En el pasaje transcrito de la sentencia, se reafirma, implícitamente, que el D. I. H. en su conjunto sólo puede ser aplicado en tiempos de conflicto armado: el incumplimiento por parte de Albania de advertir a los navíos británicos de la existencia de un campo de minas en sus aguas territoriales no violaba la Convención VIII de La Haya de 1907, pues ésta es tan sólo aplicable en tiempos de guerra.

La doctrina en general, sostiene que la C. I. J. afirmó que la obligación de notificar la existencia de los campos de minas deriva del derecho internacional consuetudinario y se aplica tanto en tiempos de guerra como de paz.¹⁴⁹ Esto se apoya en el pasaje de la sentencia de la C.

¹⁴⁴ Traducción por el autor. Versión original: " Such considerations have been assisted in the formation of important rules of customary and treaty law. By themselves, however, they are neither a law-creating process nor operative rules of international law. It would be equally difficult to found the admissibility of such considerations *per se* on a general principle of law recognized by civilized nations." Schwarzenberger, George, *International Law*, Vol. 1 (1), 3rd ed., 1957, p. 51. Citado por Il Yung Chung, *Legal Problems Involved in the Corfu Channel Incident*, Librairie Droz, Genève, Librairie Minard, Paris, 1959, p. 162.

¹⁴⁵ Il Yung Chung, *Legal Problems Involved in the Corfu Channel Incident*, Librairie Droz, Genève, Librairie Minard, Paris, 1959, p. 162.

¹⁴⁶ Il Yung Chung, *Legal Problems Involved in the Corfu Channel Incident*, Librairie Droz, Genève, Librairie Minard, Paris, 1959, p. 161.

¹⁴⁷ David, Eric, *Principes de Droits des Conflits Armés*, Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 52.

¹⁴⁸ David, Eric, *Principes de Droits des Conflits Armés*, Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 53.

¹⁴⁹ Ronzitti, Natalino, *Droit humanitaire applicable aux conflits armés en mer*, Académie de Droit International, Recueil des Cours, Collected Courses, 1993, V, 242, p. 82. Véase también Jiménez de Aréchaga, Eduardo, " Balance sobre la actuación de la Corte Internacional de Justicia en los cuarenta

I. J. en el *Asunto de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua* donde afirmó que el hecho por el cual un Estado haya emplazado minas submarinas de contacto en las aguas interiores o territoriales de otro Estado constituye un hecho ilícito y que si, además, un Estado emplaza tales minas en aguas donde los buques de otro Estado pueden tener derecho de acceso o de pasaje sin aviso ni notificación y en detrimento de la navegación pacífica, viola los principios de D. I. H. sobre los cuales reposan las disposiciones específicas de la citada Convención que ella misma se encargara de aplicar en el *Asunto del Canal de Corfú* como

" ciertos principios generales y bien reconocidos, tales como elementales consideraciones de humanidad, aún más rigurosas en tiempos de paz que de guerra." ¹⁵⁰

Tal como puede apreciarse, la C. I. J. citando el pasaje de la sentencia pronunciada en el *Asunto del Canal de Corfú*, precisó que las " consideraciones elementales de humanidad" son un principio de D. I. H. que también resultan aplicables en tiempos de paz.

Por último, es importante resaltar que la decisión adoptada por la C. I. J. se vincula con una de las principales reglas de sustancia del D. I. H. en materia de conducción de hostilidades, más precisamente, en relación con el uso de minas submarinas de contacto: el respeto de la libertad de navegación prohíbe a los beligerantes emplazar tales minas no sólo en las aguas territoriales del adversario a los fines de interceptar la navegación comercial (Artículo 2, Convención VIII de La Haya de 1907), sino también en sus propias aguas territoriales sin notificación anterior al conjunto de la comunidad internacional.

c. Opinión Consultiva Relativa a las Reservas a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio

Esta primera afirmación de un D. I. H., en la especie de fuente consuetudinaria, que ampara valores esenciales a la humanidad es retomada y desarrollada poco después. En efecto, la C. I. J. emitió el 28 de mayo de 1951 la *Opinión Consultiva Relativa a las Reservas a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio*¹⁵¹ a pedido de la Asamblea General de la O. N. U.. En la oportunidad, consideró cuestiones tales como su competencia consultiva, y las reservas y sus efectos.¹⁵² Por lo cual, al analizar el carácter de las reservas que pueden formularse a la Convención sobre Genocidio como también las objeciones que pueden serles opuestas a aquéllas, sostuvo que los orígenes de la Convención revelan la intención de la O. N. U. de condenar y reprimir el genocidio como un crimen internacional que implica el rechazo del derecho a la existencia de grupos humanos enteros, rechazo que conmociona la conciencia humana, inflige grandes pérdidas a la humanidad, y es contrario, coetáneamente, a la ley moral y al espíritu y a los propósitos de la O. N. U.. Agregó que esta concepción conlleva, por una parte, que los principios fundamentales de la Convención son reconocidos como tales por las naciones civilizadas y que obligan a los Estados incluso fuera de toda relación convencional; y, por la otra, el carácter universal de la condena del genocidio y de la cooperación necesaria para liberar la humanidad de tal flagelo.¹⁵³

años de su funcionamiento", *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense*, 13, p. 198; Schwebel, Stephen, "Human Rights in the World Court", *Justice in International Law, Selected Writings of Judge Stephen Schwebel*, Grotius Publications, Cambridge University Press, 1994, p. 159.

¹⁵⁰ "certain general and well recognized principles, namely: elementary considerations of humanity, even more exacting in peace time than in war" (*I.C.J. Reports 1949*, p. 22." *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Merits, Judgment, *I.C.J. Reports 1986*, p. 112, par. 215.

¹⁵¹ *Réserves à la Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide, Avis Consultatif du 28 mai 1951, C.I.J. Recueil, 1951*, p. 15. Composición de la Corte: Basdevant, Presidente; Guerrero, Vicepresidente; Alvarez, Hackworth, Winiarski, Zoricic, De Visscher, Mc Nair, Klaestad, Badawi Pacha, Read, Hsu Mo, jueces: Hambro, Secretario.

¹⁵² *Réserves à la Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide, Avis Consultatif du 28 mai 1951, C.I.J. Recueil, 1951*, p. 16.

¹⁵³ "La réponse à ses questions doit être cherchée dans les traits particuliers que présente la Convention sur le génocide. Les origines et le caractère de la Convention, les fins poursuivies par l'Assemblée générale et par les parties contractantes, les rapports que présentent les dispositions de la

Como puede apreciarse, la C. I. J. declaró que los principios fundamentales de la Convención sobre Genocidio obligan a todos los Estados incluso fuera de toda relación convencional. Pues bien, ¿cuáles son tales principios? En opinión de la C. I. J., esta convención internacional confirma y sanciona los principios de moral más elementales, y en él los Estados no poseen intereses propios sino uno común, que es el de preservar los fines superiores que constituyen su fundamento.¹⁵⁴ La C. I. J. se refirió nuevamente a aquel principio cuando verificó que también existe otro de carácter fundamental en la Convención: el principio de humanidad. Los principios de moral y de humanidad que le dan fundamento, en su opinión, se verían minados por la exclusión completa de la Convención de uno o más Estados."¹⁵⁵

De lo expuesto, puede observarse que la C. I. J. determinó que los principios fundamentales de la Convención sobre Genocidio, que son los principios de moral y humanidad, obligan a los Estados incluso fuera de toda relación convencional.¹⁵⁶ De este modo, parecería que la norma convencional – la Convención sobre Genocidio– codifica la consuetudinaria – ambas vigentes – y que su razón de ser interesa a la comunidad internacional. Es por esta razón, que prevenir y reprimir el genocidio posee una naturaleza imperativa para los Estados.

¿Los principios de moral y humanidad resultan obligatorios porque son principios generales del derecho internacional o por ser normas internacionales consuetudinarias? Desde el momento en que la C. I. J. se refiere a principios de moral y humanidad parece indudable que les otorga carácter normativo en tanto que principios generales del derecho internacional; pero, al mismo tiempo, el hecho constatado por la C. I. J. por cuanto el principio de moral " fue confirmado y sancionado" por los Estados en la Convención parece sugerir que tal principio, en tanto que norma consuetudinaria, cristalizó en una convencional. Por lo demás, es

Convention entre elles et avec ses fins, fournissent des éléments d'interprétation de la volonté de l'Assemblée générale et des parties. Les origines de la Convention révèlent l'intention des Nations Unies de condamner et de réprimer le génocide comme 'un crime de droit de gens' impliquant le refus du droit à l'existence de groupes humains entiers, refus qui bouleverse la conscience humaine, inflige de grandes pertes à l'humanité, et qui est contraire à la fois à la loi morale et à l'esprit et aux fins des Nations Unies (résolution 96 (I) de l'Assemblée générale, 11 décembre 1946). Cette conception entraîne une première conséquence: les principes qui sont à la base de la Convention sont des principes reconnus par les nations civilisées comme obligeant les Etats même en dehors de tout lien conventionnel. Une deuxième conséquence est le caractère universel à la fois de la condamnation du génocide et de la coopération nécessaire 'pour libérer l'humanité d'un fléau si odieux' (préambule de la Convention). La Convention sur le génocide a donc été voulue tant par l'Assemblée générale que par les parties contractantes comme une convention de portée nettement universelle. En fait, elle fut approuvée, le 9 décembre 1948, par une résolution qui fut votée unanimement par cinquante-six Etats." *Réserves à la Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide, Avis Consultatif du 28 mai 1951, C.I.J. Recueil, 1951, p. 23.*

¹⁵⁴ "Les fins d'une telle convention doivent être retenues. La Convention a été manifestement adoptée dans un but purement humain et civilisateur. On ne peut même pas concevoir une convention qui offrirait à un plus haut degré ce double caractère, puisqu'elle vise d'une part à sauvegarder l'existence même de certains groupes humains, d'autre part à confirmer et à sanctionner les principes de morale les plus élémentaires. Dans une telle convention, les Etats contractants n'ont pas d'intérêts propres, ils ont seulement, tous et chacun, un intérêt commun, celui de préserver les fins supérieures qui sont la raison d'être de la convention. Il en résulte que l'on ne saurait, pour une convention de ce type, parler d'avantages ou de désavantages individuels des Etats, non plus que d'un exact équilibre contractuel à maintenir entre les droits et les charges. La considération des fins supérieures de la Convention est, en vertu de la volonté commune des parties, le fondement et la mesure de toutes les dispositions qu'elle renferme." *Réserves à la Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide, Avis Consultatif du 28 mai 1951, C.I.J. Recueil, 1951, p. 23.*

¹⁵⁵ "L'exclusion complète de la Convention d'un ou de plusieurs Etats, outre qu'elle restreindrait le cercle de son application, serait une atteinte à l'autorité des principes de morale et d'humanité qui sont à sa base." *Réserves à la Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide, Avis Consultatif du 28 mai 1951, C.I.J. Recueil, 1951, p. 24.*

¹⁵⁶ Al respecto se ha señalado que los principios en los cuales está basada la Convención sobre Genocidio fueron declarados por la CIJ de carácter obligatorio para todos los Estados, sean o no Partes a la Convención. Barboza, Julio, "The Customary Rule: From Chrysalis to Butterfly", en C.A. Armas Barea et al. (ed.), *Liber Amicorum José María Ruda*, The Hague, London, Boston, Kluwer Law International, 2000, p. 4.

importante resaltar que no parece resultar de esta opinión consultiva el carácter consuetudinario de la Convención toda. Se ha sostenido que, en otras palabras, independientemente de la participación en la Convención sobre Genocidio la obligación de no cometer este crimen existe en el derecho internacional general,¹⁵⁷ ya que la aceptación general de las normas allí contenidas por parte de la comunidad internacional a partir de su adopción en 1948 significa que los principios generales del derecho internacional que le dan fundamento deben ser considerados hoy en día como parte del derecho consuetudinario.¹⁵⁸

Es dable recordar que la C. I. J. en el citado pasaje de su pronunciamiento afirmó "el carácter universal de la condena del genocidio y de la cooperación necesaria para erradicar tal flagelo". ¿Significa tal afirmación la existencia de una norma internacional que impone a todos los Estados la obligación de condenar el genocidio y cooperar en la erradicación de tal crimen? En principio, puede avanzarse la idea de que la C. I. J. pareció ver en ese entonces la existencia de una norma consuetudinaria que impone a los Estados la obligación de condenar la comisión de actos de genocidio y de cooperar en la lucha contra tal crimen; pero, de este modo, surge un nuevo interrogante en relación con el contenido de tal norma.¹⁵⁹ Por lo demás, parecería también que al afirmarse que los Estados Partes a la Convención sobre Genocidio tienen el interés común de preservar los fines superiores de ésta, vislumbró en la oportunidad el carácter de *ius cogens* de la prohibición de cometer actos de genocidio y de cooperar en la lucha contra tal crimen. Como se verá a continuación en el *Asunto de la Barcelona Traction*, la C. I. J. reafirmó el carácter consuetudinario de la obligación internacional que impone a los Estados condenar el genocidio y de cooperar en la lucha contra tal crimen, y, además, verificó el carácter *erga omnes* de esta obligación.

d. Asunto de la Barcelona Traction, Light and Power Company Ltd.

El 5 de febrero de 1970 la C. I. J.¹⁶⁰ pronunció la sentencia (segunda fase) en el *Asunto de la Barcelona Traction, Light and Power Company Ltd.*¹⁶¹ El gobierno belga presentó el 19 de junio de 1962 una demanda cuya petición era la reparación de los daños que habrían sufrido ciudadanos belgas, accionarios de la sociedad Barcelona Traction, que se originaran en actos alegados como contrarios al derecho internacional y cometidos en perjuicio de la sociedad por órganos del Estado español.

En un pasaje de su pronunciamiento, la C. I. J. estableció una distinción entre las obligaciones de los Estados hacia la comunidad internacional en su conjunto y aquellas que nacen *vis a vis* de otro Estado en el campo de la protección diplomática, otorgándole a las primeras el carácter de *erga omnes*, es decir, normas en la cuales todos los Estados pueden ser considerados como teniendo un interés jurídico a que sus derechos sean protegidos.¹⁶² Acto seguido, brindó como un ejemplo de este tipo de obligaciones, la derivada del derecho

¹⁵⁷ Rodley, Nigel, "Human Rights and Humanitarian Intervention: the Case Law of the World Court", *The International and Comparative Law Quarterly*, 38, 1989, p. 322.

¹⁵⁸ Schabas, William, *Genocide in International Law*, Cambridge University Press, 2000, pp. 4 y 47. Nótese la cita por la cual John Dugard opina que no es seguro que la Convención sobre Genocidio de 1948 se haya en sí misma convertido en derecho consuetudinario.

¹⁵⁹ Es importante destacar que en 1993, la CIJ reafirmó que los Estados se encontraban obligados a prevenir la comisión de cometer tales actos. *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Provisional Measures, Order of 8 April 1993, I.C.J. Reports 1993*, p. 22, par. 45.

¹⁶⁰ Sr. Bustamante y Rivero, *Presidente*; Sr. Koretsky, *Vicepresidente*; sir Gerald Fitzmaurice, Sres. Tanaka, Jessup, Morelli, Padilla Nervo; Forster; Gros, Ammoun, Bengzon, Petrén, Lachs, Onyeama, *jueces*; Sres. Armand-Ugon, Riphagen, *jueces ad hoc*; Sr. Aquarone, Secretario.

¹⁶¹ *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, arrêt, C.I.J. Recueil 1970*, p. 3.

¹⁶² " ...Une distinction essentielle doit en particulier être établie entre les obligations des États envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d'un autre État dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature même, les premières concernent tous les États. Vu l'importance des droits en cause, tous les États peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés; les obligations dont il s'agit sont des obligations *erga omnes*. » *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, arrêt, C.I.J. Recueil 1970*, p. 32, par. 33.

internacional general que establece la criminalidad del genocidio, tal como lo verificara en la opinión consultiva de 1951 y ella se encargara de recordar en el asunto en consideración.¹⁶³ Se concluye, por una parte, que la C. I. J. confirmó que el deber de prevenir y castigar el genocidio era de naturaleza consuetudinaria ya a la época de la opinión consultiva de 1951 y, por la otra, que existe una obligación internacional de carácter *erga omnes* en el derecho internacional contemporáneo que establece la prohibición de cometer actos de genocidio.

Al respecto, Schwebel sostiene que la decisión referida precedentemente reviste una importancia primordial para la protección internacional de los derechos humanos,¹⁶⁴ en tanto que Higgins, por su parte, que los ejemplos de genocidio y agresión citados por la C. I. J. no fueron excepcionales en sí mismos¹⁶⁵

Ahora bien, como puede apreciarse, la C. I. J. distinguió entre las llamadas obligaciones bilaterales y las obligaciones "hacia la comunidad internacional en su conjunto", es decir, *erga omnes*. Como lo nota un autor, ninguna opinión separada o disidente se apartó de esta constatación realizada por la C. I. J.¹⁶⁶ Si bien algún sector de la doctrina opina que la utilidad de tal distinción parece dudosa en vista de que resulta difícil describir más exactamente las obligaciones que pertenecen a la segunda categoría de obligaciones y de imaginar situaciones en las cuales su violación podría dar lugar a un proceso ante la C. I. J.,¹⁶⁷ resulta necesario señalar que la importancia del *obiter dictum* en consideración estuvo al origen de la distinción entre crímenes y delitos internacionales que sugirió la Comisión de Derecho Internacional en su tarea de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional: los primeros son aquellos actos de tal gravedad que afectan los intereses fundamentales de la comunidad internacional en su conjunto, entre los cuales se encuentra el crimen de genocidio. En esta situación, se autorizaría a otros Estados distintos del directamente lesionado a reclamar la responsabilidad contraída. En cambio, para el caso de los delitos internacionales, sólo el Estado lesionado estaría autorizado a reclamar.¹⁶⁸ Charpentier, por su parte, remarca que las obligaciones *erga omnes* en el sentido del *obiter dictum* de la C. I. J. son obligaciones imperativas de *ius cogens*, convencionales o consuetudinarias, y de contenido incierto.¹⁶⁹ En cuanto a su alcance, sostiene que sólo las obligaciones de *ius cogens* de origen consuetudinario otorgarían a todos los Estados legitimación para reclamar su respeto, ya que en el caso de obligaciones de *ius cogens* de origen convencional se verían afectadas por el principio del efecto útil de los tratados y, así, sólo los Estados Partes a dichas convenciones

¹⁶³ "Ces obligations découlent, par exemple, dans le droit international contemporain, de la mise hors la loi des actes d'agression et du génocide mais aussi des principes et des règles concernant les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection contre la pratique de l'esclavage et la discrimination raciale. Certains droits de protection correspondants se sont intégrés au droit international général (Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1951, p. 23); d'autres sont conférés par des instruments internationaux de caractère universel ou quasi universel." *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, arrêt, C.I.J. Recueil 1970*, p. 32, par. 34.

¹⁶⁴ Schwebel, Stephen, "Human Rights in the World Court", *Justice in International Law – Selected Writings of Judge Stephen M. Schwebel* -, Grotius Publications, Cambridge University Press, 1994, p. 164.

¹⁶⁵ Higgins, Rosalyn, "Aspects of the Case Concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, Ltd.", *Virginia Journal of International Law*, vol. 11, 1970-71, p. 328.

¹⁶⁶ Rodley, Nigel, "Human Rights and Humanitarian Intervention: the Case Law of the World Court", *The International and Comparative Law Quarterly*, 38, 1989, p. 323.

¹⁶⁷ Grisel, Etienne, "L'arrêt de la Cour internationale de Justice dans l'affaire de la Barcelona Traction (second phase): problèmes de procédure et de fond", *Annuaire suisse de droit de droit international*, 1971, XXVII, p. 44. Véase también Charpentier, Jean, "Cour internationale de Justice. Affaire de la Barcelona Traction. Arrêt du 5 février 1970", *Annuaire français de droit international*, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1970, p. 312, par. 15.

¹⁶⁸ Jiménez de Aréchaga, Eduardo, "Balance sobre la actuación de la Corte Internacional de Justicia en los cuarenta años de su funcionamiento", *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense*, 13, 1987, p. 201.

¹⁶⁹ Charpentier, Jean, "Cour internationale de Justice. Affaire de la Barcelona Traction. Arrêt du 5 février 1970", *Annuaire français de droit international*, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1970, p. 311, par. 13.

tendrían legitimación para actuar sin necesidad de tener que invocar la lesión de un interés subjetivo.¹⁷⁰

Por consiguiente, puede concluirse que la C. I. J. en su *obiter dictum* del *Asunto de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited* verificó la obligación internacional *erga omnes* de la prohibición de cometer actos de genocidio, en tanto que norma positiva de carácter dual, es decir, consuetudinaria y convencional.

e. Asunto Relativo a las Actividades Militares y Paramilitares

El 27 de junio de 1986, la C. I. J.¹⁷¹ pronunció la sentencia de fondo en el *Asunto Relativo a las Actividades Militares y Paramilitares (Nicaragua c. Estados Unidos de América)*.¹⁷² Cabe recordar, que el 9 de abril de 1984 el gobierno de Nicaragua presentó una demanda contra el de los Estados Unidos de América, en relación con una controversia relativa a la responsabilidad por actividades militares y paramilitares en y contra el Estado demandante.¹⁷³ A modo preliminar, es de destacar que la declaración de aceptación de la jurisdicción de la C. I. J. presentada por los Estados Unidos de América en 1946 excluye de su aplicación a las controversias concernientes a un tratado multilateral, al menos que las partes al tratado afectadas por la decisión sean también partes en el caso presentado ante la C. I. J., o que aquel país especialmente acepte su jurisdicción. Si bien este país no avanzó como argumento para el rechazo de la demanda incoada por Nicaragua la reserva formulada en tal declaración de aceptación de jurisdicción, la C. I. J. no presumió su renuncia y, consecuentemente, evaluó las eventuales consecuencias para el caso sometido a su consideración. En este contexto, recordó que el efecto de tal reserva es únicamente el de excluir la aplicación de la Carta de la O. N. U. y la de la O. E. A. en tanto que derecho convencional multilateral y que no tiene incidencia alguna sobre las fuentes de derecho internacional que el Artículo 38 de su Estatuto le impone aplicar.¹⁷⁴ Como se verá mas adelante, la mencionada reserva tampoco fue impedimento para que los principios fundamentales de D. I. H. contenidos en los Convenios de Ginebra de 1949, tratados multilaterales, fueran aplicados por la C. I. J., en tanto que normas internacionales consuetudinarias, en la solución de la controversia.

La C. I. J. asimismo constató que entre 1981 y el 30 de septiembre de 1984 el gobierno de los Estados Unidos de América suministró fondos para actividades militares y paramilitares de los *contras* en Nicaragua, y luego de esa fecha, en concepto de "ayuda humanitaria";¹⁷⁵ que la ayuda estadounidense a las actividades desplegadas por los *contras* fue diversa, tal como soporte logístico, información sobre la ubicación y movimientos de las tropas sandinistas, sofisticados medios de comunicación, radares, etc.; y que un número de actividades militares y paramilitares de los *contras* fue decidido y planificado con la colaboración de las autoridades de los Estados Unidos.¹⁷⁶ Luego, pasó a considerar si la relación de la fuerza *contra* con el gobierno estadounidense era sólo una relación de dependencia económica, o, por el contrario, una relación de control tal que, jurídicamente, atribuiría a aquella fuerza la calidad de órgano de los Estados Unidos. Sin embargo, no entendió que esto último hubiese sido

¹⁷⁰ Charpentier, Jean. "Cour internationale de Justice. Affaire de la Barcelona Traction. Arrêt du 5 février 1970", *Annuaire français de droit international*, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1970, p. 312, par. 15.

¹⁷¹ Sr. Nagendra Singh, *Presidente*; Sr. de Lacharrière, *Vicepresidente*; Sres. Lachs, Ruda, Elias, Oda, Ago, Sette-Camera, Schwebel, Sir Robert Jennings, Mbaye, Bedjaoui, Ni, Evensen, *jueces*; Colliard, *juez ad-hoc*; Torres Bernárdez, *Secretario*.

¹⁷² *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, *Merits, Judgment*, I.C.J. Reports 1986, p. 14.

¹⁷³ *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, *Merits, Judgment*, I.C.J. Reports 1986, p. 16, par. 1.

¹⁷⁴ *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, *Merits, Judgment*, I.C.J. Reports 1986, p. 48, par. 57.

¹⁷⁵ *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, *Merits, Judgment*, I.C.J. Reports 1986, p. 58, par. 99.

¹⁷⁶ *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, *Merits, Judgment*, I.C.J. Reports 1986, p. 61, par. 106.

suficientemente probado.¹⁷⁷ Sí constató que la fuerza *contra*, al menos en un período, fue muy dependiente del gobierno del Estado demandado en un grado tal que no hubiera podido realizar sus más cruciales y significativas actividades militares y paramilitares sin la multifacética ayuda de los Estados Unidos.¹⁷⁸ No obstante, no pudo concluir que los *contras* pudieran ser equiparados a un órgano del gobierno de los Estados Unidos.¹⁷⁹ La cuestión de conocer qué grado de control el gobierno de este país tenía sobre los *contras* era crucial a los fines de atribuir responsabilidad internacional a los Estados Unidos por los asesinatos, lesiones y secuestros realizadas por aquéllos en territorio nicaragüense, y así la C. I. J. lo estableció.¹⁸⁰

El razonamiento seguido por la C. I. J. fue que, aún siendo preponderante o decisiva la participación del Estado demandado en la financiación, organización, entrenamiento, suministro y equipamiento de los *contras*, la selección de sus objetivos militares y paramilitares y la planificación de toda la operación, resulta insuficiente en sí misma para atribuir responsabilidad internacional a los Estados Unidos por las actividades militares y paramilitares de aquéllos. La C. I. J. sostuvo que aún el control general ejercido por el Estado demandado sobre una fuerza con un alto grado de dependencia de aquél no significa – sin contar con prueba adicional – que los Estados Unidos hayan dirigido u obligado a cometer las violaciones a los derechos humanos y al D. I. H. alegadas en la demanda, ya que dichos actos podrían haber sido cometidos por miembros de la fuerza *contra* sin el control del gobierno demandado. Para atribuir responsabilidad internacional a los Estados Unidos, la C. I. J. sostuvo que debería ser probado en principio que este Estado tenía un control efectivo sobre las operaciones militares o paramilitares en el curso de las cuales las alegadas violaciones se habrían producido.

Una vez adentrada, la C. I. J., en la cuestión relativa al derecho aplicable al caso en estudio, decidió que ante la reserva formulada por el Estado demandado en relación con los tratados multilaterales no aplicaría aquellos invocados por Nicaragua en apoyo de sus argumentos sin perjuicio de aplicar otros tratados u otras fuentes de derecho internacional mencionadas en el Artículo 38 de su Estatuto.¹⁸¹ Nicaragua no invocó de modo expreso las normas jurídicas que conforman el D. I. H., sino que fundó su reclamo en relación con actos cometidos en su territorio que a la postre podrían resultar violaciones a las disposiciones de tal rama del derecho internacional.¹⁸² Por otro lado, la C. I. J. consideró que de acuerdo a la prueba producida en el proceso no pudo atribuir a los Estados Unidos responsabilidad por los actos cometidos por los *contras* en el curso de sus actividades militares y paramilitares en Nicaragua.¹⁸³ La C. I. J. se abocó entonces a analizar el derecho aplicable a los actos cometidos por el Estado demandado en relación con las actividades de los *contras*, y en particular la producción y circulación del manual de operaciones psicológicas descrito en los parágrafos 117-122 de la sentencia.¹⁸⁴ Entonces, decidió juzgar la conducta del Estado demandado de acuerdo a los principios generales fundamentales del D. I. H., y expresó que los Convenios de

¹⁷⁷ *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 62, par. 109. Acerca de si una ayuda financiera decisiva no puede ser asimilada a una forma de control, véase Lang, Caroline, *L'affaire Nicaragua / États-Unis devant la Cour internationale de Justice*, Bibliothèque de Droit international, Tome 100, L.G.D.J., Paris, 1990, p. 220.

¹⁷⁸ *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 63, par. 111.

¹⁷⁹ *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, pp. 62-63, par. 110.

¹⁸⁰ *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 63, par. 113.

¹⁸¹ *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 92, par. 172.

¹⁸² *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, pp. 63-64, par. 113.

¹⁸³ *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, pp. 64-65, par. 115.

¹⁸⁴ *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, pp. 112-113, par. 216.

Ginebra son, en algunos aspectos, un desarrollo, y, en otros, la expresión, de tales principios – lo que conlleva la verificación como norma consuetudinaria de éstos últimos –; que las normas mínimas de protección establecidas en el Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 – previstas para aplicarse durante los conflictos armados no internacionales – resultan también aplicables en los conflictos armados internacionales sin perjuicio de las normas específicas aplicables en estas situaciones en razón de que reflejan consideraciones elementales de humanidad, de acuerdo a su pronunciamiento en el *Asunto del Canal de Corfú*. De este modo, la C. I. J. evitó el requerimiento de decidir qué papel jugaba la reserva a los tratados multilaterales opuesta por los Estados Unidos en los Convenios de Ginebra de 1949.¹⁸⁵

El pasaje de la sentencia transcrito es remarcable porque la C. I. J. declaró que los Convenios de Ginebra de 1949 son, en algunos aspectos, la expresión de los principios generales de D. I. H. de carácter fundamental, es decir, la expresión de abstracciones de normas tanto convencionales como consuetudinarias. A partir de esta afirmación, puede inferirse el carácter consuetudinario de los principios generales fundamentales de D. I. H. contenidos en aquellos convenios. Asimismo, parecería que esta constatación posee una consecuencia práctica limitada debido al amplísimo grado de ratificación o adhesión a tales instrumentos jurídicos por parte de los Estados que componen la comunidad internacional. En segundo lugar, es de resaltar la determinación de que el Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 – el cual en los términos de estos instrumentos es tan sólo aplicable en conflictos armados de carácter no internacional – contiene reglas mínimas que también resultan aplicables en los conflictos armados de carácter internacional. Al respecto, un comentarista, ha remarcado que la asimilación de los principios generales del D. I. H. a la costumbre que realizó la C. I. J. es un tanto infeliz por cuanto se sirvió del concepto de “consideraciones elementales de humanidad” tan sólo en el ámbito del derecho de los conflictos armados y agregó que los principios generales del D. I. H. inspiran tanto las normas convencionales como consuetudinarias.¹⁸⁶

En otro pasaje de la sentencia, la C. I. J. afirmó que las obligaciones de respetar y hacer respetar los Convenios de Ginebra de 1949 derivan no sólo de la disposición específica plasmada en el Artículo 1 común a los cuatro convenios, sino también de los principios generales de D. I. H..¹⁸⁷ Es decir, verificó el carácter consuetudinario de tal obligación

¹⁸⁵ * The Court observes however sees no need to take a position on that matter, since in its view the conduct of the United States may be judged according to the fundamental general principles of humanitarian law; in its view, the Geneva Conventions are in some respects a development, and in other respects no more than the expression, of such principles. It is significant in this respect that, according to the terms of the Conventions, the denunciation on one of them ‘shall in no way impair the obligations which the Parties to the conflict shall remain bound to fulfill by virtue of the principles of the law of nations, as they result from the usages established among civilized peoples, from the laws of humanity and the dictates of the public conscience’ (Convention I, Art. 63; Convention II, Art. 62; Convention III, Art. 142; Convention IV, Art. 158) Article 3 which is common to all four Geneva Conventions of 12 August 1949 defines certain rules to be applied in the armed conflicts of a non-international character. There is no doubt that, in the event of international armed conflicts, these rules also constitute a minimum yardstick, in addition to the more elaborate rules which are also to apply to international conflicts; and they are rules which, in the Court’s opinion, reflect what the Court in 1949 called ‘elementary considerations of humanity’ (Corfu Channel, Merits, I.C.J. Reports 1949, p. 22; paragraph 215 above) The Court may therefore find them applicable to the present dispute, and is thus not required to decide what role the United States multilateral treaty reservation might otherwise play in regard to the treaties in question.” *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, pp. 113-114, par. 218.

¹⁸⁶ Bruderlain, Claude, “De la coutume en droit international humanitaire”, *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 792, novembre – décembre 1991, p. 618.

¹⁸⁷ Su versión original, reza: “The Court considers that there is an obligation on the United States Government, in the terms of Article 1 of the Geneva Conventions, to ‘respect’ the Conventions and even ‘to ensure respect’ for them ‘in all circumstances’, since such an obligation does not derive only from the Convention themselves, but from the general principles of humanitarian law to which the Conventions merely give specific expression. The United States is thus under an obligation not to encourage persons or groups engaged in the conflict in Nicaragua to act in violation of the provisions of Article 3 common

internacional. Así, un interrogante que surge del referido pasaje es saber si el carácter consuetudinario de la obligación de respetar y hacer respetar los Convenios de Ginebra de 1949 contenida en el Artículo 1 común es extensiva, *mutatis mutandi*, a la misma obligación pero contenida en el Artículo 1 del Protocolo Adicional I de 1977. Finalmente, tal pasaje reviste gran importancia dado que establece que la obligación de marras incluye la situación prevista en el Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, es decir, es aplicable también en una situación de conflicto armado de carácter no internacional.

Por último, la C. I. J. decidió que los Estados Unidos violaron las normas consuetudinarias relativas a la notificación de la existencia y emplazamiento de minas¹⁸⁸ y declaró que este mismo país, en razón de haber producido en 1983 un manual intitulado "Operaciones Sicológicas en Guerra de Guerrillas" y distribuido éste entre los *contras*, instigó a éstos a cometer actos contrarios a los principios generales del D. I. H., agregando que no encontró elementos suficientes para concluir que los actos mencionados que pudieran haberse cometido fueran imputables a los Estados Unidos en tanto que hechos suyos.¹⁸⁹ En opinión de la C. I. J. se desprende que la responsabilidad internacional sólo es atribuible a un Estado en tales circunstancias, en la medida que dicho Estado posea un control efectivo sobre las operaciones militares o paramilitares en cuyo transcurso se produzcan las violaciones al D. I. H."¹⁹⁰ La verificación de tales normas consuetudinarias de D. I. H. efectuada por la C. I. J. fue puesta en duda o controvertida por algunos de sus miembros.¹⁹¹ Un buen ejemplo de ello lo constituyen las opiniones emitidas por los jueces Ago¹⁹² y Jennings¹⁹³ acerca de la identidad de contenidos entre los Convenios de Ginebra y "ciertos principios generales de base del D. I. H." – para el primero de ellos – o del valor consuetudinario de aquellos instrumentos – para el segundo de los nombrados -.

f. Opinión Consultiva sobre la Legalidad de la Amenaza o Empleo de Armas Nucleares

El 8 de julio de 1996 la C. I. J.¹⁹⁴ emitió la *Opinión Consultiva sobre la Legalidad de la Amenaza o Empleo de Armas Nucleares*.¹⁹⁵ Esta opinión consultiva, fue la respuesta al requerimiento contenido en la Resolución 49/75 K que fuera adoptada por la Asamblea General de la O. N. U. el día 15 de diciembre 1994 en los siguientes términos:

"La Asamblea General... decide... requerir a la Corte Internacional de Justicia emitir urgentemente su opinión consultiva en relación con la pregunta siguiente: ¿La amenaza o

to the four 1949 Geneva Conventions." *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 114, par. 220.

¹⁸⁸ *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, pp. 147-148, par. 292 (8).

¹⁸⁹ *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 148, par. 292 (9).

¹⁹⁰ Rodríguez Carrión, Alejandro J., "El Derecho Internacional en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el Asunto Nicaragua-Estados Unidos", *Cursos de Derecho Internacional de Vitoria Gasteiz*, Servicio Editorial Universidad del País Vasco, 1987, p. 49.

¹⁹¹ Rodríguez Carrión, Alejandro J., "El Derecho Internacional en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el Asunto Nicaragua-Estados Unidos", *Cursos de Derecho Internacional de Vitoria Gasteiz*, Servicio Editorial Universidad del País Vasco, 1987, p. 51; Schwebel, Stephen, "Human Rights in the World Court", *Justice in International Law – Selected Writings of Judge Stephen M. Schwebel* -, Grotius Publications, Cambridge University Press, 1994, p. 166.

¹⁹² *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, Separate Opinion of Judge Ago, p. 184.

¹⁹³ *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, Dissenting Opinion of Judge Jennings, p. 537.

¹⁹⁴ Composición de la Corte: Bedjaoui, Presidente; Schwebel, Vicepresidente; Oda, Guillaume, Shahabuddeen, Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Fleischhauer, Koroma, Vereschetin, Ferrari Bravo, Higgins, Jueces: Valencia-Ospina, Secretario.

¹⁹⁵ *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996*, p. 226.

empleo de armas nucleares, según el derecho internacional, es permitida en toda circunstancia?"¹⁹⁶

La literatura que se aboca al tratamiento de la importancia que de un modo u otro han tenido las reflexiones de la C. I. J. para el conjunto del D. I. H. es muy abundante.¹⁹⁷

En su pronunciamiento, la C. I. J. declaró que de acuerdo al Artículo II de la Convención sobre Genocidio, un acto de genocidio sólo es configurable en la medida que se compruebe la intención específica de destruir un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. En su opinión, sólo sería posible llegar a tal conclusión luego de haber considerado las circunstancias específicas de cada caso.¹⁹⁸

La C. I. J. también reconoció que el empleo de armas nucleares podría constituir una catástrofe para el medio ambiente y verificó la existencia de una obligación general que pesa sobre los Estados de velar por que las actividades desarrolladas en su jurisdicción y control respeten el medio ambiente de otros Estados o de áreas situadas fuera de su control nacional, que forma parte del cuerpo de normas del derecho internacional del medio ambiente.¹⁹⁹ Opinó también que la cuestión planteada no pasa por determinar si los tratados relativos a la protección del medio ambiente son aplicables o no en tiempos de conflicto armado, sino más bien de determinar si las obligaciones derivadas de tales tratados han sido concebidas como imponiendo una abstención total durante un conflicto que reviste tal carácter. Así, consideró que los instrumentos internacionales considerados no fueron concebidos en el entendimiento de privar a un Estado de su derecho de legítima defensa a causa de proteger el medio ambiente, y que no obstante lo apuntado, los Estados deben tomar en cuenta las consideraciones ecológicas al momento de decidir aquello que es necesario y proporcional al momento de una acción militar. Para ello se fundó en el Principio 24 de la Declaración de Río, que dispone:

"La guerra es, por definición, enemiga del desarrollo sostenible. En consecuencia, los Estados deben respetar las disposiciones de derecho internacional que protegen al medio ambiente en tiempos de conflicto armado, y cooperar en su ulterior desarrollo, según sea necesario."²⁰⁰

¹⁹⁶ Traducción del autor. Su versión original, reza: "The General Assembly... decides... to request the International Court of Justice urgently to render its advisory opinion on the following question: is the threat or use of nuclear weapons in any circumstance permitted under international law." *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996*, p. 228. Algunos autores señalan que la cuestión de principio subyacente –aquella de saber si la Corte debería buscar una autorización o una prohibición– resulta incierta incluso en la Opinión Consultiva misma. Véase Greenwood, Christopher. "L'avis consultatif sur les armes nucléaires de la CIJ", *Revue Internationale de la Croix-Rouge, janvier-février 1997*, 823, p. 73.

¹⁹⁷ Para una primera aproximación, véase: Sandoz, Yves. "Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la licéité de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires – Remarques préliminaires", p. 6; Condorelli, Luigi. "La Cour internationale de Justice sous le poids des armes nucléaires: jura non novit curia?", p. 9; David, Eric. "L'avis de la Cour internationale de Justice sur la licéité de l'emploi des armes nucléaires", p. 22; Doswald-Beck, Louis. "Le droit international humanitaire et l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires", p. 37; Fujita, Hisakazu. "Au sujet de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice rendu sur la licéité des armes nucléaires", p. 60; Greenwood, Christopher. "L'avis consultatif sur les armes nucléaires et la contribution de la Cour internationale de Justice au droit international humanitaire", p. 70; McComarck, Timothy L.H. "Un non liquet sur les armes nucléaires – La Cour internationale de Justice élude l'application des principes généraux du droit international humanitaire", p. 82; Mohr, Manfred. "Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la licéité de l'emploi d'armes nucléaires – Quelques réflexions sur ses points forts et ses points faibles", p. 99; McNeill, John H. "L'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en l'affaire des armes nucléaires – Première évaluation", p. 110. En *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 823, janvier-février 1997.

¹⁹⁸ *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996*, p. 240, par. 26.

¹⁹⁹ *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996*, p. 241-242, par. 29.

²⁰⁰ *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996*, p. 242, par. 30.

La doctrina señala que, consecuencia de lo afirmado por la C. I. J., es la demostración de que el derecho de los conflictos armados es un derecho con un contenido específico pero no excluyente de otras normas, tales como las relativas a la protección del medio ambiente.²⁰¹ En este contexto, la C. I. J. notó que los Artículos 35, parágrafo 3, y 55 del Protocolo Adicional I proveen protección adicional para el medio ambiente y que estas son poderosas limitaciones para los Estados que hubieran suscripto tales provisiones,²⁰² de lo que podría deducirse que para aquélla el último instrumento legal señalado no reviste en su totalidad carácter consuetudinario. Asimismo, opinó que la obligación de los Estados de respetar y proteger el medio ambiente es aplicable al empleo de armas nucleares durante un conflicto armado.²⁰³ Por tanto, concluyó que si bien el derecho internacional existente relativo a la protección y salvaguardia del medio ambiente no prohíbe específicamente el uso de armas nucleares,²⁰⁴ existen factores ambientales que deben ser tenidos en cuenta en el contexto de la implementación de los principios y reglas aplicables durante los conflictos armados.²⁰⁵ Como consecuencia de lo expuesto, David opina que la C. I. J. ha consagrado implícitamente la aplicación consuetudinaria del derecho del medio ambiente en los conflictos armados.²⁰⁶

La C. I. J. sostuvo que la práctica de los Estados demuestra que la ilegalidad del empleo de ciertas armas como tales se formula en forma de prohibición²⁰⁷ y no encontró prohibición específica alguna en cuanto al empleo de armas nucleares en los tratados que prohíben expresamente el empleo de ciertas armas de destrucción masiva.²⁰⁸ En este marco, pasó a examinar entonces el derecho internacional consuetudinario con la finalidad de determinar si existe alguna prohibición de la amenaza o empleo de las armas nucleares como tal, concluyendo que la aparición en tanto que *lex lata* de una norma consuetudinaria que prohíba el empleo de armas nucleares se ha visto frustrada por las tensiones que subsisten entre, por una parte, una *opinio juris* en estado naciente y, por la otra, una fuerte adhesión a la práctica de la disuasión.²⁰⁹

En lo que principalmente interesa al presente trabajo, señaló que numerosas normas de carácter consuetudinario han sido desarrolladas por medio de la práctica de los Estados y que ahora forman parte de los principios y reglas del D. I. H., el que, en su opinión, resulta de los llamados "Derecho de La Haya" y "Derecho de Ginebra".²¹⁰

La C. I. J. sostuvo que los principios cardinales del D. I. H. son, en primer lugar, el de la protección de la población civil y de los bienes de carácter civil, que establece la distinción entre combatientes y no combatientes. En este caso, los Estados no deben hacer objetivo de un ataque a la población civil y, consecuentemente, no deben emplear armas incapaces de

²⁰¹ David, Eric, *Principes de Droit des Conflits Armés*, Bruxelles, Bruylant, pp. 64-67.

²⁰² *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996*, p. 242, par. 31.

²⁰³ *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996*, p. 242, par. 32.

²⁰⁴ Algunos autores sostienen que hubiera sido extraordinario que la Corte concluya que los Estados dotados de armas nucleares, los cuales se esmeraron en asegurarse que los tratados sobre armamento y el derecho de los conflictos armados no prohíban el empleo de armas nucleares, hayan abandonado toda posibilidad de emplearlas convirtiéndose en Partes de convenios generales sobre protección al medio ambiente. Véase Greenwood, Christopher, "L'avis consultatif sur les armes nucléaires de la CIJ", *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 823, janvier-février 1997, p. 75.

²⁰⁵ *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996*, p. 242, par. 33.

²⁰⁶ David, Eric, *Principes de Droit des Conflits Armés*, Bruylant, Bruxelles, p. 268.

²⁰⁷ *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996*, p. 247, par. 52.

²⁰⁸ *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996*, p. 248, par. 57.

²⁰⁹ *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996*, p. 255, par. 73.

²¹⁰ *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996*, p. 256, par. 75.

distinguir entre civiles y objetivos militares.²¹¹ Tal como fuera formulado, este principio resulta aplicable en todo conflicto armado, ya que no surtió tal formulación con una distinción entre aquellos que poseen carácter internacional de aquellos que no lo son. El segundo principio, establece la prohibición de causar sufrimientos innecesarios a los combatientes. De este modo, se prohíbe el uso de armas que causen tales sufrimientos o puedan agravarlos. En aplicación de este segundo principio, los Estados no tienen una elección ilimitada de los medios de combate que utilizan.

La C. I. J. mencionó que los Estados han adherido en gran número a las reglas de D. I. H. contenidas en los Convenios de La Haya y de Ginebra, en razón de que son fundamentales para el respeto de la persona humana y por "consideraciones elementales de humanidad" - tal como ella pusiera de relieve en su Sentencia del 9 de abril de 1949 en el *Asunto del Canal de Corfú (I.C.J. Reports 1949, p. 22)* - y que estas reglas fundamentales se imponen a todos los Estados independientemente de que hayan o no ratificado estos instrumentos, porque constituyen principios intransigibles de derecho internacional consuetudinario.²¹² David, apunta que "principios intransigibles" y normas imperativas a las cuales "ninguna derogación es permitida" (Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, Artículo 53) significan lo mismo, y que la C. I. J. reconoció así, implícitamente, que la mayoría de las reglas del D. I. H., sobre todo aquellas que son "fundamentales para el respeto de la persona humana", se asimilan a normas de *ius cogens*.²¹³ Condorelli, por su parte, sostiene que tales "principios intransigibles" son solamente un acercamiento al *ius cogens*, dada la aclaración efectuada por la C. I. J. en el párrafo 83, por cuanto ésta no debía en la ocasión expedirse acerca de la naturaleza de tales normas.²¹⁴ La C. I. J. señaló entonces que la amplia tarea de codificación del D. I. H. y los tratados que así resultaron, proveyó a la comunidad internacional un cuerpo de reglas convencionales que hoy en día ha alcanzado carácter consuetudinario en su gran mayoría y que se corresponden con los principios humanitarios universalmente reconocidos.²¹⁵ Uno podría preguntarse, así, dado el amplio alcance que tiene esta proposición de la C. I. J., si ella hizo también referencia a otros tratados distintos de los Convenios de Ginebra de 1949, tales como sus dos Protocolos Adicionales de 1977.

La C. I. J. determinó que los principios y reglas fundamentales del D. I. H. resultan aplicables a las armas nucleares²¹⁶ y agregó que ve en la cláusula Martens, siempre vigente, la confirmación de que los principios y reglas del D. I. H. se aplican a las armas nucleares.²¹⁷ Por lo demás, reconoció que si bien la aplicación de los principios y reglas aludidos no se encuentra casi controvertida, las consecuencias a extraer de tal aplicación, por el contrario, sí lo son.²¹⁸ Acto seguido, consideró que en razón de las características únicas de las armas nucleares su empleo parece escasamente conciliable con el respeto de los principios de distinción y el de evitar sufrimientos innecesarios a los combatientes, estimando no poseer elementos suficientes para concluir con certeza que el uso de armas nucleares resulte necesariamente

²¹¹ La doctrina señala la importancia de esta declaración del carácter consuetudinario de tal principio, ya que su única formulación convencional tiene lugar en el Protocolo Adicional I de 1977. Doswald-Beck, Louise, "Le Droit international Humanitaire et l'Avis Consultatif de la CIJ", *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 823, janvier-février 1997, p. 41.

²¹² *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 257, par. 79.*

²¹³ David, Eric, *Principes de Droit des Conflits Armés*, Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 92.

²¹⁴ Condorelli, Luigi, "La CIJ sous le poids des armes nucléaires", *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 823, janvier-février 1997, p. 18.

²¹⁵ *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 258, par. 82.*

²¹⁶ *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 259, par. 85.* Véase también Fujita, Hisakazu, "Au sujet de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice rendu sur la licéité des armes nucléaires", *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 823, janvier-février 1997, p. 61.

²¹⁷ *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 260, par. 87.*

²¹⁸ *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 261, par. 90.*

contrario a los principios y reglas de derecho aplicables en los conflictos armados y en toda circunstancia.²¹⁹ También, la C. I. J. declaró que no puede perder de vista el derecho que posee todo Estado a su supervivencia, y, por consiguiente, su derecho de legítima defensa de acuerdo al Artículo 51 de la Carta de la O. N. U., cuando tal supervivencia está en juego; como que tampoco podía perder de vista la llamada "política de disuasión" a la cual adhirió una buena parte de la comunidad internacional. En conclusión, la C. I. J. manifestó que en vista del estado actual del derecho internacional tomado en su conjunto, tal como lo hubo examinado, y así como también a los elementos de hecho que se encontraron a su disposición, no poder concluir en forma definitiva acerca de la legalidad o ilegalidad del empleo de armas nucleares por un Estado en una circunstancia extrema de legítima defensa en la cual su supervivencia estaría en causa.²²⁰

La C. I. J., por unanimidad, respondió que ni el derecho internacional consuetudinario ni el convencional autorizan específicamente la amenaza o el empleo de armas nucleares; por once votos contra tres, que ni el derecho internacional consuetudinario ni el convencional comportan una prohibición completa y universal de la amenaza o empleo de armas nucleares como tales; por unanimidad, que son ilícitos la amenaza o empleo de armas nucleares que serían contrarios al Artículo 2, parágrafo 4, de la Carta de la O. N. U., y que no satisfacen a todas las prescripciones del Artículo 51 de la Carta; por unanimidad, que la amenaza o empleo de armas nucleares debería también ser compatible con las exigencias del derecho internacional aplicable en los conflictos armados, especialmente con los principios y reglas del D. I. H., como también con las obligaciones específicas en virtud de tratados y otros compromisos que se refieren a las armas nucleares; por siete votos contra siete, y el voto preponderante de su Presidente, que se deriva de las exigencias arriba mencionadas, que la amenaza o empleo de armas nucleares sería en general contrario a las reglas del derecho internacional aplicable en los conflictos armados, especialmente a los principios y reglas del D. I. H.. La C. I. J. agregó que en vista del estado actual del derecho internacional así como también de los elementos de hecho que ella posee, no puede concluir en forma definitiva que la amenaza o empleo de armas nucleares sería lícito o ilícito en una circunstancia extrema de legítima defensa en la cual la supervivencia de un Estado estuviera en causa;²²¹ por último y por unanimidad, que existe una obligación de negociar de buena fe y de arribar a término un desarme nuclear en todos sus aspectos, bajo un control internacional y eficaz.

De lo expuesto precedentemente, se aprecia que la C. I. J. constató que la novedad de las armas nucleares no excluye la aplicación del D. I. H., que la cláusula Martens confirma la aplicación de tal derecho a tales armas, y la prohibición del empleo de todo método o medio de guerra que no distingue entre civiles y objetivos militares, o que puedan causar sufrimientos inútiles a los combatientes.²²² Además, puede apreciarse que el pronunciamiento del carácter ilícito del empleo o amenaza de empleo de armas nucleares fue temperado por la observación que la C. I. J. realizara en cuanto a su imposibilidad de concluir en forma definitiva si tal recurso al arma nuclear acaeciera en circunstancias extremas de legítima defensa donde la supervivencia misma del Estado estuviera en juego. Esta conclusión fue fuertemente criticada por parte de la doctrina,²²³ considerada como una situación de *jura non novit curia*,²²⁴ en el sentido de que no concluyó que el empleo de armas nucleares sea

²¹⁹ *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996*, p. 261, par. 95.

²²⁰ *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996*, p. 261, par. 96 y 97.

²²¹ Esta afirmación de la Corte ha sido fuertemente criticada por la doctrina en razón de atentar al principio fundamental por el cual el DIH debe ser respetado de igual manera por las partes en conflicto: Condorelli, Luigi, "La CIJ sous les poids des armes nucléaires", p. 16-17; David, Eric, "L'Avis de la CIJ sur la licéité des armes nucléaires", p. 32-33. Greenwood, Christopher, "L'avis consultatif sur les armes nucléaires de la CIJ", p. 81, *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 823, janvier-février 1997.

²²² David, Eric, *Principes de Droit des Conflits Armés*, Bruxelles, Bruylant, p. 317.

²²³ David, Eric, *Principes de Droit des Conflits Armés*, Bruxelles, Bruylant, p. 318 y ss.

²²⁴ Condorelli, Luigi, "La CIJ sous le poids des armes nucléaires", *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 823, janvier-février 1997, p. 11.

contrario al derecho de los conflictos armados en toda circunstancia,²²⁵ y que constituye un *non liquet*.²²⁶

g. Asunto sobre la Aplicación de la Convención sobre Genocidio

El último caso al que cabe referirse en el aspecto que aquí interesa es la resolución dictada el 11 de julio de 1996,²²⁷ al pronunciarse en las excepciones preliminares en el *Asunto sobre la Aplicación de la Convención sobre Genocidio (Bosnia-Herzegovina c. Yugoslavia)*.²²⁸ En la oportunidad, la C. I. J. constató que las obligaciones a cargo de cada Estado Parte a la convención no se encuentran limitadas territorialmente por ésta, y, para ello, tomó en consideración el carácter *erga omnes* de tales obligaciones,²²⁹ sin necesidad de expedirse acerca de si Yugoslavia fue parte – directa o indirectamente – del conflicto en causa.²³⁰ Al respecto, se ha observado que la C. I. J. hizo justicia de la interpretación yugoslava en cuanto al tipo de responsabilidad instituida por la Convención, entendiéndose por responsabilidad indirecta aquella por la cual los Estados sólo responderían por el incumplimiento de la obligación de prevenir los actos de genocidio y de su represión.²³¹

En relación con el tipo de responsabilidad internacional del Estado previsto por el Artículo IX de la Convención sobre Genocidio, la C. I. J. observó que tratando éste acerca de la responsabilidad de un Estado por genocidio o por cualquiera de los actos enumerados en el Artículo III, la responsabilidad internacional del Estado por actos de genocidio perpetrados por aquél no estaría excluida del campo de aplicación de la convención.²³² Subrayó que tampoco la responsabilidad internacional del Estado por el hecho de sus órganos se encuentra excluida por la circunstancia de haberse previsto en el Artículo IV de la Convención que actos de genocidio pueden ser cometidos por gobernantes u otros funcionarios públicos.²³³ ¿De qué tipo de responsabilidad internacional trata entonces la Convención sobre Genocidio? Que la atribución de responsabilidad criminal a un Estado fue rechazada por sus redactores, parece indudable.²³⁴ Pero la doctrina también se pregunta cómo de un instrumento internacional donde la atribución de responsabilidad penal individual resulta clara, puede derivar también responsabilidad internacional atribuible a un Estado.²³⁵ James Crawford - Relator Especial sobre la Responsabilidad Internacional de los Estados – avanzó la idea de que la referencia de

²²⁵ Greenwood, Christopher, "L'avis consultatif sur les armes nucléaires de la CIJ", *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 823, janvier-février 1997, p. 79.

²²⁶ McCormack, Timothy L.H., "Un non liquet sur les armes nucléaires – La Cour internationale de Justice élude l'application des principes généraux du droit international humanitaire", *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 823, janvier-février 1997, p. 84, 90 *in fine*.

²²⁷ Sr. Bedajoui, *Presidente*; Sr. Schwebel, *Vicepresidente*; Sres. Oda, Guillaume, Shahabuddeen, Weeramantry, Ranjeva, Herczegh, Shi, Koroma, Vereschetin, Ferrari Bravo, Parra-Aranguren, *jueces*; Sres. Lauterpacht, Kreca, *jueces ad hoc*; Sr. Valencia-Ospina, *Secretario*.

²²⁸ *Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J., Recueil 1996*, p. 595.

²²⁹ *Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J., Recueil 1996*, p. 616, par. 31.

²³⁰ *Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J., Recueil 1996*, p. 615, par. 31; en sentido contrario, *Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, exceptions préliminaires, Dissenting Opinion of Judge Kreca, C.I.J., Recueil 1996*, pp. 766-767.

²³¹ Wyler, Eric, "Les rapports entre exceptions préliminaires et fond du litige à la lumière de l'arrêt de la CIJ du 11 juillet 1996 dans l'affaire du génocide", *Revue Générale de Droit International Public*, Tome 105, 2001, p. 43.

²³² Ver, en sentido contrario, *Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, exceptions préliminaires, Joint Declaration of Judges Shi and Vereschetin, C.I.J., Recueil 1996*, p. 631.

²³³ *Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J., Recueil 1996*, p. 616, par. 32.

²³⁴ "First Report on State Responsibility by Mr. James Crawford, Special Rapporteur", UN Doc. A/CN.4/490/Add. 2, par. 61.

²³⁵ Schabas, William, *Genocide in International Law*, Cambridge University Press, 2000, p. 434.

la C. I. J. a cualquier forma de responsabilidad no debe ser interpretada como refiriéndose a la responsabilidad penal del Estado, sino más bien como la atribución directa del crimen de genocidio a un Estado como tal.²³⁶ Así, podría concluirse que tácitamente el Relator Especial sostiene que la C. I. J. aludió a la clásica responsabilidad internacional del Estado. Los jueces Shi y Vereshchetin, en declaración concurrente, sostuvieron que la Convención sobre Genocidio, en sustancia, es un instrumento jurídico que refiere a la responsabilidad penal del individuo;²³⁷ el juez Oda, también en opinión disidente, sostuvo que la Convención sobre Genocidio fue concebida como un nuevo tipo de tratado que se ocupa del derecho de los individuos en su conjunto y no de los derechos y obligaciones de los Estados;²³⁸ por último, el juez *ad hoc* Kreca concluyó, por distintas razones, que la convención no prevé la atribución de responsabilidad civil de un Estado.²³⁹ Como lo señala Schabas, la cuestión de saber si a un Estado puede atribuírsele algún tipo de responsabilidad civil en razón de actos de genocidio aún no está resuelta.²⁴⁰

El *Asunto sobre la Aplicación de la Convención sobre Genocidio (Bosnia-Herzegovina c. Yugoslavia)* en trámite por ante la C. I. J. se vincula estrechamente con uno de los procedimientos penales incoados por el T. P. I. Y. contra Slobodan Milosevic. En efecto, la Fiscalía del T. P. I. Y. formuló una acusación contra Slobodan Milosevic por genocidio, crímenes contra la humanidad, violaciones graves a los Convenios de Ginebra de 1949 y violaciones a las leyes y costumbres de la guerra cometidos en el territorio de Bosnia – Herzegovina durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 1991 y 31 de diciembre de 1995, en su carácter de Presidente de la República de Serbia.²⁴¹ En este contexto, es probable que el pronunciamiento de una sentencia en el fondo de cualquiera de estos dos asuntos incida en el otro, lo que podría suceder en lo atinente a la cuestión del “control efectivo” o “control general” que Slobodan Milosevic tuviera sobre las fuerzas armadas regulares e irregulares desplegadas en el territorio de Bosnia-Herzegovina durante el conflicto armado que opuso a las partes intervinientes en el caso en examen.²⁴² De esta manera, se destaca el carácter potencialmente conflictivo de esta situación en razón de que, como se analizará más adelante, la C. I. J. y el T. P. I. Y. aplican criterios jurídicos distintos en lo relativo a la responsabilidad internacional de un Estado por actos ilícitos cometidos por individuos u órganos de facto.

En definitiva, en un período de casi cincuenta años, la C. I. J. ha verificado un buen número de normas consuetudinarias de DIH y relativas al crimen internacional de genocidio, a saber: las “consideraciones elementales de humanidad” – aplicables incluso en tiempos de paz (*Asunto del Canal de Corfú*); la obligación internacional de prevenir y sancionar el genocidio (*Opinión Consultiva sobre las Reservas a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio*); el carácter *erga omnes* de la prohibición de cometer actos de genocidio (*Asunto de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Ltd.*); los principios generales fundamentales del D. I. H. – que incluyen las consideraciones elementales de humanidad y la obligación para los Estados de respetar y hacer respetar los Convenios de Ginebra -, la identidad de las normas mínimas aplicables en favor de las víctimas irrespectivamente del carácter internacional o no del conflicto armado, (*Asunto de las Actividades Militares y*

²³⁶ ‘First Report on State Responsibility by Mr. James Crawford, Special Rapporteur’, UN Doc. A/CN.4/490/Add. 2, par. 63.

²³⁷ *Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J., Recueil 1996, Joint Declaration of Judge Shi and Judge Vereshchetin.*

²³⁸ *Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J., Recueil 1996, Declaration of Judge Oda*, par. 9.

²³⁹ *Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J., Recueil 1996, Dissenting Reasons of Judge ad hoc Kreca.*

²⁴⁰ Schabas, William, *Genocide in International Law*, Cambridge University Press, 2000, p. 440.

²⁴¹ *Prosecutor v. Slobodan Milosevic – Bosnia and Herzegovina -*, Indictment, 22 November 2001, Case N°: IT-01-51.

²⁴² Véase *Prosecutor v. Slobodan Milosevic – Bosnia and Herzegovina -*, Indictment, 22 November 2001, Case N°: IT-01-51, par. 25 (a).

Paramilitares en y contra Nicaragua); y, por último, que el principio de la protección de la población civil y de los bienes de carácter civil que establece la distinción entre combatientes y no combatientes, al igual que la prohibición de causar sufrimientos innecesarios a estos últimos, son principios cardinales del D. I. H. (*Opinión Consultiva acerca de la Legalidad de la Amenaza o Empleo de Armas Nucleares*).

II. El valor de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia en los Tribunales *ad hoc* de la Organización de las Naciones Unidas como verificadora del Derecho Internacional Humanitario y del crimen internacional de genocidio

a. Concordancias interpretativas

i. Consideraciones elementales de humanidad

Según se ha analizado, la primera oportunidad en que la C. I. J. constató normas consuetudinarias de D. I. H. fue en ocasión del pronunciamiento de la sentencia (fondo) del 9 de abril de 1949 concerniente al *Asunto del Canal de Corfú*.²⁴³ Allí, la C. I. J. verificó que las "consideraciones elementales de humanidad" constituyen un principio "general y bien reconocido" aplicable tanto en tiempos de paz como de guerra.²⁴⁴ Previsiblemente, un principio tan elemental para la tutela de los derechos fundamentales de las personas, tales como la vida e integridad física de los seres humanos, fue también verificado y aplicado por el T. P. I. Y. en distintas oportunidades.

En la primera de ellas, un Tribunal de Primera Instancia reconoció el carácter consuetudinario del Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 refiriéndose expresamente a la verificación efectuada por la C. I. J. en la sentencia pronunciada en el *Asunto de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua*, la que, como también se ha visto, reiteró lo por ella establecido en el *Asunto sobre el Canal de Corfú*. El Tribunal de Primera Instancia, declaró:

"La CIJ sostuvo, en el Asunto Nicaragua, que el Artículo 3 común, aunque convencional en origen, ha cristalizado en derecho consuetudinario y establece las reglas mínimas obligatorias aplicables en conflictos armados de cualquier tipo, dado que constituyen 'consideraciones elementales de humanidad'." ²⁴⁵

La decisión en comentario es un claro ejemplo del modo en que una norma de derecho internacional consuetudinario es verificada por el órgano judicial principal de la O. N. U., la C. I. J., y, en razón de la autoridad y respeto que emanan de sus decisiones judiciales, la verificación operada de una norma de derecho internacional general es finalmente recogida por otro tribunal internacional, el T. P. I. Y., que a más de aplicar normas convencionales, funda sus decisiones en normas jurídicas que sin duda alguna forman parte del derecho internacional consuetudinario. La declaración del carácter consuetudinario del principio

²⁴³ *Affaire du Détroit de Corfou (fond), Arrêt du 9 avril 1949: C.I.J. Recueil, 1949, p. 4.*

²⁴⁴ "Les obligations qui incombent aux autorités albanaises consistent à faire connaître, dans l'intérêt de la navigation en général, l'existence d'un champ de mines dans les eaux territoriales albanaises et à avertir les navires de guerre britanniques, au moment où ils s'approchaient, du danger imminent auquel les exposaient ce champ de mines. Ces obligations sont fondées non pas sur la Convention VIII de La Haye, de 1907, qui est applicable en temps de guerre, mais sur certains principes généraux et bien reconnus, tels que des considérations élémentaires d'humanité, plus absolues encore en temps de paix qu'en temps de guerre, le principe de la liberté des communications maritimes et l'obligation, pour tout État, de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d'actes contraires aux droits d'autres États." *Affaire du Détroit de Corfou (fond), Arrêt du 9 avril 1949: C.I.J. Recueil, 1949, p. 22.*

²⁴⁵ Traducción del autor. Versión original: "The International Court of Justice held, in the Nicaragua case, that common Article 3, though conventional in origin, has crystallized into customary international law and sets out the mandatory minimum rules applicable in armed conflicts of any kind, constituting as they are 'elementary considerations of humanity'." *The Prosecutor v. Zlatko Alekskovski, Judgment, 25 June 1999, T. Ch. (Rodriguez, Vohrah, Nieto), Case No. IT-95-14-1-T, par. 50.*

"general y bien reconocido" que son las "consideraciones elementales de humanidad", verificado oportunamente por la C. I. J. y retomado por el Tribunal de Primera Instancia del T. P. I. Y., resultó ser la primera de la serie en relación con el principio en cuestión. En decisiones posteriores, un distinto Tribunal de Primera Instancia e incluso la Cámara de Apelaciones reconocieron el carácter de principio general de derecho internacional de las 'consideraciones elementales de humanidad'. Así, el tribunal sostuvo:

"Sin embargo, esta es un área donde las 'consideraciones elementales de humanidad' acertadamente puestas de manifiesto por la CIJ en los Asuntos del Canal de Corfú, Nicaragua y sobre la Legalidad de la Amenaza o Empleo de Armas Nucleares, deberían ser íntegramente utilizadas al interpretar y aplicar normas internacionales perdidas, en razón de que ilustran un principio general de derecho internacional."²⁴⁶

Puede observarse que el tribunal interviniente, por una parte, atribuye valor de jurisprudencia tanto a las sentencias pronunciadas por la C. I. J. – *Canal de Corfú, Nicaragua* – como a sus opiniones consultivas – *Legalidad del Empleo o Amenaza de Armas Nucleares* –; por el otro, reconoce el carácter consuetudinario de las "consideraciones elementales de humanidad" y, asimismo, su carácter de principio general de derecho internacional.

La Cámara de Apelaciones del T. P. I. Y., como se ha hecho referencia, también se expidió sobre el particular. En efecto, observó que las "consideraciones elementales de humanidad" se identifican con las reglas mínimas establecidas por el Artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949, que forman parte, a su vez, del derecho internacional consuetudinario.²⁴⁷ Acto seguido, siempre siguiendo el razonamiento empleado por la C. I. J. en el *Asunto Nicaragua*, reafirmó, como lo verificara esta última, que las "consideraciones elementales de humanidad" constituyen un principio fundamental del D. I. H.:

"Es indudable que el Artículo 3 común, que establece un estándar mínimo de reglas imperativas, refleja los principios humanitarios fundamentales que subyacen en el DIH como un todo, y sobre los cuales los Convenios de Ginebra se basan enteramente. Estos principios, cuyos propósitos son el respeto de la dignidad de la persona humana, desarrollados como resultado de siglos de luchas armadas y que se habían ya transformado en derecho consuetudinario al momento de adoptarse los Convenios de Ginebra, reflejan los principios humanitarios universalmente reconocidos."²⁴⁸

²⁴⁶ Traducción del autor. Versión original: "Nevertheless this is an area where the "elementary considerations of humanity" rightly emphasized by the International Court of Justice in the Corfu Channel, Nicaragua and Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons cases should be fully used when interpreting and applying loose international rules, on the basis that they are illustrative of a general principle of international law." *Prosecutor v. Zoran Kupreskic et al., Judgment, 14 January 2000, T. Ch. (Cassese, May, Mumba), Case No. IT-95-16-T*, par. 524. Véase también *Prosecutor v. Zejnil Delalic et al., Judgment, 21 February 2001, App. Ch. (Hunt, Riad, Nieto-Navia, Bennouna, Pocar), Case No. IT-96-21-A*, par. 140. En relación con el primero de los casos citados, Zoran Kupreskic, Mirjan Kupreskic, Vlatko Kupreskic, Vladimir Santic, Dragan Papic, Drago Josipovic, Stipo Alilovic y Marinko Katava fueron acusados de violaciones a las leyes y costumbres de la guerra por la alegada participación de las personas mencionadas en los dos conflictos que tuvieron lugar en Ahmici en el valle del Río Lašva en Bosnia - Herzegovina el 20 de octubre de 1992 y el 16 de abril de 1993. Durante estos conflictos, un gran número de ciudadanos musulmanes de aquel pueblo fue asesinado y expulsados de sus hogares como parte de la campaña de 'limpieza étnica' llevada a cabo por las fuerzas armadas croatas.

²⁴⁷ *Prosecutor v. Zejnil Delalic et al., Judgment, 21 February 2001, App. Ch. (Hunt, Riad, Nieto-Navia, Bennouna, Pocar), Case No. IT-96-21-A*, par. 140.

²⁴⁸ Traducción del autor. Versión original: "It is indisputable that common Article 3, which sets forth a minimum core of mandatory rules, reflects the fundamental humanitarian principles which underlie international humanitarian law as a whole, and upon which the Geneva Conventions in their entirety are based. These principles, the object of which is the respect for the dignity of the human person, developed as a result of centuries of warfare and had already become customary law at the time of the adoption of the Geneva Conventions because they reflect the most universally recognised humanitarian principles. These principles were codified in common Article 3 to constitute the minimum core applicable to internal conflicts, but are so fundamental that they are regarded as governing both internal and international conflicts. In the words of the ICRC, the purpose of common Article 3 was to "ensur(e)

ii. Principios fundamentales de Derecho Internacional Humanitario

Ahora bien, tal como se ha visto en la parte general de este trabajo, la C. I. J. identificó una serie de principios "fundamentales" o "cardinales" del D. I. H. y verificó su carácter consuetudinario. En razón de la importancia que revistió, y reviste, este procedimiento de verificación de los principios "fundamentales" o "cardinales" del D. I. H. como normas internacionales consuetudinarias, la jurisprudencia de la C. I. J. sobre el particular fue de utilidad para los Tribunales de Primera Instancia y la Cámara de Apelaciones del T. P. I. Y..

En este orden de ideas, se ha explicado en la parte general de esta tesis que la C. I. J. declaró en el *Asunto Nicaragua* que juzgaría ciertos hechos cometidos por el Estado demandado, los Estados Unidos, de acuerdo a los principios "generales y fundamentales" del D. I. H., de los cuales los Convenios de Ginebra son, en algunos aspectos, su expresión.²⁴⁹ Se ha comentado también la importancia del pasaje de la sentencia pronunciada por la C. I. J. en el *Asunto Nicaragua*, por cuanto determinó que las normas mínimas de protección que benefician a las víctimas de un conflicto armado de carácter no internacional prevista en el Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 resultan también aplicables en un conflicto armado de carácter internacional. Este principio, fue recogido por vez primera por un Tribunal de Primera Instancia del T. P. I. Y., del siguiente modo:

"Que el Artículo 3 común es parte del derecho internacional consuetudinario fue definitivamente decidido por la CIJ en el Asunto Nicaragua en el cual la Corte, aplicando derecho internacional consuetudinario, verificó que las normas contenidas en el Artículo 3 constituyen un 'estándar mínimo' aplicables en conflictos armados internacionales y no internacionales, por consiguiente, que estas prohibiciones forman parte del derecho internacional."²⁵⁰

respect for the few essential rules of humanity which all civilised nations consider as valid everywhere and under all circumstances and as being above and outside war itself". These rules may thus be considered as the "quintessence" of the humanitarian rules found in the Geneva Conventions as a whole." *Prosecutor v. Zejnil Delalic et al., Judgment, 21 February 2001, App. Ch. (Hunt, Riad, Nieto-Navia, Bennouna, Pocar), Case No. IT-96-21-A, par. 143.*

248. Traducción del autor. Versión original: "The Court observes however sees no need to take a position on that matter, since in its view the conduct of the United States may be judged according to the fundamental general principles of humanitarian law; in its view, the Geneva Conventions are in some respects a development, and in other respects no more than the expression, of such principles. It is significant in this respect that, according to the terms of the Conventions, the denunciation on one of them 'shall in no way impair the obligations which the Parties to the conflict shall remain bound to fulfill by virtue of the principles of the law of nations, as they result from the usages established among civilized peoples, from the laws of humanity and the dictates of the public conscience' (Convention I, Art. 63; Convention II, Art. 62; Convention III, Art. 142; Convention IV, Art. 158) Article 3 which is common to all four Geneva Conventions of 12 August 1949 defines certain rules to be applied in the armed conflicts of a non-international character. There is no doubt that, in the event of international armed conflicts, these rules also constitute a minimum yardstick, in addition to the more elaborate rules which are also to apply to international conflicts: and they are rules which, in the Court's opinion, reflect what the Court in 1949 called 'elementary considerations of humanity' (Corfu Channel, Merits, I.C.J. Reports 1949, p. 22; paragraph 215 above). The Court may therefore find them applicable to the present dispute, and is thus not required to decide what role the United States multilateral treaty reservation might otherwise play in regard to the treaties in question." *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, pp. 113-114, par. 218.*

²⁵⁰ Traducción del autor. Versión original: "The fact that common Article 3 is part of customary international law was definitively decided by the International Court of Justice in the Nicaragua case (*Military and Paramilitary Activities (Nicar. v. U.S.)*), 1986 I.C.J. 4 (Merits Judgement of 27 June 1986) in which the Court, applying customary international law, determined that the rules contained in common Article 3 constitute a "minimum yardstick" applicable in both international and non-international armed conflicts, thus finding that these prohibitions are part of customary international law." *Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Defence Motion on Jurisdiction*, 10 August 1995, T. Ch. (Mc Donald, Stephen, Vohrah), Case No. IT-94-1-T, par. 67.

Como corolario, este reconocimiento efectuado por el Tribunal de Primera Instancia fue reafirmado por la Cámara de Apelaciones del T. P. I. Y. y aplicado muy frecuentemente en el tribunal.²⁵¹ La Cámara de Apelaciones, sostuvo que la emergencia de normas que regulan los conflictos armados de carácter internacional se manifestó convencional y consuetudinariamente; que este carácter dual no es inconsistente ni contradictorio entre sí, sino más bien complementario; y, finalmente, que el Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra es un claro ejemplo de lo expuesto. Para ello, se apoyó en la verificación operada por la C. I. J. en el *Asunto Nicaragua*.²⁵²

iii. Obligación de respetar y hacer respetar los Convenios de Ginebra de 1949

Tal como se ha visto y considerado en la parte general de este trabajo, la C. I. J. verificó que la obligación internacional de respetar y hacer respetar los Convenios de Ginebra de 1949 en toda circunstancia, establecida en el Artículo 1 común de estos convenios, es una obligación de carácter dual, es decir, convencional y consuetudinaria, y que se erige en un principio general del D. I. H..²⁵³ Como fuera puesto de resalto, esta obligación internacional es aplicable incluso para los conflictos armados de carácter no internacional. Este proceso de verificación de normas consuetudinarias realizado por la C. I. J. fue tenido en cuenta por la Cámara de Apelaciones del T. P. I. Y. y un Tribunal de Primera Instancia.²⁵⁴

iv. Principio de distinción

Como se ha visto en la parte general, la C. I. J. verificó en la *Opinión Consultiva acerca de la Legalidad del Empleo o Amenaza de Armas Nucleares* que la protección de la población civil y de los bienes de carácter civil, que establece la distinción entre combatientes y no combatientes, es uno de los principios cardinales del D. I. H. de carácter consuetudinario. Por tanto, los Estados no deben tener como objetivo de un ataque a la población civil, consecuentemente, no deben emplear armas incapaces de distinguir entre población civil y objetivos militares. Como fuera formulado por la C. I. J., este principio resulta aplicable en todo conflicto armado independientemente de su carácter. Un Tribunal de Primera Instancia del T. P. I. Y., recurrió a la decisión en comentario a los fines de determinar la existencia de tal norma internacional de carácter consuetudinario. En efecto, declaró que la protección de la

²⁵¹ *Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction*, 2 October 1995, App. Ch. (Cassese, Li, Deschênes, Abi-Saab, Sidwa), Case No: IT-94-1-AR72, pars. 98 y 102; *Prosecutor v. Anto Furundzija, Judgment*, 10 December 1998, T. Ch. (Mumba, Cassese, May), Case IT-95-17/1-T, par. 138; *The Prosecutor v. Zlatko Aleksovski, Judgment*, 25 June de 1999, T. Ch. (Rodrigues, Vohrah, Nieto-Navia), Case No: IT-95-14-1-T, par. 50; *The Prosecutor v. Zoran Kupreskic et al., Judgment*, 14 January 2000, T. Ch. (Cassese, May, Mumba), Case No. IT-95-16-T, par. 534; *Prosecutor v. Zejnil Delalic et al (Celebici Case), Judgment*, 20 February 2001, App. Ch. (Hunt, Riad, Nieto-Navia, Bennouna, Pocar), Case No IT-96-21-A, pars. 140-142-144.

²⁵² *Prosecutor v. Dusko Tadic, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction*, 2 October 1995, App. Ch. (Cassese, Li, Deschênes, Abi-Saab, Sidwa), Case No: IT-94-1-AR72, pars. 98 y 102; *Prosecutor v. Zejnil Delalic et al (Celebici Case), Judgment*, 20 February 2001, App. Ch. (Hunt, Riad, Nieto-Navia, Bennouna, Pocar), Case No IT-96-21-A, pars. 140-142-144.

²⁵³ Traducción del autor. Versión original: "The Courts considers that there is an obligation on the United States Government, in the terms of Article 1 of the Geneva Conventions, to 'respect' the Conventions and even 'to ensure respect' for them 'in all circumstances', since such an obligation does not derive only from the Convention themselves, but from the general principles of humanitarian law to which the Conventions merely give specific expression. The United States in thus under an obligation not to encourage persons or groups engaged in the conflict in Nicaragua to act in violation of the provisions of Article 3 common to the four 1949 Geneva Conventions." *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986*, p. 114, par. 220.

²⁵⁴ *Prosecutor v. Zejnil Delalic et al (Celebici Case), Judgment*, 20 February 2001, App. Ch. (Hunt, Riad, Nieto-Navia, Bennouna, Pocar), Case No IT-96-21-A, par. 164; *The Prosecutor v. Zoran Kupreskic et al., Judgment*, 14 January 2000, T. Ch. (Cassese, May, Mumba), Case No. IT-95-16-T, par. 534.

población civil durante los conflictos armados, internacionales o no, es la piedra angular del D. I. H. moderno; que resulta ser un principio universalmente reconocido; y que tal como fuera establecido por la C. I. J. en la circunstancia apuntada, existe una prohibición absoluta de atacar la población o los bienes de carácter civil.²⁵⁵ Una vez más, el procedimiento de verificación de una norma consuetudinaria realizado por la C. I. J. fue identificado y sirvió como medio de determinar la existencia de una norma internacional general a un Tribunal de Primera Instancia del T. P. I. Y..

v. Cláusula Martens

En la *Opinión Consultiva acerca de la Legalidad del Empleo o Amenaza de Armas Nucleares*, la C. I. J. verificó el carácter consuetudinario de la cláusula Martens. Un Tribunal de Primera Instancia del T. P. I. Y., por su parte, reconoció el proceso de verificación empleado por la C. I. J. e interpretó que los principios de humanidad y los dictados de la conciencia pública no son fuentes independientes de derecho internacional, pero que brindan, sin embargo, una referencia a tales preceptos cuando las normas de D. I. H. aplicables en un caso concreto no resulta suficientemente precisa.²⁵⁶

b. Criterios dispares

Responsabilidad internacional del Estado por actos ilícitos cometidos por órganos de facto

Por último, es necesario recordar que la C. I. J. afirmó que para atribuir responsabilidad internacional a los Estados Unidos de América por las violaciones al D. I. H. cometidas por la fuerza *contra*, que combatían al gobierno nicaraguense, debería ser probado en principio que el primero de los Estados tenía control efectivo de las operaciones militares o paramilitares en el curso de las cuales las alegadas violaciones se habrían producido. La aplicación del criterio del "control efectivo" por parte de la C. I. J. a los fines de determinar la responsabilidad internacional de un Estado por actos ilícitos cometidos por órganos *de facto*, tuvo un seguimiento dispar en la jurisprudencia del T. P. I. Y.. En efecto, en la primera ocasión brindada a este último, un Tribunal de Primera Instancia pasó a determinar si las personas bosnio-croatas podían ser tenidos por agentes de Croacia respecto de actos reputados como violaciones graves a los Convenios de Ginebra de 1949 y señaló que una "relación de agencia" es suficiente a los fines de establecer si el conflicto armado entre los bosnio-croatas y el gobierno de Bosnia-Herzegovina era de carácter internacional.²⁵⁷ El Tribunal interviniente,

²⁵⁵ *Prosecutor v. Zoran Kupreskic et al., Judgment, 14 January 2000, T. Ch. (Cassese, May, Mumba), Case No: IT-95-16-T, par. 521.*

²⁵⁶ Traducción del autor. Versión original: " More specifically, recourse might be had to the celebrated Martens Clause which, in the authoritative view of the International Court of Justice, has by now become part of customary international law. True, this Clause may not be taken to mean that the " principles of humanity" and the " dictates of public conscience " have been elevated to the rank of independent sources of international law, for this conclusion is belied by international practice. However, this Clause enjoins, as a minimum, reference to those principles and dictates any time a rule of international humanitarian law is not sufficiently rigorous or precise: in those instances the scope and purport of the rule must be defined with reference to those principles and dictates. In the case under discussion, this would entail that the prescriptions of Articles 57 and 58 (and of the corresponding customary rules) must be interpreted so as to construe as narrowly as possible the discretionary power to attack belligerents and, by the same token, so as to expand the protection accorded to civilians." *Prosecutor v. Zoran Kupreskic et al., Judgment, 14 January 2000, T. Ch. (Cassese, May, Mumba), Case No: IT-95-16-T, par. 525.*

²⁵⁷ *Prosecutor v. Ivica Rajic, Review of the Indictment pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence, 13 September 1996, T. Ch. (McDonald, Sidhwa, Vohrah), Case No: IT-95-12-R61, par. 23.* En la oportunidad, el día 6 de marzo de 1996, el juez Sidhwa invitó la Fiscalía a informar acerca de sus esfuerzos para notificar el acta de acusación. Luego de una audiencia, el juez resultó satisfecho de los esfuerzos realizados por la Fiscalía. En este contexto, el mismo día, el juez ordenó que el acta de acusación contra Ivica Rajic sea sometido al Tribunal interviniente en pleno para considerarlo de acuerdo a la Regla 61 del Reglamento de Procedimiento y Prueba.

argumentó que la C. I. J. aplicó tal criterio en un diferente contexto ya que se trataba de un pronunciamiento final acerca de la responsabilidad internacional de un Estado por actos cometidos por un grupo de personas; y en el caso sometido a su consideración, se trataba de un procedimiento que podía ser revisado durante el juicio. Adujo también que la C. I. J. en aquella oportunidad debía determinar la responsabilidad internacional de un Estado en razón de violaciones al D. I. H.; y que éste no era su caso. Este Tribunal señaló, por último, que debía decidir acerca de si los bosnio-croatas podrían ser tenidos por agentes de Croacia a los fines del establecimiento de la competencia *ratione-materiae* sobre las violaciones graves a los Convenios de Ginebra de 1949.²⁵⁸ En otras palabras, este tribunal tenía como propósito establecer si el conflicto entre los bosnio-croatas y el gobierno de Bosnia-Herzegovina era de carácter internacional a los fines de determinar si el Convenio IV de Ginebra de 1949 era aplicable en el caso concreto.

El mismo Tribunal de Primera Instancia, compuesto de un modo parcialmente distinto, adoptó en otro caso una posición diferente a la anterior. En la ocasión, se trató también de determinar si el conflicto armado era de carácter internacional y si las víctimas se encontraban en poder de una parte al conflicto de la cual no eran nacionales, a los fines de concluir si el Convenio IV de Ginebra de 1949 era aplicable en el caso. Es decir, debía en primer lugar calificar el carácter internacional o interno del conflicto armado. Si bien el tribunal consideró que la C. I. J. utilizó un criterio sumamente exigente - el llamado estándar del "control efectivo" - a los fines de determinar el requerido grado de control,²⁵⁹ no encontró razón alguna para apartarse del mismo.²⁶⁰ Como puede apreciarse, el Tribunal de Primera Instancia basó su convicción, implícitamente, en la autoridad que emana de una decisión judicial adoptada por la C. I. J. en relación con la verificación de una regla de derecho internacional general, a pesar -como fuera explicado en la parte general de este trabajo - de la inexistencia de la obligatoriedad del precedente judicial en el derecho internacional.

Ahora bien, una consecuencia que puede derivarse de la inexistencia de la obligatoriedad del precedente judicial en el derecho internacional sería que dos tribunales internacionales, en relación con las mismas cuestiones, adopten decisiones contradictorias. Esta hipótesis se hizo realidad, ya que la suerte corrida por el estándar del "control efectivo" resultó adversa una vez que el caso de marras fuera decidido por la Cámara de Apelaciones del T. P. I. Y. En efecto, ésta se abocó al tratamiento de la cuestión de determinar cuáles son los criterios legales aplicables para saber si las fuerzas armadas que combaten en un conflicto *prima facie* de carácter interno podrían ser consideradas como actuando por cuenta de una potencia extranjera.²⁶¹ Esta cuestión, revestía gran importancia a los fines de determinar el carácter del conflicto armado que tenía lugar en Bosnia-Herzegovina, y por ende, las normas de D. I. H. aplicables en tal situación. En el caso sometido a su consideración, la Cámara de Apelaciones se abocó entonces al tratamiento de la cuestión de determinar si las fuerzas armadas bosnio-serbias - en cuyas manos se encontraban las víctimas de nacionalidad bosnia - podían ser

²⁵⁸ *Prosecutor v. Ivica Rajic, Review of the Indictment pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence, 13 September 1996, T. Ch. (McDonald, Sidhwa, Vohrah), Case No: IT-95-12-R61, par. 25.*

²⁵⁹ *Prosecutor v. Dusko Tadic, Opinion and Judgment, 7 May 1997, T. Ch. (Mc Donald, Stephen, Vohrah), Case No: IT-94-1-T, par. 585.* Este caso se desarrolló como consecuencia de la acusación y proceso seguido contra Dusko Tadic, ciudadano de la ex Yugoslavia, de etnia serbia, y residente en la República de Bosnia-Herzegovina al tiempo en el que se cometieron los crímenes que se le enrostran. Fue la primera sentencia concerniente a serias violaciones al DIH pronunciada por un tribunal verdaderamente internacional, establecido por las Naciones Unidas.

²⁶⁰ *Prosecutor v. Dusko Tadic, Opinion and Judgment, 7 May 1997, T. Ch. (Mc Donald, Stephen, Vohrah), Case No: IT-94-1-T, par. 588.* Ver asimismo *Separate and Dissenting Opinion of Judge McDonald Regarding the Applicability of Article 2 of the Statute*, para quien, en el *Asunto Nicaragua*, la CIJ aplicó el test de "agencia y control" y no de "control efectivo".

²⁶¹ *Prosecutor v. Dusko Tadic, Judgment, 15 July 1999, App. Ch. (Shahabuddeen, Cassese, Tieya, Nieto-Navia, Mumba), Case No: IT-94-1-A, par. 81.*

consideradas órganos *de iure* o *de facto* de una potencia extranjera, en la ocasión, la República Federal de Yugoslavia.²⁶²

La Cámara de Apelaciones sostuvo preliminarmente que la solución planteada podría elucidarse dentro del conjunto de normas y principios que componen el D. I. H. y que el estándar jurídico aplicado por éste podría ser distinto al criterio requerido por el derecho internacional en cuanto a cuestiones atinentes a la responsabilidad internacional de los Estados.²⁶³ Desde el primer punto de vista, es decir, desde el D. I. H., aquélla determinó que el Convenio de Ginebra III de 1949 – relativa al tratamiento de los prisioneros de guerra – en su Artículo 4,²⁶⁴ el requerimiento de "pertenecer a una Parte al conflicto" refiere implícitamente a un criterio de "control".²⁶⁵ Acerca del interrogante de saber cuál debe ser el grado de control o autoridad que una potencia extranjera debe ejercer sobre fuerzas armadas que combaten por su cuenta en orden de transformar un conflicto armado inicialmente de carácter interno en uno internacional, sostuvo que las consecuencias jurídicas de la caracterización de un conflicto como de uno u otro carácter es extremadamente importante ya que si lo es como de carácter internacional, un Estado extranjero puede en ciertas circunstancias resultar responsable de las violaciones al D. I. H. perpetradas por los grupos armados que actúan por su cuenta.²⁶⁶

La Cámara tuvo presente que el D. I. H. no posee un criterio único para establecer cuándo un grupo de individuos puede ser considerado bajo el control de un Estado, es decir, para determinar si actúan en calidad de órganos *de facto* de éste. En este contexto, pasó a examinar las reglas relativas a la responsabilidad internacional de los Estados que establecen los criterios para atribuir responsabilidad internacional a un Estado por los hechos cometidos por individuos que no son formalmente órganos del mismo. También tomó nota de que la C. I. J. en el *Asunto de las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua* sugirió un alto grado de control a los efectos de atribuir tal responsabilidad.²⁶⁷ A los fines de resolver la cuestión planteada, la Cámara de Apelaciones consideró dos cuestiones preliminares: la primera, acerca de cuáles son las condiciones que el derecho internacional establece para que un individuo pueda ser considerado como actuando en tanto que órgano *de facto* de un Estado; la segunda, acerca de la interpretación de la sentencia pronunciada por la C. I. J.²⁶⁸

En relación con la primera cuestión preliminar, la Cámara de Apelaciones del T. P. I. Y. estimó que la C. I. J. utilizó el estándar de "agencia" a los fines de determinar cuándo un individuo o grupo de individuos reviste la calidad de órgano u oficiales del Estado, y el de "control efectivo" a los fines de determinar si los actos de los *contras* eran atribuibles a los Estados Unidos.²⁶⁹ Concluyó que en su opinión, la C. I. J. utilizó dos estándares distintos a los fines de determinar la responsabilidad internacional: uno, para atribuir la responsabilidad derivada de los actos ilícitos cometidos por oficiales del Estado y otro, para atribuir la responsabilidad derivada de los actos ilícitos cometidos por individuos que actúan en tanto

²⁶² *Prosecutor v. Dusko Tadic, Judgment, 15 July 1999, App. Ch. (Shahabuddeen, Cassese, Tieya, Nieto-Navia, Mumba), Case No: IT-94-1-A, par. 87.*

²⁶³ *Prosecutor v. Dusko Tadic, Judgment, 15 July 1999, App. Ch. (Shahabuddeen, Cassese, Tieya, Nieto-Navia, Mumba), Case No: IT-94-1-A, par. 90.*

²⁶⁴ *Convención de Ginebra III de 1949, Artículo 4.A: son prisioneros de guerra, en el sentido de la presente Convención, las personas que, perteneciendo a una de las categorías siguientes, se encuentran en poder del enemigo: 1) los miembros de las fuerzas armadas de una Parte al conflicto...*

²⁶⁵ *Prosecutor v. Dusko Tadic, Judgment, 15 July 1999, App. Ch. (Shahabuddeen, Cassese, Tieya, Nieto-Navia, Mumba), Case No: IT-94-1-A, par. 95.*

²⁶⁶ *Prosecutor v. Dusko Tadic, Judgment, 15 July 1999, App. Ch. (Shahabuddeen, Cassese, Tieya, Nieto-Navia, Mumba), Case No: IT-94-1-A, par. 97.*

²⁶⁷ *Prosecutor v. Dusko Tadic, Judgment, 15 July 1999, App. Ch. (Shahabuddeen, Cassese, Tieya, Nieto-Navia, Mumba), Case No: IT-94-1-A, par. 99.*

²⁶⁸ Ver parágrafos 104-109, *Prosecutor v. Dusko Tadic, Judgment, 15 July 1999, App. Ch. (Shahabuddeen, Cassese, Tieya, Nieto-Navia, Mumba), Case No: IT-94-1-A.*

²⁶⁹ *Prosecutor v. Dusko Tadic, Judgment, 15 July 1999, App. Ch. (Shahabuddeen, Cassese, Tieya, Nieto-Navia, Mumba), Case No: IT-94-1-A, par. 112-113.*

que órganos *de facto* de un Estado.²⁷⁰ En este último caso utilizó el estándar del "control efectivo".

La Cámara consideró que el estándar del "control efectivo" no resultaba persuasivo por dos razones: una, no se condice con la lógica del derecho aplicable a la responsabilidad internacional de los Estados, y la otra, que difiere de la práctica judicial y estatal.²⁷¹

En relación con el primer aspecto, la Cámara sostuvo que en el caso de un grupo organizado de individuos es distinta de aquel de un individuo privado que realiza un acto por cuenta de un Estado. Agregó que si el grupo se encuentra bajo el control general de un Estado compromete la responsabilidad internacional de este último por sus actividades, hayan sido o no éstas específicamente impuestas, requeridas o dirigidas por el Estado en cuestión.²⁷² En relación con el segundo aspecto, la Cámara sostuvo que la práctica estatal y judicial ha atribuido responsabilidad internacional en circunstancias donde el grado de control era menor y que el estándar del "control efectivo" sólo es aplicado en casos de individuos o grupos no organizados que actúan por cuenta del Estado, pero no en situaciones donde los grupos eran militares o paramilitares.²⁷³ Agregó que para atribuir responsabilidad internacional a tales grupos debe probarse el control general de un Estado sobre aquéllos, no sólomente equipándolo y financiándolo, sino también coordinándolo y ayudándolo en la planificación general de las actividades militares.²⁷⁴

Por último, la Cámara de Apelaciones del T. P. I. Y. remarcó también que existe un tercer estándar que el derecho internacional utiliza y es el de la asimilación de los individuos a un órgano del Estado en razón de su actual comportamiento dentro de la estructura de éste e independientemente de la existencia de instrucciones.²⁷⁵

La doctrina emanada de la decisión adoptada por la Cámara de Apelaciones del T. P. I. Y. al respecto, fue reiterada en las decisiones adoptadas posteriormente por los Tribunales de Primera Instancia.²⁷⁶ Esta oposición de tesis contradictorias en lo relativo al criterio aplicable para atribuir responsabilidad internacional a un Estado por actos contrarios al D. I. H. cometidos por órganos *de facto*, opuestas, por una parte, por la C. I. J., y, por la otra, la Cámara de Apelaciones del T. P. I. Y., ha sembrado la preocupación de quienes privilegian la unidad y consistencia del derecho internacional general y demuestra, una vez más, el límite formal de la jurisprudencia internacional en tanto que fuente del derecho internacional.

c. Crimen internacional de genocidio

La C. I. J., como pudo apreciarse en el primer capítulo de esta parte, tuvo algunas oportunidades en las cuales explayarse acerca de cuestiones atinentes a la Convención sobre Genocidio. En la primera de ellas, verificó que sus principios fundamentales de moral y de humanidad son reconocidos por las naciones civilizadas como obligatorios para todos los

²⁷⁰ *Prosecutor v. Dusko Tadic, Judgment, 15 July 1999, App. Ch. (Shahabuddeen, Cassese, Tieya, Nieto-Navia, Mumba), Case No: IT-94-1-A, par. 114.*

²⁷¹ *Prosecutor v. Dusko Tadic, Judgment, 15 July 1999, App. Ch. (Shahabuddeen, Cassese, Tieya, Nieto-Navia, Mumba), Case No: IT-94-1-A, par. 115 y ss.*

²⁷² *Prosecutor v. Dusko Tadic, Judgment, 15 July 1999, App. Ch. (Shahabuddeen, Cassese, Tieya, Nieto-Navia, Mumba), Case No: IT-94-1-A, par. 122.*

²⁷³ *Prosecutor v. Dusko Tadic, Judgment, 15 July 1999, App. Ch. (Shahabuddeen, Cassese, Tieya, Nieto-Navia, Mumba), Case No: IT-94-1-A, par. 124.*

²⁷⁴ *Prosecutor v. Dusko Tadic, Judgment, 15 July 1999, App. Ch. (Shahabuddeen, Cassese, Tieya, Nieto-Navia, Mumba), Case No: IT-94-1-A, par. 131.*

²⁷⁵ *Prosecutor v. Dusko Tadic, Judgment, 15 July 1999, App. Ch. (Shahabuddeen, Cassese, Tieya, Nieto-Navia, Mumba), Case No: IT-94-1-A, par. 141.*

²⁷⁶ Véanse *The Prosecutor v. Tihomir Blaskic, Judgment, 3 March 2000, T. Ch. (Jorda, Rodrigues, Shahabuddeen), Case No: IT-95-14-T, pars. 96 y ss; Prosecutor v. Zlatko Aleksovski, Judgment, 24 March 2000, App. Ch. (May, Mumba, Hunt, Tieya, Robinson), Case No: IT-95-14-1-A, pars. 137 y ss.; Prosecutor v. Kordic et al., Judgment, 26 February 2001, T. Ch. (May, Bennouna, Robinson), Case No. IT-95-14-2-T, par. 112.*

Estados incluso fuera de toda relación convencional. Asimismo, estableció el carácter universal de la condena al genocidio y la necesidad de la cooperación para erradicar el crimen.

En la primera sentencia por la que se condena un acusado por la comisión de actos de genocidio en el T. P. I. Y., el Tribunal de Primera Instancia reconoció, sirviéndose de la verificación efectuada por la C. I. J. al respecto, que la Convención sobre Genocidio persigue la salvaguardia de la existencia de grupos humanos enteros y confirma los más elementales principios de humanidad.²⁷⁷ En este caso, el General Krstic había sido acusado por genocidio, crímenes contra la humanidad y violaciones a las leyes y costumbres de la guerra, por su participación en el enclave musulmán de Srebrenica en los eventos que tuvieron lugar entre el 11 de julio de 1995 y el 1 de noviembre del mismo año.²⁷⁸

El T. P. I. R. tuvo el privilegio de pronunciar la primera sentencia por actos de genocidio que fuera realizada por un tribunal de la O. N. U.. La oportunidad, el *Caso Akayesu*. Akayesu, alcalde de la comuna de Taba, fue acusado inicialmente por actos de genocidio, complicidad en genocidio, crímenes contra la humanidad e incitación pública y directa a cometer genocidio. El Tribunal de Primera Instancia sostuvo que la Convención sobre Genocidio forma parte del D. I. H. tal como lo verificó la C. I. J. en la *Opinión Consultiva sobre el Efecto de las Reservas a la Convención sobre Genocidio* y en el Informe del Secretario General de la O. N. U. al Consejo de Seguridad para el Establecimiento de un Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia.²⁷⁹

Por cierto, parecería que la interpretación brindada por el Tribunal de Primera Instancia atribuye a la opinión consultiva de la C. I. J. un alcance mayor del que ésta última, según se ha explicado en la parte general, parece haberle dado al original: en palabras de ésta, los principios que subyacen dicha Convención forman parte del derecho internacional general, pero no la Convención misma. Sí es correcto, en cambio, que el Secretario General de la O. N. U. considera en el informe citado por la Cámara de Primera Instancia a la Convención sobre Genocidio toda como parte del derecho internacional consuetudinario.

Otros Tribunales de Primera Instancia, también interpretaron que la C. I. J. en ocasión de emitir la *Opinión Consultiva acerca del Efecto de las Reservas a la Convención sobre Genocidio* verificó el carácter consuetudinario de este instrumento internacional. Por ejemplo, en el *Caso Jelisić*, al cual se lo acusaba de 32 cargos de genocidio, violaciones a las leyes y costumbres de la guerra y crímenes contra la humanidad, el Tribunal de Primera Instancia interviniente declaró lo siguiente:

" El Artículo 4 del Estatuto adopta palabra por palabra las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada el 9 de diciembre de 1948 y en vigor desde el 12 de enero de 1951. Los conceptos de genocidio y de crímenes contra la humanidad surgieron como una reacción a los horrores cometidos por los nazis durante la segunda guerra mundial – el genocidio resultando particularmente asociado con el holocausto. Subsecuentemente, la Convención se ha convertido en uno de los más ampliamente aceptados instrumentos internacionales de derechos humanos. No hay duda alguna de que sus disposiciones poseen naturaleza consuetudinaria, tal como, además, fuera señalado por la CIJ en 1951."

²⁷⁷ *Prosecutor v. Radislav Krstic, Judgment, 2 August 2001, T. Ch. (Rodrigues, Riad, Wald), Case No.: IT-98-33-T*, par. 552.

²⁷⁸ *Prosecutor v. Radislav Krstic, Judgment, 2 August 2001, T. Ch. (Rodrigues, Riad, Wald), Case No.: IT-98-33-T*, par. 2.

²⁷⁹ Traducción del autor. Versión original: The Genocide Convention is undeniably considered part of customary international law, as can be seen in the opinion of the International Court of Justice on the provisions of the Genocide Convention, and as was recalled by the United Nations' Secretary-General in his Report on the establishment of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia." *The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Judgment, 2 September 1998, T. Ch. I (Lama, Aspegren, Pillay), Case No.: ICTR-96-4-T*, par. 494. Véanse también *The Prosecutor v. Georges Anderson Rutaganda, Judgment, T. Ch. I (Lama, Aspegren, Pillay), Case No. ICTR-96-3-T*, par. 46; *The Prosecutor v. Ignace Baglishema, Judgment, 7 June 2001, T. Ch. I (Mose, de Zeysa Gunawardana, Güney), Case No. ICTR-95-1A-T*, par. 54.

Resulta interesante señalar que el T. P. I. Y. en esta decisión entendió que la C. I. J. incluso clasificó tal crimen al nivel de *ius cogens* en razón de su extrema gravedad.²⁸⁰

En definitiva, independientemente de la controversia acerca de si la C. I. J. verificó como integrante del derecho internacional de carácter consuetudinario la totalidad de la Convención sobre Genocidio o tan sólo los principios fundamentales de moral y humanidad que en ella subyacen, lo importante para la hipótesis que se ha planteado en este trabajo es que el T. P. I. Y. se ha servido del derecho internacional general verificado por la C. I. J. en la opinión consultiva de marras. Además, tal razonamiento se ve reforzado ante la circunstancia de que otro punto de importancia de estos pronunciamientos de ambos Tribunales de Primera Instancia del T. P. I. Y. radica en que también interpretaron que la C. I. J. verificó el carácter de *ius cogens* de la Convención sobre Genocidio. Ello, sin perjuicio de la controversia que pudiera plantear tal afirmación, ya que, como se ha visto precedentemente, la C. I. J. no ha utilizado nunca la expresión "*ius cogens*" en relación con el crimen de genocidio, sino más bien señalando sus efectos *erga omnes*.²⁸¹

Por último, habrá de recordarse que en opinión de la C. I. J., según lo afirmara en la *Opinión Consultiva acerca de la Legalidad del Empleo o Amenaza de Armas Nucleares*, declaró que el crimen de genocidio se compone de un elemento subjetivo que se caracteriza por la específica intención. Un Tribunal de Primera Instancia del T. P. I. Y., al considerar que la definición del crimen de genocidio requiere un particular estado de ánimo o intención específica con respecto a las consecuencias del acto, trajo a colación la verificación de tal extremo efectuada por la C. I. J. en el asunto citado.²⁸²

²⁸⁰ Traducción del autor. Versión original: "Article 4 of the Statute takes up word for word the provisions of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (hereinafter "the Convention"), adopted on 9 December 1948 and in force as of 12 January 1951. The concepts of genocide and crimes against humanity came about as a reaction to the horrors committed by the Nazis during the Second World War - genocide being more particularly associated with the holocaust. Subsequently, the Convention has become one of the most widely accepted international instruments relating to human rights. There can be absolutely no doubt that its provisions fall under customary international law as, moreover, noted by the International Court of Justice as early as 1951. The Court went even further and placed the crime on the level of *jus cogens* because of its extreme gravity." *The Prosecutor v. Goran Jelusic, Judgment, 14 December 1999, T. Ch. (Jorda, Riad, Rodrigues), Case No.: IT-95-10-7*, par. 60, notas a pie de páginas omitidas. Véase también *Prosecutor v. Radislav Krstic, Judgment, 2 August 2001, T. Ch. (Rodrigues, Riad, Wald), Case No.: IT-98-33-T*, nota a pie de página 1409.

²⁸¹ *Prosecutor v. Radislav Krstic, Judgment, 2 August 2001, T. Ch. (Rodrigues, Riad, Wald), Case No.: IT-98-33-T*, par. 541.

²⁸² *Prosecutor v. Radislav Krstic, Judgment, 2 August 2001, T. Ch. (Rodrigues, Riad, Wald), Case No.: IT-98-33-T*, par. 571.

Conclusiones

Resulta ilustrativo señalar que la C. I. J. interpretó y aplicó normas internacionales relativas al D. I. H. y al crimen de genocidio, entre ambas, en cuatro asuntos contenciosos – *Asunto del Canal de Corfú*, *Asunto sobre la Barcelona Traction, Light & Power Company Limited*, *Asunto sobre las Actividades Militares y Paramilitares en y contra Nicaragua* y *Asunto relativo a la Aplicación e Interpretación de la Convención sobre Genocidio* – y en dos procedimientos consultivos – *Opinión Consultiva acerca del Efecto de las Reservas a la Convención sobre Genocidio* y *Opinión Consultiva acerca de la Legalidad del Empleo o Amenaza de Armas Nucleares* -, lo que le permitió elaborar paulatinamente una jurisprudencia en la materia.

Como puede observarse en este trabajo, la C. I. J. construyó su jurisprudencia relativa al D. I. H. y al crimen de genocidio en forma gradual, espaciada en el tiempo y, naturalmente, en la medida que los asuntos sometidos ante ella contuvieran cuestiones en las que aquellas normas resultaran pertinentes para la solución de la controversia planteada o la opinión consultiva requerida. En este contexto, se constata que sólo considerando las fechas del pronunciamiento de la *Opinión Consultiva sobre las Reservas a la Convención sobre Genocidio* y el de la sentencia en el *Asunto de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited* transcurrieron diecinueve años...

La jurisprudencia del órgano judicial principal de la O. N. U. respondió, en gran medida, a la necesidad de determinar reglas de derecho vinculadas con la aplicación de los principios fundamentales del D. I. H., por una parte, y, por la otra, con la aplicación de la Convención sobre Genocidio. Así, la C. I. J. constató que el D. I. H. se conforma por el llamado Derecho de La Haya – que fija los derechos y deberes de los beligerantes en cuanto a la conducción de las hostilidades y limita la elección de los medios para dañar al enemigo en un conflicto armado internacional – y el Derecho de Ginebra – que provee a la protección y salvaguardia de las víctimas de la guerra y de las personas que no toman parte en las hostilidades -.

Se destaca como una de los logros más importantes de la C. I. J. en lo que nos interesa, la verificación de las normas consuetudinarias que conforman los llamados principios generales – a los cuales también calificó como “cardinales” o “fundamentales”, según la oportunidad – del D. I. H., a saber: las consideraciones elementales de humanidad – aplicables en todo tipo de conflicto armado e incluso en tiempos de paz -; la obligación de respetar y hacer respetar las disposiciones de los Convenios de Ginebra de 1949; la protección de la población civil y de los bienes de carácter civil que establece la obligación de distinguir entre combatientes y población civil – aplicable en todo tipo de conflicto armado -; la prohibición de causar sufrimientos innecesarios a los combatientes y la cláusula Martens.

En lo que concierne al crimen de genocidio, se destaca que con la adopción de la Convención sobre Genocidio este crimen puede configurarse aún ante la inexistencia de un conflicto armado, es decir, puede cometerse incluso en tiempos de paz. De este modo, el crimen de genocidio constituye una especie de los crímenes de lesa humanidad y no un crimen de guerra. La C. I. J., por su parte, determinó que los principios fundamentales de moral y de humanidad obligan a todos los Estados aún fuera de toda relación convencional; que la prohibición de cometer actos de genocidio es una obligación internacional *erga omnes* de carácter dual, es decir, convencional y consuetudinaria; el carácter universal de la cooperación para erradicar el crimen y, por último, que uno de los elementos del crimen de genocidio es el subjetivo, que se caracteriza por la intención específica del autor de destruir, en todo en parte, alguno de los grupos protegidos por la Convención sobre Genocidio.

Otro aspecto sumamente importante que se ha demostrado a lo largo del presente trabajo, es la repercusión de la tarea de interpretación del sentido y alcance de ciertas normas consuetudinarias de D. I. H. y de aquellas relativas al crimen de genocidio en la práctica judicial de los T. P. I. Y. y T. P. I. R.. Así, se ha visto como las normas y principios generales

verificados en su oportunidad por la C. I. J., precedentemente enumerados, han sido útiles a estos dos tribunales internacionales para determinar la existencia de tales reglas de derecho.

Por consiguiente, los extremos expuestos claramente determinan la autoridad que emana de las decisiones judiciales adoptadas por la C. I. J., órgano judicial principal de la O. N. U.. Sin embargo, también se ha demostrado en este trabajo los límites formales inherentes de la jurisprudencia internacional en tanto que medio auxiliar para la determinación de una regla de derecho. La jurisprudencia contradictoria entre la C. I. J. y el T. P. I. Y. en relación con el criterio legal aplicable en derecho internacional a los fines de determinar la responsabilidad internacional de un Estado por los actos ilícitos cometidos por órganos *de facto*, es una clara muestra de la carencia de una relación jerárquica entre los distintos tribunales judiciales internacionales y de los resultados indeseados que esto puede ocasionar. En este contexto, debe tenerse presente que en la actualidad tanto la C. I. J. como el T. P. I. Y. están ejerciendo sus jurisdicciones sobre hechos producidos en el territorio de la ex Yugoslavia y que a su vez un pronunciamiento dictado por uno de estos tribunales puede influir en el otro. Por consiguiente, sería lamentable pensar en que una situación similar a la precedentemente expresada pudiera repetirse en un futuro próximo. Si bien se reconoce la inexistencia de relaciones jerárquicas entre los tribunales internacionales, una eventual serie de decisiones contradictorias como la precedentemente aludida podría minar la confianza depositada por la comunidad internacional, lo que sería lamentable. Por tanto, se concluye afirmado que, en aras de preservar la unidad del derecho internacional y evitar su fragmentación, la jurisprudencia de los tribunales internacionales debe ser homogénea. El mejor punto de referencia del que éstos pueden valerse para lograr tal propósito lo constituye, sin duda, la actividad jurisprudencial de la C. I. J. la cual, importante es recordarlo, es el órgano judicial principal de la O. N. U..

Lista de casos

A. Sentencias, Opiniones Consultivas y Ordenanzas de la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia

- *Affaire relative á certains intérêts allemands en Haute-Silésie Polonaise (fond)*, Arrêt N° 7, CPJI, Série A 1-7, 1923-26.
- *Affaire du Détroit de Corfou (fond)*, Arrêt du 9 avril 1949, CIJ Recueil, 1949, p. 4.
- *Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide*, Avis Consultatif du 28 mai 1951, CIJ Recueil, 1951, p. 15.
- *Affaire Nottebohm (deuxième phase)*, Arrêt du 6 avril 1955 : CIJ Recueil 1955, p. 4.
- *Affaire relative à l'incident aérien du 27 juillet 1955 (Israël c. Bulgarie)*, Exceptions préliminaires, Arrêt du 26 mai 1959, CIJ Recueil 1959, p. 127.
- *Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)*, Merits, ICJ Reports 1962, p. 4.
- *Affaires du Sud-Ouest Africain (Éthiopie c. Afrique du Sud; Libéria c. Afrique du Sud)*, deuxième fase, CIJ Recueil 1966, p. 4.
- *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited*, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p.3.
- *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Merits, Judgment, ICJ Reports 1986, p. 14.
- *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, Provisional Measures, Order of 8 April 1993, ICJ Reports 1993, p. 3.
- *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, Advisory Opinion, ICJ Reports 1996, p. 226.
- *Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide*, exceptions préliminaires, arrêt, CIJ Recueil 1996, p. 595.

B. Sentencias y Ordenanzas del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia

- *Prosecutor v. Dusko Tadic*, Decision on the Defence Motion on Jurisdiction, 10 August 1995, T. Ch., Case No.: IT-94-1-T.
- *The Prosecutor v. Dusko Tadic*, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, App. Ch., Case No. IT-94-1-AR72.
- *Prosecutor v. Ivica Rajic, a/k/a Víctor Andric*, Review of the Indictment Pursuant Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence, 13 September 1996, T. Ch., Case No.: IT-95-12-R61.
- *Prosecutor v. Dusko Tadic*, Opinion and Judgment, 7 May 1997, Case No. IT-94-1-T.
- *Prosecutor v. Tihomir Blaskic*, Judgment on the Request of the Republic of Croatia for Review of the Decision of Trial Chamber II of 18 July 1997, 29 October 1997, App. Ch., Case No: IT-95-14-AR108bis.
- *Prosecutor v. Anto Furundzija*, Judgment, 10 December 1998, T. Ch., Case No.: IT-95-17/1-T.
- *Prosecutor v. Zlatko Aleksvoski*, Judgment, 25 June 1999, T. Ch., Case No.: IT-95-14/1-T.
- *Prosecutor v. Dusko Tadic*, Judgment, 15 July 1999, App. Ch., Case No.: IT-94-1-A.
- *The Prosecutor v. Goran Jelusic*, Judgment, 14 December 1999, T. Ch., Case No.: IT-95-10-7.
- *The Prosecutor v. Zoran Kupreskic et al.*, Judgment, 14 January 2000, T. Ch., Case No. IT-95-16-T.
- *The Prosecutor v. Tihomir Blaskic*, Judgment, 3 March 2000, T. Ch., Case No: IT-95-14-T.
- *Prosecutor v. Zlatko Aleksovski*, Judgment, 24 March 2000, App. Ch., Case No: IT-95-14/1-A.
- *Prosecutor v. Zejnil Delalic et al (Celebici Case)*, Judgment, 20 February 2001, App. Ch. Case No IT-96-21-A.

- Prosecutor v. Slobodan Milosevic – Bosnia and Herzegovina -, Indictment, 22 November 2001, Case N°: IT-01-51
- Prosecutor v. Radislav Krstic, Judgment, 2 August 2001, T. Ch., Case No: IT-98-33-T.

C. Sentencias y decisiones del Tribunal Penal Internacional para Ruanda

- The Prosecutor v. Joseph Kanyabashi, Decision on the Defence Motion on Jurisdiction, 18 June 1997, T. Ch., Case No: ICTR-96-15-T.
- The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Judgment, 2 September 1998, Case No.: ICTR-96-4-T.
- The Prosecutor v. Georges Anderson Rutaganda, Judgment, 27 January 1999, T. Ch. I, Case No. ICTR-96-3-T.
- Jean-Bosco Barayagwiza v. The Prosecutor, Decision, 3 November 1999, App. Ch., Case No. ICTR-97-19-AR72.
- Le Procureur v. Clément Kayishema et Obed Ruzindana, Motifs de l'Arrêt, 1 juin 2001, Chambre d'Appel, TPIR: 95-1-A.
- The Prosecutor v. Ignace Baglishema, Judgment, 7 June 2001, T. Ch. I, Case No. ICTR-95-1A-T.

Bibliografía

Abi-Saab, George, "The Court & the Bomb: A case of Mutual Deterrence?", *Transnational Law & Contemporary Problems, Journal of the University of Iowa College of Law*, Symposium Nuclear Weapons, The World Court, and Global Security, Vol. 7, number 2, Fall 1997.

Abi-Saab, George, "Les sources du Droit international: essai de déconstruction", *El Derecho Internacional en un mundo en transformación*, Volumen I, Montevideo, Uruguay, Fondo de Cultura Universitaria, 1994.

Abi-Saab, Rosemary, "Les conflits internes aujourd'hui", *Les multiples aspects des Relations internationales – Etudes à la mémoire du Professeur Jean Siotis* -, Bruxelles, Ed. Bruylant, 1995.

Acosta Estévez, José, "Normas del *ius cogens*, efecto *erga omnes*, crimen internacional y la teoría de los círculos concéntricos", *Anuario de Derecho Internacional*, XI, Universidad de Navarra, 1995.

Aguilar Mawdsley, Andrés, "La Jurisdicción Contenciosa de la Corte Internacional de Justicia a la Luz de la Jurisprudencia de este Alto Tribunal", *Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas*, Universidad Central de Venezuela, año XLI, nº 99, 1996.

Akande, Dapo, "Nuclear Weapons, Unclear Law? Deciphering the Nuclear Weapons Advisory Opinion of the International Court", en AAVV, *The British Year Book of International Law 1997*, XLVIII, Oxford University Press.

Akehurst, Michael, "The Hierarchy of the Sources of International Law", En *The British Yearbook of International Law 1974-1975*, XLVII, Oxford at the Clarendon Press, 1977.

Almond Jr., Harry H., "The Military Activities Case: New Perspectives on the International Court of Justice and Global Public Order", *The International Lawyer*, Vol. 21, number 1, 1987.

Anzillotti, Dionisio, *Cours de Droit international*, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1929, premier volume.

Barberis, Julio, "La jurisprudencia internacional como fuente de Derecho de Gentes según la Corte de La Haya", *Max Planck - Institut Zeitschrift fur ausländisches öffentliches recht und volkerrecht*, band 31, 1971.

Barboza, Julio, "From Chrysalis to Butterfly", en C.A. Armas Barea et al. (Ed.), *Liber Amicorum José María Ruda*, The Hague, London, Boston, Kluwer Law International, 2000.

Bassiouni, Cherif, "International crimes: *ius cogens* and *obligatio erga omnes*", *Law and Contemporary Problems*, Vol. 59, number 4, autumn 1996.

Bekker, Peter H. F., "Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons", en Peter H. F. Bekker (ed.), *Commentaries on World Court Decisions (1987-1996)*, The Hague, London, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 1998.

Bekker, Peter H. F., "Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia-Herzegovina v. Yugoslavia), Preliminary Objections", en Peter H. F. Bekker (ed.), *Commentaries on World Court Decisions (1987-1996)*, The Hague, London, Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 1998.

Bernhardt, Rudolf, *Encyclopedia of Public International Law*, North-Holland, Elsevier, 1995, Vol. 2.

Boisson de Chazournes, Laurance, "The collective responsibility of states to ensure respect for humanitarian principles", en Arie Bloed et al. (ed.), *Monitoring Human Rights in Europe – Comparing International Procedures and Mechanisms*, Dordrecht, Boston, London, The International Helsinki Federation for Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers.

Brownlie, Ian, *Principles of Public International Law*, fifth edition, Oxford, Clarendon Press, 1998.

Burroughs, John, *The (Il)legality of Threat or Use of Nuclear Weapons –A Guide to the Historic Opinion of the International Court of Justice-*, Münster, Lit Verlag, 1997.

Bruderlein, Claude, "De la coutume en droit international humanitaire", *Revue Internationale de la Croix Rouge*, n° 792, Novembre-Décembre 1991.

Cançado Trindade, Antonio, "Aproximaciones o convergencias entre el derecho internacional humanitario y la protección internacional de los derechos humanos", *Seminario Interamericano sobre la Protección de la Persona en Situaciones de Emergencia*, San José de Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1996.

Cassese, Antonio, "The Martens Clause: half a loaf or simply pie in the sky?", *European Journal of International Law*, vol. 11.

Charlesworth, H. C. M., "Customary International Law and the Nicaragua Case", en D. W. Greig (ed.), *Australian Year Book of International Law*, Vol. 11, Faculty of Law, The Australian National University, 1991.

Charney, Jonathan I., "International lawmaking - Article 38 of the ICJ Statute reconsidered", en Jost Delbrück et al. (ed.), *New trends in international lawmaking - International "legislation" in the public interest. Proceedings of an international symposium of the Kiel Walter -Schücking- Institut of International Law*, Berlin, March 6 to 8, 1996.

Charpentier, Jean, "Cour Internationale de Justice. Affaire de la Barcelona Traction, Arrêt du 5 février 1970", en *Annuaire Français de Droit International*, vol. XVI, Centre National de la Recherche Scientifique, 1970.

Chesterman, Simon, "The International Court of Justice, Nuclear Weapons & the Law", *Netherlands International Law Review*, Vol. XLIV, Issue 2, 1997.

Chimni, B. S., "The International Court and the Maintenance of Peace and Security", *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 35, 1986.

Condorelli, Luigi, "La CIJ sous le poids des armes nucléaires", *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 823, janvier-février 1997.

Cour Internationale de Justice (Ed.), *La Cour internationale de Justice*, quatrième édition, La Haye, 1996.

Cour Internationale de Justice (Ed.), *Actes et documents relatif à l'organisation de la Cour, Charte des Nations Unies, Statut et Règlement de la Cour et autres textes*, n° 5, 1989.

Craven, Matthew, "The Genocide Case, the Law of Treaties and State Succession", en *The British Year Book of International Law 1997*, LXVIII, Oxford University Press.

Cuadra, Héctor, "La contribución de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia al Derecho Internacional", *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, UNAM, 5, 1972.

Czaplinski, Wladislaw, "Sources of International Law in the Nicaragua Case", *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 38, 1989.

Daniele, Luigi, "L'apport de la deuxième ordonnance de la Cour internationale de Justice sur les mesures conservatoires dans l'affaire Bosnie-Herzégovine contre Yougoslavie (Serbie et Monténégro)", *Revue Générale de Droit international Public*, T. XCVIII, 1994.

David, Eric, *Principes de Droit des Conflits Armés*, Bruxelles, Bruylant, 1999.

David, Eric, "L'Avis de la CIJ sur la licéité des armes nucléaires", *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 823, janvier-février 1997.

Degan, V.D., *Sources of International Law*, The Hague, Boston, London, Martinus Nijhoff Publishers, 1997.

Deyra, Michel, *Droit international humanitaire*, Paris, Gualino Éditeur, 1998.

Diez de Velasco, Manuel, *Instituciones de Derecho Internacional Público*, Madrid, Tecnos, 1997, Tomo I.

Dominicé, Christian, "La jurisprudence de la Cour internationale de Justice en 1996", *Revue Suisse de Droit international et de Droit européen*, 1/1998.

Doswald-Beck, Louise, "Le Droit international Humanitaire et l'Avis de la CIJ", *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 823, janvier-février 1997.

Dupuy, Pierre-Marie, "Les 'considérations élémentaires d'humanité' dans la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice", en *Mélanges en l'Honneur de Nicolas Valticos – Droit et Justice* -, Paris, Pedoné, 1999.

Dupuy, Pierre-Marie, "Humanité, communauté et efficacité du droit", en *Humanité et Droit International, Mélanges René-Jean Dupuy*, Paris, Pedoné, 1991.

Espaliú Berdud, Carlos, *Desarrollos Jurisprudenciales y Práctica Reciente en la Jurisdicción Contenciosa de la Corte Internacional de Justicia*, Madrid, Dykinson, 2000.

Fagan Ginger, Ann, "The Opinion on Illegality of Nuclear Weapons is Being Enforced", en *Nuclear Weapons are Illegal –The historic opinion of the World Court and how it will be enforced-*, s.l., The Apex Press, 1998.

Falk, Richard, "International law and the World Court: A Historic Encounter", *American Journal of International Law*, volume 91, 1997.

Falk, Richard, "The Nuclear Weapons Advisory Opinion and the New Jurisprudence of Global Civil Society", *Transnational Law & Contemporary Problems*, Vol. 7, n° 2, fall 1997.

Finch, George A., "Les sources modernes du Droit international", en *Recueil des Cours de l'Académie de Droit international*, 1935, III, 53.

Fujita, Hisakazu, "Au sujet de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice rendu sur la licéité des armes nucléaires", *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 823, janvier-février 1997.

Gill, Terry D., "Litigation Strategy in the Nicaragua Case at the International Court", en Yoram Dinstein (ed.), *International Law at a Time of Perplexity - Essays in Honour of Shabtai Rosenne*, Dordrecht, Boston, London, Martinus Nijhoff Publishers, 1989.

Gray, Christine, "Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Yugoslavia)", *The International and Comparative Law Quarterly*, vol. 46, 1997.

Greenwood, Christopher, "L'avis consultatif sur les armes nucléaires et la contribution de la Cour internationale de Justice au droit internationale humanitaire", *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 823, janvier-février 1997.

Greig, D. W., "Nicaragua and the United States: Confrontation over the Jurisdiction of the International Court", en Ian Brownlie et al. (ed.), *The British Year Book of International Law*, 1991, LXII, Oxford, Oxford University Press, 1992.

Grief, Nicholas, "Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons", *The International and Comparative Law Quarterly*, vol. 46, 1997.

Grisel, Etienne, "L'arrêt de la Cour internationale de Justice dans l'affaire de la Barcelona Traction (second phase): problèmes de procédure et de fond", *Annuaire suisse de droit de droit international*, XXVII, 1971.

Gros, André, "La Cour internationale de Justice 1946-1986: les réflexions d'un juge", en Yoram Dinstein (ed.), *International Law at a Time of Perplexity - Essays in Honour of Shabtai Rosenne*, Dordrecht, Boston, London, Martinus Nijhoff Publishers, 1989.

Guillaume, Gilbert, "The Future of International Judicial Institutions", *The International and Comparative Law Quarterly*, 44, 1995.

Gutiérrez Posse, Hortensia D.T., "La Contribución de la jurisprudencia de los Tribunales Penales Internacionales a la evolución del ámbito material del derecho internacional humanitario – los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio -", 1 de febrero de 2001, *sitio web del Comité Internacional de la Cruz Roja en español (www.icrc.org)*.

Gutiérrez Posse, Hortensia D.T., *Moderno Derecho Internacional y Seguridad Colectiva*, Buenos Aires, Zavalía, 1995.

Higgins, Rosalyn, "Aspects of the case concerning the Barcelona Traction, Light & Power Company, Ltd.", *Virginia Journal of International Law*, vol. 11, n° 1, 1970-71.

Hoyos Lemus, Félix, *La Corte Internacional de La Haya y el Litigio Nicaragua contra E.E.U.U.*, 1ra. Edición, Empresa Editorial Universidad Nacional de Colombia, 1991.

Il Yung Chung, *Legal Problems Involved in the Corfu Channel Incident*, Genève, Librairie Droz, Paris, Librairie Minard, 1959.

Jennings, Robert, "The Role of the International Court of Justice", *The British Year Book of International Law* 1997, LXVIII, Oxford University Press.

Jiménez de Aréchaga, Eduardo, "Chapitre XIV, Article 92", en Jean-Pierre Cot et al. (ed.), *La Charte des Nations Unies, Commentaire article par article*, 2e édition revue et augmentée, Economica, 1991.

Jiménez de Aréchaga, Eduardo, "Balance sobre la actuación de la Corte Internacional de Justicia en los cuarenta años de su funcionamiento", *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense*, n° 13, abril, 1987.

Kelsen, Hans, *Principles of International Law*, second edition, New York, Chicago, San Francisco, Toronto, London, Ed. Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1966.

Kristjánsdóttir, Edda, "The Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons under Current International Law: The Arguments Behind the World Court's Advisory Opinion", *Journal of International Law and Politics*, Vol. 30, fall 1997- winter 1998, n° 1-2, 1998.

Lachs, Manfred, "Thoughts on the Recent Jurisprudence of the International Court of Justice", *Emory International Law Review*, Vol. 4, spring 1990, n° 1, 1990.

Lanfranchi, Marie-Pierre et al., *La Licéité de l'emploi d'armes nucléaires devant la Cour internationale de Justice*, Centre d'Etudes et de Recherches Internationales et Communautaires, Université d'Aix Marseille III, Economica, 1997.

Lang, Caroline, *L'Affaire Nicaragua/Etats-Unis devant la Cour Internationale de Justice*, Paris, Bibliothèque de Droit international, dirigé par Charles Rousseau, Librairie Générale de Droit et Jurisprudence, 1990, T. 100.

Lauterchpat, Sir Hersch, *The Development of International Law by the International Court*, London, Stevens & Sons Limited, 1958.

Leanza, Umberto et al., "Usa e minaccia di uso di armi nucleari in due recenti pareri della Corte Internazionale di Giustizia", *La Comunità Internazionale*, trimestrale della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, vol. LII, 4, Scientifica, 1997.

Mahmoud, M. A., *Bosnia and Herzegovina a case of approved genocide – The legal qualification of the position of the Security Council and the International Court of Justice in the case of Bosnia and Herzegovina*, paper, The Hague, 1993.

Manin, V.S., "The International Court and the Humanitarian Law of Armed Conflict", *The Indian Journal of International Law*, Vol. 39, 1999.

Matheson, Michael, "The Opinions of the International Court of Justice on the Threat or Use of Nuclear Weapons", *American Journal of International Law*, Vol. 91, 1997.

McCormack, Timothy L.H., "Un non liquet sur les armes nucléaires – La Cour internationale de Justice élude l'application des principes généraux du droit international humanitaire", *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 823, janvier-février 1997.

McNeill, John H., "L'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en l'affaire des armes nucléaires – Première évaluation", *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 823, janvier-février 1997.

Mendelson, Maurice, "The International Court of Justice and the Sources of International Law", en *Fifty Years of the International Court of Justice, Essays in honour of Sir Robert Jennings*, Grotius Publications, Cambridge University Press, 1996.

Miaja, A., *El Principio de efectividad en Derecho Internacional*, Valladolid, 1958.

Millet, Anne-Sophie, "Les avis consultatifs de la Cour Internationale de Justice du 8 juillet 1996", *Revue Générale de Droit International Public*, T. CI-1997.

Mohr, Manfred, "Avis consultatif de la Cour Internationale de Justice sur la licéité de l'emploi d'armes nucléaires – Quelques réflexions sur ses point forts et ses points faibles", *Revue Internationale de la Croix-Rouge*, 823, janvier-février 1997.

Moncayo, Guillermo et al., *Derecho Internacional Público*, Buenos Aires, Víctor de Zavalía, 1977, T. 1.

Mosler, Hermann, "The International Society as a Legal Community", en *Recueil des Cours*, Académie de Droit International, 1974, IV.

Oda, Shigeru, *The International Court of Justice viewed from the bench (1976/1993)*, en *Recueil des Cours de l'Académie de Droit International*, Dordrecht, Boston, London, Martinus Nijhoff Publishers, 1995, T. 244, 1993/VII, Vol. 244.

Ouchi, Kazuomi, "The Threat or Use of Nuclear Weapons: Discernible Legal Policies of the Judges of the International Court of Justice", *Connecticut Journal of International Law*, Vol. 13, n° 1, winter 1998.

Parry, Clive, *The Sources and Evidences of International Law*; Manchester University Press/USA, Oceana Publications Inc., 1965.

Podestá Costa, Luis A. et al., *Derecho Internacional Público*, segunda reimpression de la edición actualizada 1985, Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1996, T. 1.

Reisman, W. Michael, "Respecting One's Own Jurisprudence: A Plea to the International Court of Justice", *American Journal of International Law*, Vol. 83, 1987.

Rijkema, P. P., "Customary International Law in the Nicaragua Case", *Netherlands Yearbook of International Law*, vol. XX, 1989.

Rodley, Nigel S., "Human Rights and Humanitarian Intervention: the Case Law of the World Court", *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 38, 1989.

Rodríguez Carrión, Alejandro J., "El Derecho Internacional en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el asunto Nicaragua-Estados Unidos", en *Cursos de Derecho Internacional de Vitoria Gasteiz*, Servicio Editorial Universidad del País Vasco, 1987.

Ronzitti, Natalino, "Missile Warfare and Nuclear Weapons - An Appraisal in the Light of the 1996 International Court of Justice Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons", *Israel Book on Human Rights*, 27, 1997.

Ronzitti, Natalino, « Le Droit humanitaire applicable aux conflits armés en mer », en *Recueil des Cours de l'Académie de Droit International*, Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff Publishers, 1994, T. 242, 1993/IV, Vol. 242.

Ronzitti, Natalino, "The Right of Self-Defence and the Law of Naval Warfare", *Syracuse Journal of International Law and Commerce*, vol. 14, n° 2, winter 1987.

Ros, N., « La Cour Internationale de Justice et le développement du droit international », en *Thesaurus Acroasum*, Thessalonica, Institut of Public International Law and International Relations of Thessaloniki, 1998, Vol. XXIII.

Rosenne, Shabtai, *The Law and Practice of the International Court 1920-1996*, The Hague, Boston, London, Martinus Nijhoff Publishers, 1997, Volumes I-IV.

Rosenne, Shabtai, "The Nuclear Weapons Advisory Opinions of 8 July 1996", *Israel Yearbook on Human Rights*, Vol. 27, 1997.

Rosenne, Shabtai, "Article 59 of the Statute of the International Court of Justice revisited", *El Derecho Internacional en un mundo en transformación*, Montevideo, Uruguay, Fondo de Cultura Universitaria, 1994, Vol. II.

Schabas, William, *An Introduction to the International Criminal Court*, s.l., Cambridge University Press, 2001.

Schabas, William, *Genocide in International Law*, s.l., Cambridge University Press, 2000.

Shahabudeen, Mohamed, *Precedent in the World Court*, s.l., Grotius Publications, Cambridge University Press, 1996.

Shaw, Malcolm N., "The International Court of Justice: A Practical Perspective", *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 46, 1997.

Shaw, Malcolm N., "Genocide and International Law", en Yoram Dinstein (ed.), *International Law at a Time of Perplexity - Essays in honour of Shabtai Rosenne*, Dordrecht, Boston, London, Martinus Nijhoff Publishers, 1989.

Schwarzeneger, George, *International Law as Applied by International Courts and Tribunals*, third edition, London, 1957, Vol. I.

Schwebel, Stephen M., "The inter-active influence of the International Court of Justice and the International Law Commission", en C.A Armas Barea et al., *Liber Amicorum José María Ruda*, The Hague, Boston, London, Kluwer Law International, 2000.

Schwebel, Stephen M., "The impact of the International Court of Justice" en *Boutros Boutros-Galhi, Amicorum Discipulorumque Liber*, Bruxelles, Bruylant, 1998, Vol. I.

Schwebel, Stephen M., "Human Rights in the World Court", *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 24, nº 5, 1991.

Simma, Bruno (Ed.), *The Charter of the United Nations, A Commentary*, s.l., Oxford University Press, 1994.

Sorensen, Max, *Les sources du Droit international*, Copenhagen, Einar Munksgard, 1946.

Swinarski, Cristophe, *Principales Nociones e Institutos del Derecho Internacional Humanitario Como Sistema Internacional de Protección de la Persona Humana*, San José, Costa Rica, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1990

Sychold, Martin M., "Ratification of the Genocide Convention. The legal effects in light of reservations and objections" *Revue Suisse de Droit international et de Droit européen*, 4/1998.

Van Boven, Theo, "Reliance on Norms of Humanitarian Law by United Nations' Organs", en Astrid Delissen et al., *Humanitarian Law of Armed Conflict-Challenges Ahead, Essays in Honour of Frits Kalshoven*, Dordrecht, Boston, London, T.M.C. Asser Instituut, Martinus Nijhoff Publishers, 1991.

Verwey, Wil, "The International Court of Justice and the Legality of Nuclear Weapons: Some Observations", en Karel Wellens (ed.) *International Law: Theory & Practice: Essays in Honour of Eric Suy*, The Hague, Boston, London, Martinus Nijhoff Publishers, 1998.

Vinuesa, Raúl Emilio, "Interface, Correspondence and Convergence of Human Rights and International Humanitarian Law", *Yearbook of International Humanitarian Law*, The Hague, T.M.C. Asser Press, 1998, Vol. 1.

Vinuesa, Raúl Emilio, "La formación de la costumbre en el Derecho Internacional Humanitario", 30 de julio de 1998, *sitio web en español del Comité Internacional de la Cruz Roja* (www.icrc.org).

Walden, Raphael M., "Customary International Law: A Jurisprudential Analysis", *Israel Law Review*, 13, 1978.

Warner, Daniel, "The Nuclear Weapons Decision by the International Court of Justice: Locating the Raison behind Raison d'Etat", *Millennium Journal of International Studies*, Vol. 27, n° 2, 1998.

Weckel, Philippe, "Cour International de Justice: affaires relatives à la licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Allemagne et autres), Ordonnance du 2 juin 1999". En *Revue Générale de Droit international Public*, 1993/3.

Weston, Burns H., "Nuclear Weapons and the World Court: Ambiguity's Consensus", *Transnational Law & Contemporary Problems*, Vol. 7, n° 2, fall 1997.

Wylér, Eric, "Les rapports entre exceptions préliminaires et fond du litige à la lumière de l'arrêt de la CIJ du 11 juillet 1996 dans l'affaire du génocide", *Revue Générale de Droit International Public*, Tome 105, 2001.